

entre voces

REVISTA DEL GRUPO DEMOCRACIA Y DESARROLLO LOCAL

- El Imperio no negocia, impone...
- En Hong Kong se salvó la OMC
- Sociedad civil y partidos:
Más allá del corporativismo
- Lula y los Movimientos Sociales:
Encuentros y desencuentros
- La Argentina:
Movimientos sociales e izquierdas
- El Zapatismo
como Movimiento Social
- “Evo Presidente” de Bolivia.
Avances y otros retos
- De la calle al Palacio:
los desafíos de la izquierda boliviana



Grupo
Democracia y
Desarrollo Local



ENERO 2006

número
\$ 2.00 USD

CINCO

Editorial	
<i>Juan Pablo Muñoz, Coordinador GDDL</i>	3
Entre tanto	
¿Hacia dónde vamos? 2006 un año para disputar futuro	
<i>Betty Tola Bermeo</i>	6
El Imperio no negocia, impone...	
(Inflexibilidad de EEUU en los acuerdos de libre comercio)	
<i>Fernando Buendía G.</i>	11
En Hong Kong se salvó la OMC	
<i>María Fernanda Espinosa</i>	16
Entre líneas	
Contribución al debate sobre los movimientos sociales	
<i>Mario Unda</i>	19
Sociedad civil y partidos: Más allá del corporativismo	
<i>Fernando Bustamante P.</i>	25
Movimientos Sociales: Hipótesis para el debate	
<i>Marc Saint Upéry</i>	31
Movimiento indígena: radicales o moderados	
<i>Pablo Ospina Peralta</i>	35
Algunos aportes desde el movimiento indígena a las concepciones sobre democracia en el Ecuador	
<i>Ana María Larrea M.</i>	39
Lula y los Movimientos Sociales. Encuentros y desencuentros	
<i>Emir Sader</i>	42
Brasil: crecimiento social	
<i>Carlito Merse</i>	47
La Argentina: Movimientos sociales e izquierdas	
<i>Maristella Svampa</i>	49
“Chávez deberá escoger entre el MVR y las bases”	
<i>Entrevista a Roland Denis</i>	54
“Los sectores populares que no tenían voz ahora forman parte de la vida política venezolana”	
<i>Entrevista a Edgardo Lander</i>	58
A diez meses del gobierno progresista uruguayo: ¿Es sustentable un gobierno progresista?	
<i>Marcelo Rosales</i>	61
Entre vistas	
El Zapatismo como movimiento social	
<i>Entrevista a Bernard Duterme</i>	66
Entre pueblos	
De la calle al Palacio: los desafíos de la izquierda boliviana	
<i>Pablo Stefanoni</i>	69
“Evo Presidente” de Bolivia. Avances y otros retos	
<i>Esteban Ticona Alejo</i>	73

Coordinador General del GDDL

Juan Pablo Muñoz

Consejo Editorial

GDDL

Comité Editorial

Fernando Buendía
Virgilio Hernández
Pablo Ospina
Marc Saint Upéry

Edición General

Virgilio Hernández

Fotografía:

Santiago González B.
Archivo

Diseño y Diagramación

Nora Altuna

Diseño de Portada y Contraportada

Diego Guachilema

Impresión

Obreval Impresores
Enero 2006

*Esta es una publicación del
Grupo Democracia y Desarrollo Local*

“Entre voces” pretende ser un espacio de debate y discusión; por ello, las opiniones vertidas por los autores de los artículos son de su responsabilidad y no reflejan, necesariamente, la posición del GDDL ni de las instituciones participantes en el mismo.

Inauguramos el 2006 con un tema central que consideramos indispensable particularmente en este año electoral: los movimientos sociales y su relación con la democracia y los desafíos de la izquierda en América Latina. Lo hacemos tomando en cuenta las relaciones entre la sociedad civil y los partidos políticos; entre los movimientos sociales y la política; la acción extrainstitucional y la institucional; los discursos "radicales" y los "moderados". Proponemos un acercamiento no solo a la realidad ecuatoriana sino a los procesos que se vienen dando en Argentina, Brasil, Bolivia, México, Venezuela y Uruguay.

Para ambientar el debate, Mario Unda introduce un análisis profundo de los movimientos sociales situándoles en el contexto de la globalización neoliberal, las modificaciones en la estructura de clases, la redefinición de la dependencia y la propia democracia, puesto que, según nos dice, los movimientos sociales cuestionan la comprensión de la política y resitúan la actualidad de las discusiones estratégicas en la perspectiva de la reconstrucción de una política revolucionaria. Marc Saint Upéry en su acostumbrado tono polémico se cuestiona sobre las posibilidades de los movimientos sociales, al tiempo de proponer hipótesis para su comprensión. Fernando Bustamante, también desde Ecuador, se pregunta por la crisis de los partidos políticos y el rol de la sociedad civil frente a la política. ¿Es posible prescindir de los partidos? ¿Puede la sociedad civil en forma directa suplir ese rol? La respuesta parece ser que el problema no son los partidos sino la falta de los mismos y su reemplazo por una especie de clubes que no trascienden los intereses corporativos.

Maristella Svampa y Emir Sader, desde Argentina y Brasil, respectivamente, se suman al análisis; resaltando la necesidad de discutir sobre el rol de los partidos y sus relaciones con las organizaciones sociales. Ambos dan cuenta de interesantes procesos de acumulación social y política en sus países, que inciden y que a la vez son afectados por las lógicas de los gobiernos "afines". Nos colocan, además, el problema de la fragmentación de los movimientos sociales; así como la dificultad de generar alianzas en perspectiva de constituir fuerzas hegemónicas desde los sectores populares.

Gobernar desde la izquierda en los actuales escenarios puede, entonces, fortalecer la acumulación social y política pero puede también afectarla al no cumplir con las expectativas generadas. Esto lo abordan de un lado Emir Sader y Carlos Merss de Brasil, como Edgardo Lander y Roland Denis de Venezuela. Sea en el caso de Brasil como en el de Venezuela las lecturas de los articulistas y entrevistados son polémicas; si bien hay algunas coincidencias los contrastes son importantes sobre los gobiernos de Lula y de Chávez.

Lula aparentemente ha generado decepciones; sin embargo los movimientos sociales consideran que su derrota en las siguientes elecciones significaría el regreso de la derecha neoliberal. Por eso mantienen el diálogo con el gobierno pero a la vez ejercen presiones con movilizaciones, tomas de tierra y otras acciones extra institucionales. Este escenario ha permitido reafirmar la necesidad de autonomía entre los movimientos sociales y los partidos, a la vez que una simultánea voluntad de convergencias entre ellos.

Chávez es cuestionado por su estilo populista, incluso por posibles niveles de corrupción entre sus allegados; pero, de otro lado, es reconocido por los esfuerzos hacia un rumbo distinto al neoliberalismo, a través de significativas

políticas sociales, en salud, en educación; y, sobre todo, por haber activado un tejido social comprometido con la transformación del país. Un problema serio parece ser la dificultad de lograr una expresión política no caudillista, ni mesiánica; un partido de masas programático y que practique una verdadera democracia interna.

A los procesos de Argentina, Brasil, Venezuela, se agrega el caso de Uruguay que impone la pregunta sobre qué significa ser un gobierno de izquierda ahora. Marcelo Rosales regresa al debate centenario entre reforma o revolución. En Uruguay no habría un gobierno de izquierda sino un progresismo, que no afecta al poder, que no interviene en las desiguales relaciones entre el capital y el trabajo. Tesis secular que dificulta una mirada de las especificidades históricas, de las correlaciones de fuerzas, de los escenarios internacionales en los cuales hay que hacer hoy gobiernos de izquierda.

Pablo Ospina nos invita a reflexionar precisamente sobre qué entender por "radicalidad" y "moderación" en la acción política y en la gestión del desarrollo; lo hace a partir de las experiencias de las organizaciones indígenas de Ecuador en elecciones y en proyectos. La ejecución de proyectos o la participación electoral pueden ser funcionales al modelo vigente o pueden contribuir al cambio, depende del cómo se enfrenten estas acciones. Ana María Larrea, en cambio, se acerca al tema del aporte del movimiento indígena a la democracia del país, planteando el contraste entre la democracia mercantilista neoliberal y la visión indígena basada en la tradición milenaria andina de las asambleas comunitarias y de los consensos.

Tomando en cuenta los planteamientos de Ospina y Larrea, se vuelve urgente discutir el quehacer del movimiento indígena, en el Congreso Nacional, en los municipios y prefecturas que gobierna, en sus organizaciones de segundo grado, en sus federaciones regionales; para dilucidar cómo su cultura, democrática ancestral, ha sido practicada casa adentro y cómo esta identidad ha logrado recorrer (¿intacta?), en estos últimos diez años, los pasillos de la interculturalidad, cuando se ha insertado en la política institucional "clientelar" y "viciada" de mercantilismo .

Siguiendo con la emergencia indígena en la política, desde Bolivia, Esteban Ticona analiza el triunfo electoral de Evo Morales planteando algunos antecedentes históricos. A partir de esa entrada diacrónica, Esteban presagia el avance hacia la constituyente para refundar el país y el triunfo sobre el separatismo de Santa Cruz (en el oriente de Bolivia). Coloca entre los grandes desafíos de Morales el desmontar la sociedad racista de ese país. Sin embargo, en forma paradójica, simultáneamente anuncia sus sospechas de tensión entre el indígena Morales y el mestizo García Linera, elegido como vicepresidente.

A la luz de lo planteado por Ticona, merece discutirse la construcción intercultural de una plataforma ideológica y programática hacia el socialismo, más que dirigir la discusión al tema de la diferencia étnica y la disputa de personalidades (presidente indígena y vicepresidente mestizo), como determinantes principales. Pablo Stefanoni justamente reconoce, en el triunfo de Morales, el resultado de un largo proceso de la izquierda que, desde una perspectiva clasista, ha avanzado a una construcción plural, que va incorporando las diversas identidades sociales en un proyecto común.

Ese carácter plural, como identidad étnica, política, social, militar, regional, así como un repertorio novedoso de herramientas políticas y de comunicación, han sido considerados característicos del zapatismo de Chiapas. Bernard Duterme, sin embargo nos invita a reflexionar sobre el riesgo de fetichizar al zapatismo y no reconocer detrás de esas "novedades", los rasgos de una izquierda histórica, con sus planteamientos de lucha clasista, anticapitalista y anti imperial. Ruptura y continuidad emergen desde este enfoque como requerimientos de la construcción política actual de la izquierda.

Todo este amplio debate está enmarcado en lo que para algunos es ya una tendencia irreversible de fin de ciclo del neoliberalismo y de apertura de procesos democráticos que irrumpen hacia la izquierda en América Latina. Sin embargo, el neoliberalismo sigue vigente y presionando, sobre todo, a través de los tratados de libre comercio, de las políticas aperturistas de la OMC. Fernando Buendía y María Fernanda Espinosa abordan estos temas de coyuntura: la situación de las negociaciones del TLC entre USA y los países andinos que parece entrar en la recta final en clara desventaja para los andinos; así como los resultados del encuentro de Hong Kong de la OMC en donde el neoliberalismo sigue reinando, en contra de la soberanía y las utopías de liberación de los pueblos del sur.; a pesar de ello no podemos ignorar el análisis de Betty Tola que marca el año 2006 signado por la coyuntura del TLC y el proceso electoral, como una fecha para disputar sentidos y futuro.

Esperamos con este amplio abanico de enfoques aportar al debate sobre la democracia, los desafíos de la izquierda, los procesos de acumulación, los repertorios de la acción política y el ejercicio de gobiernos democráticos ahora. Los riesgos de satanizar a los partidos y sacralizar a los movimientos sociales o de negar la disputa electoral en un sistema político "viciado" o, de otro lado, priorizar únicamente el electoralismo, parecen ser telones de fondo de la izquierda latinoamericana, que esperamos comiencen a superarse.

Como propuso Houtart en el último foro social Continental de Quito: "es necesario reconocer la complementariedad entre movimientos sociales y organizaciones políticas. Los partidos son instrumentos necesarios del ejercicio del poder político. Aún si existe la necesidad de transformarlos o de reinventar nuevas formas frente al desprestigio de los partidos políticos. Los movimientos, como parte de la sociedad civil de abajo, entran en una dialéctica de integración y de resistencia frente al poder político. Integración para poder cambiar las cosas. Resistencia para justamente mirar lo que hacen los partidos políticos".

Y, en cuanto al alcance del programa de la izquierda ahora, Tarso Genro en un reciente artículo considera que es posible, incluso sin una extinción de la alienación y sin la ocupación total de los poderes del Estado, iniciar la construcción, dentro de la democracia, de una "sociedad conscientemente orientada" que no implica la recíproca anulación entre reforma y revolución, sino más bien su simultaneidad. Sugestiva entrada para superar anquilosados debates, para reconocer que la utopía es referente necesario, pero que el deseo no es utópico, que es concreción y /o frustración cotidiana.

Juan Pablo Muñoz
Terranueva / GDDL

¿Hacia dónde vamos?

2006 un año para disputar futuro

Betty Tola Bermeo*

Por razones regionales, como las elecciones en varios países de América Latina, la conclusión de las negociaciones del TLC con Estados Unidos y la elección de los próximos gobernantes en Ecuador, el 2006 se presenta como un año en el que las fuerzas sociales y políticas democráticas deben jugar un papel fundamental.

América Latina: Un continente en ebullición

Desde hace un poco más de una década, cuando los Estados Unidos plantearon su estrategia comercial para América Latina, a través del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA, todo hacía imaginar que los años subsiguientes no harían más que consolidar esta iniciativa norteamericana que se sumaba a otras de carácter político-militar como el Plan Puebla Panamá y el Plan Colombia, que buscaban

controlar la región dada la inmensa riqueza en biodiversidad y recursos naturales existentes, como por ejemplo el agua.

Nada hacía sospechar que América Latina asistiría a un cambio geopolítico profundo. La presencia de gobiernos democráticos y progresistas en varios de los países del subcontinente, algunos de ellos con economías tan importantes como Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, y posiblemente México (elecciones en 2006), generan condiciones radicalmente distintas para viabilizar propuestas de cambio, que en tiempos globalizados, sólo pueden pensarse regionalmente. Estas modificaciones frenaron la estrategia norteamericana del ALCA al negarse los gobiernos de Chávez y de Lula a avanzar en los acuerdos, por lo que Estados Unidos recurrió a una estrategia de negociaciones bilaterales.

Si bien cada gobierno tiene sus propias particularidades, las iniciativas en cuanto a integración regional a nivel energético, comercial y en materia de políticas sociales (salud, educación), abren posibilidades de construir en el mediano plazo una estrategia propia de la región que sea capaz de potenciar el desarrollo de cada uno de los países, disminuir las grandes desigualdades sociales, profundizar la democracia, y plantear relaciones soberanas con otros países del planeta. En América Latina se está abriendo un camino de esperanza.

Ecuador un país en crisis

Una década de crisis política

Diez años llevamos ya de una crisis política que no termina de resolverse. En 1995, el Ecuador fue testigo de la salida del entonces vicepresidente Alberto Dahik, producto de un conjunto de denuncias de corrupción. Como hoy, en aquel año, ecuatorianos y ecuatorianas aspiraban a que las elecciones de 1996, resuelvan los problemas más acuciantes. No obstante, la realidad ha sido más dura que cualquier mal pronóstico: una década de profunda inestabilidad política, 6 presidentes, una presidenta por horas y una junta de salvación nacional, dan cuenta de ello. Una década en la que la república ha ido para atrás, pasando de disputar los primeros puestos entre los países más corruptos, según Transparencia Internacional, hasta perder un valor tanpreciado para un país como es su soberanía, cuando el entonces dictócrata presidente se declaró el mejor amigo y aliado de Estados Unidos.

La profunda crisis de representación que se expresa, entre otros, en la falta de legitimidad de instituciones como el Congreso Nacional, que cerró el año con un 3% de credibilidad¹, tiene asidero, de un lado, en la situación social que vive el país. Resulta paradójico que en 26 años de ré-



* Ingeniera comercial y activista social

1. Diario El Mercurio, enero 2 de 2006. Cuenca.

gimen constitucional las condiciones de vida de las grandes mayorías se hayan deteriorado de manera acelerada, vaciando a la democracia de su deber fundamental de garantizar justicia, libertad e igualdad a los ciudadanos.

De otra parte, esta profunda crisis reside en la incapacidad de los grandes partidos de gobernar para los intereses del país, debido sobre todo al cordón umbilical que los une a los grupos oligárquicos, cuya presencia en el Estado ha garantizado el traslado de recursos públicos a manos privadas (sucretización, feriado bancario), el uso de las leyes y la Constitución a su arbitrio para precautelar sus intereses, agotando también otro de los valores sustantivos de un sistema democrático: la búsqueda del bien común.

La revuelta forajida, que concluyó con la salida del ex presidente Lucio Gutiérrez, no hizo sino expresar la rebeldía de importantes sectores de la población, sobre todo quiteña, frente a un burdo comportamiento de la clase política tradicional incapaz de escuchar las críticas y demandas ciudadanas. Esas voces exigían el retorno a la Constitución y el no solapamiento a un gobierno dictatorial. El reclamo no excluyó a los sectores de izquierda que no han logrado representar el sentir ciudadano y han caído en las viejas prácticas de los sectores que dicen cuestionar, privilegiando la negociación burocrática a una acción política coherente.

El grito de “Fuera Todos”, sintetizó el profundo cuestionamiento a la clase política, a su acción de 26 años de democracia restringi-

...como un efecto de la dolarización, otros sectores de la economía, como el artesanal y pequeño industrial ligados a la confección de textiles y producción de alimentos han perdido competitividad frente a productos colombianos y peruanos.

da y desgobierno; y reivindicó el poder soberano del pueblo al plantear la urgencia de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que ni el Ejecutivo ni el Congreso Nacional, han sido capaces de viabilizar.

Una economía especulativa, que no fomenta la reactivación productiva con empleo

Luego de seis años de que el Ecuador renunciara a su soberanía monetaria, para declarar como moneda oficial al dólar, y pese a los anuncios de sus promotores de que la dolarización resolvería los más importantes problemas de la economía ecuatoriana, los indicadores económicos no hacen sino arrojar cifras que reflejan la imposibilidad de la reactivación productiva y por tanto la generación de empleos.

Para el 2005, entre las 10 empresas más grandes², de acuerdo a sus activos, se sitúan las empresas petroleras, de telecomunicaciones y de generación eléctrica,

seguidas con distancia por las de comercio. Esto deja ver que las actividades productivas a nivel industrial y agropecuario se encuentran bastante relegadas. De otra parte, y también como un efecto de la dolarización, otros sectores de la economía, como el artesanal y pequeño industrial ligados a la confección de textiles y producción de alimentos han perdido competitividad frente a productos colombianos y peruanos. A todo esto se suma la inflación que al cerrar el año llegó casi al 4%, afectando aún más la competitividad del aparato productivo nacional. Por otra parte, las tasas de interés, si bien han bajado en términos nominales, alentando el consumo, han subido en términos reales afectando el aparato productivo.

En el 2005, el gobierno ha sido incapaz de impulsar políticas concretas de reactivación productiva, pese a contar con recursos provenientes de los altos precios del petróleo que a finales de año bordeó los 50 dólares el barril³, las remesas de los migrantes que llegaron a 1.800 millones de dólares, endeudamiento externo privado masivo, e inclusive con los narcodólares. Sin embargo, ninguna de estas oportunidades fue aprovechada.

Mientras tanto, se continúa favoreciendo a un empresariado rentista dependiente del Estado. El Congreso aprobó la llamada

2. Diario el Universo, enero 1 del 2006. Guayaquil

3. Precio promedio del petróleo entre enero y octubre 2005: 40,88 USD. en Agosto rebasó los 50 dólares llegando a 51,66USD. www.ildis.org.ec

“Ley Nebot”, que libera del pago del impuesto a la renta a todos los inversionistas que instalen nuevas empresas en determinadas zonas, profundizando una política tributaria altamente regresiva. Recordemos que la recaudación de impuestos en el 2005 fue mayor que lo proyectado, alcanzando 3.929 millones de dólares, siendo el rubro principal el correspondiente al IVA que se ubicó en 2.194,1 millones de dólares, expresando un franco retroceso del Impuesto a la Renta.

En medio de esta situación, el sector financiero declara importantes utilidades en el 2005, las del Banco del Pichincha superan los 38 millones, seguido por los Bancos Internacional, 22 millones, y Produbanco, 21 millones. Es decir, la dinámica de la acumulación continúa con un eje importante en el capital financiero especulativo a costa de una urgente política de reactivación productiva.

Las desigualdades se incrementan

En un contexto de dolarización, disminución del gasto social, aperturismo comercial, y desmantelamiento del aparato productivo nacional, las condiciones de vida de la población se deterioran a la par de los índices de desigualdad. El costo de la canasta básica es de 435,77 dólares en tanto que el sueldo promedio es de USD 280 y el sueldo básico unificado llega a 150 dólares.

En términos reales, en los últimos años asistimos a una continua disminución de la inversión social. En el 2005 se destinó 5% del presupuesto a Salud y Desarrollo comunitario, 11,7% a E-

La migración, con todo el riesgo que implica por las condiciones de ilegalidad del viaje, y con todas las secuelas que conlleva para la familia y de manera particular para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, constituye uno de los mecanismos más eficaces para disminuir la presión social al Estado

ducación y Cultura; y 6,5% a Bienestar Social y trabajo, en tanto que se destinó el 42% al pago del servicio de la deuda. En la pro-forma presupuestaria del 2006 enviada por el Ejecutivo al Congreso se pretendió eliminar los recursos destinados al bono de la vivienda. Y el actual Ministro Diego Borja, heredero de la tradición fondo monetarista, ha anunciado que para el 2006, el déficit fiscal se cubrirá con recortes en los rubros de transferencia a las entidades del régimen seccional autónomo y en la inversión social.

Esta disminución real en la inversión social, tiene efectos concretos. En el 2005, 500.000 niños y niñas no pudieron ingresar a la escuela. Los problemas de salud como hepatitis, dengue hemorrágico, malaria y otras enfermedades se presentan precisamente

por la falta de recursos para salud preventiva. De igual manera las paralizaciones de maestros y trabajadores de la salud tienen relación con el limitado presupuesto para estas áreas.

A esta falta de atención del Estado se suman los índices de desempleo y subempleo, que en el 2005, llegaron a 9,7% y 47,1%⁴ respectivamente, sin considerar que la migración esconde los índices reales de estas cifras

La migración, con todo el riesgo que implica por las condiciones de ilegalidad del viaje, y con todas las secuelas que conlleva para la familia y de manera particular para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, constituye uno de los mecanismos más eficaces para disminuir la presión social al Estado, pues el 40% de la población ecuatoriana se beneficia de las remesas, y al menos el 14%, más de un millón de personas, recibe dinero del extranjero, con lo cual mejoran los ingresos de las familias.

2006 un año para disputar futuro

El contexto internacional abre importantes posibilidades para que una propuesta progresista en el Ecuador tenga viabilidad, incluso en medio de las grandes fracturas sociales, políticas y regionales que se viven. Tres ejes⁵, podrían articular la acción política del 2006.

4. Diario el Expreso, especial "27 años de la Economía en Democracia"

5. Nota: En estricto serán tres los hechos, pues el Mundial de Fútbol será un acontecimiento importante para los ecuatorianos.

Resistencia al TLC

El Gobierno prevé concluir en el primer trimestre del año las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sus últimas declaraciones dejan ver la decisión de disminuir las exigencias ecuatorianas en productos tan sensibles como el maíz, el arroz, la carne de pollo, y para no quedarse del tren andino, pues Colombia, al igual que lo hizo Perú, tiene la firme decisión de suscribir el Tratado. A la vez el gobierno está sucumbiendo a las presiones de ciertos sectores de agro exportadores, textileros y floricultores por apresurar la firma. En este contexto, lo más probable es que el TLC pase a conocimiento y resolución del Congreso entre abril y junio.

Esta agenda marca los tiempos de la resistencia. Corresponde desarrollar toda la presión sobre el Congreso Nacional, en la exigibilidad de transparentar los textos y del derecho que nos asiste para la realización de una Consulta Popular que autorice o no su firma.

Reforma política:

El gobierno nacional y la partidocracia han cerrado toda posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente con plenos poderes. Los recientes argumentos señalan que cualquier cambio constitucional se realizará en un año. Sin embargo, el próximo proceso electoral no puede ni debe convocarse con las mismas reglas de juego. Se requiere impulsar un conjunto de propuestas que establezcan mecanismos que mejoren el sistema de representación. Sugerimos, entre otros, los

El gobierno nacional y la partidocracia han cerrado toda posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente con plenos poderes. Los recientes argumentos señalan que cualquier cambio constitucional se realizará en un año. Sin embargo, el próximo proceso electoral no puede ni debe convocarse con las mismas reglas de juego.

siguientes:

- Despartidización del Tribunal Supremo Electoral y de los provinciales, que garantice la transparencia del proceso electoral.
- Definición de un método de asignación de puestos que devuelva la relación entre votos y escaños, garantizando la presencia de las minorías, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Política.
- Asignación por parte del Estado de espacios publicitarios para todos los candidatos y candidatas, a fin de garantizar una participación equitativa.

- Rendición de cuentas de parte de todas las organizaciones políticas que han recibido recursos del Estado como Fondo Partidario.
- Rendición de cuentas de electos en base a programas inscritos en el Tribunal Electoral.
- Democratización de los partidos.

Elecciones presidenciales:

El tablero electoral no termina aún de configurarse, faltan las candidaturas de los dos partidos más grandes del país, PSC y ID, ambos con graves conflictos internos, y con limitadísimas figuras presidenciables. Si ellos no hacen una apuesta presidenciable, entenderemos que están más cómodos gobernando desde el poder de las mayorías en el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, y otros órganos de control, como lo han hecho en los últimos años, el PSC desde 1988. Queda por definir también el papel que jugará en este proceso electoral el PRE.

El empresario Álvaro Noboa, mantiene una alta preferencia en las diferentes encuestas. Luego de 8 años de campaña parece haber consolidado un voto duro en base a una relación clientelar con los sectores más empobrecidos de todas las regiones del país, aunque son notorias sus limitadas posibilidades en caso de pasar a la segunda vuelta. Esta candidatura constituye la expresión radical de la oligarquía ecuatoriana.

El ex vicepresidente León Roldós, que disputa las encuestas con Álvaro Noboa, se perfila cada vez con mayor nitidez como el

representante de una derecha modernizante, sobre todo serrana, expresada en una alianza con sectores ligados al ex presidente Jamil Mahuad, Democracia Popular, “Quito en Acción” de Rodrigo Paz, al conservadurismo, entre otros.

El campo popular y democrático, luego de una década de alto dinamismo social y de resistencia al modelo, en el que se ha defendido la seguridad social, las telecomunicaciones y las empresas eléctricas de los intereses privatizadores de los diferentes gobiernos, se encuentra en un momento de reflujo, de débil capacidad organizativa y de movilización. Existen dificultades para expresarse de manera articulada. Una muestra de ello es la incapacidad de organizar la recolección de firmas para solicitar la consulta popular sobre el TLC. A estos problemas se suma la profunda crisis en la que se encuentran las organizaciones políticas (partidos y movimientos) considerados de izquierda debido a un acción que no permite diferenciarla de la clase política tradicional, que prioriza la negociación burocrática a los postulados y objetivos políticos de mediano y largo plazo. En estas circunstancias de dispersión, el campo popular debe enfrentar el próximo proceso elec-

Requerimos una práctica que ligue la ética con la política, la transparencia en los acuerdos, evitado las componendas y las negociaciones debajo de la mesa.

Un paso en ese sentido es convocar a todos los candidatos y candidatas de la tendencia a la realización de elecciones primarias, para decidir sobre las diferentes candidaturas, de manera especial las presidenciales.

toral en condiciones en las que al momento existe ya una larga lista de candidatos de la tendencia: Auki Tituaña, Rafael Correa, Eduardo Delgado, Marcelo Larrea, Lenin Hurtado, Enrique Ayala Mora.

La gran dispersión existente en este momento, requiere de una decisión colectiva para avanzar en la estructuración de un gran Frente Democrático entre todas

las organizaciones sociales y políticas de la tendencia, que pueda ofrecerle al país una alternativa real expresada en una Agenda de País, que se constituya en un plan de gobierno de transición hacia procesos más profundos de cambio y transformación. Esa agenda de reactivación productiva con empleo; de inversión social en salud, educación y vivienda; de lucha frontal contra la corrupción; y de soberanía ligada a la integración regional, deben ser las principales banderas que articulen una gran convergencia.

Este proceso pasa también por iniciar una nueva práctica política. Durante años la sociedad ecuatoriana ha demandado con emergencia (no solo con urgencia) cambios en el quehacer político. Requerimos una práctica que ligue la ética con la política, la transparencia en los acuerdos, evitado las componendas y las negociaciones debajo de la mesa. Un paso en ese sentido es convocar a todos los candidatos y candidatas de la tendencia a la realización de elecciones primarias, para decidir sobre las diferentes candidaturas, de manera especial las presidenciales.

El escenario es ese, no podemos evadirlo, asumamos el reto de disputar futuro.

El Imperio no negocia, impone... (Inflexibilidad de EEUU en los acuerdos de libre comercio)

*Fernando Buendía G.**

Presentación

El aspecto más trascendente del proceso de la globalización es sin duda la expansión de los mercados a través de la aplicación de políticas de liberalización comercial en la relación entre Estados.

Efectivamente, después de once años de negociaciones multilaterales sobre comercio, en 1995 fue reemplazado el viejo GATT con la creación de la Organización Mundial Comercio (OMC), ampliando su campo de intervención a las áreas del comercio de servicios, propiedad intelectual, e incluso a las inversiones. Posteriormente, durante la Primera Conferencia Ministerial de la OMC ocurrida en Singapur en 1997, se propuso expandir aún más su autoridad, extendiéndola hacia los temas de inversiones, política de competencia, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio.

Las Conferencias Ministeriales posteriores ocurridas en Seattle (1999), Doha (2001), Cancún (2003), Hong Kong (2005) y el fracaso de las negociaciones sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones, pusieron de manifiesto la resistencia de los países de menor desarrollo a aceptar las políticas de aplanadora que las potencias económicas pretendían imponer en el comercio mundial.

Frente a las resistencias que se han presentado en el hemisferio

americano, provenientes de los países de economías más grandes como Brasil, Argentina y Venezuela, manifestadas explícitamente durante la Cuarta Reunión Ministerial del ALCA ocurrida en Miami (noviembre 2003) y ratificada en Buenos Aires (2005), EEUU viene impulsando desde el año 2002, acuerdos bilaterales y subregionales, aunque ya en 1995 incursionó en este camino a través del Acuerdo con México y Canadá, denominado NAFTA.

La estrategia estadounidense denominada "Spaghetti Bowl" (bola de tallarín) pretende generar un efecto dominó, presionando mediante las negociaciones bilaterales a los países más resistentes a incorporarse a los acuerdos regionales y mediante estos, a acelerar los acuerdos generales dentro de la OMC, rompiendo con ello las barreras y resistencias de los países de menor desarrollo.

El Ecuador, al igual que los demás países de la región, se encuentra atrapado en esta encrucijada de dimensiones históricas. El impacto económico, social y político que podría ocasionar la suscripción de un Acuerdo que traspasa los linderos exclusivos del comercio, limitará gravemente las posibilidades de planificación, intervención y dirección por parte del Estado-nación ecuatoriano.

La formulación de respuestas eficaces frente a esta amenazante situación, demanda un análisis

más detallado de las fuerzas que operan al interior de la potencia, configurando su política exterior y comercial.

Algunas aproximaciones conceptuales

De acuerdo a la teoría marxista del capitalismo, la ley fundamental de la economía capitalista es la tendencia creciente a la socialización de la producción capitalista, frente a la tendencia a la mayor concentración de la propiedad en pocas manos. La llamada globalización de la economía mundial ha corroborado esta tesis central de la economía política de Marx.

En *El Capital*, Marx demuestra que, más allá de las formas fenoménicas en que se manifiesta el proceso capitalista, su lógica intrínseca de constante acumulación extiende sus límites más allá de las fronteras nacionales, ex-

* Subdirector de la Fundación Campesina María Luisa Gómez de la Torre.



pandiendo por el planeta las relaciones capitalistas de producción, respondiendo a los procesos continuos de concentración y centralización del capital originados en la competencia y la disputa recrudescida de los mercados -base consustancial del capitalismo- y en el desarrollo científico-técnico, elemento sustancial de la competitividad de las empresas.

El posterior análisis de Lenin en “El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo” pone de manifiesto las formas concretas, mediante las cuales opera la tesis de Marx; básicamente a través de: a) la fusión del capital industrial con el capital bancario que da origen al capital financiero, subordinando la producción a la forma dinero del capital, b) la conformación de las empresas transnacionales como efecto de la expansión del capital financiero, c) el recrudecimiento de la disputa de las fuentes de materia prima y de los mercados entre los países, respondiendo a las exigencias de las élites transnacionales, d) la manifestación de guerras imperiales como consecuencia de la disputa de mercados.

Tras la crisis concurrente del capitalismo conocida como la Gran Depresión de 1930, y después de la II Guerra Mundial (1939-1945) asociada a los conflictos por la disputa de la hegemonía mundial, el sistema económico y político mundiales se estabilizan, por un lado, sobre la base del impulso del modelo económico keynesiano, y por otro lado, a través de la creación de organismos multilaterales que rijan sobre el conjunto de las relaciones internacionales (ONU, FMI, BIRF);

Los Tratados de Libre Comercio consumarán el acto final de la entrega de los recursos y mercados locales a manos de las empresas transnacionales.

con lo cual se pretendía controlar los “excesos” del capitalismo oponiendo al mercado la fuerza interventora de los Estados y de organismo multilaterales que regulen, tanto las relaciones económicas (comerciales y monetarias) como los conflictos políticos correspondientes.

Estas condiciones se mantuvieron durante varias décadas hasta los años 80s cuando la crisis y la caída del bloque socialista crearon la ilusión de la supremacía del sistema capitalista y la unipolaridad político-militar estadounidense.

La efervescencia de la victoria capitalista desató las amarras que controlaban la expansión de las empresas transnacionales por el planeta y convocó a los demonios del mercado a través de la implementación de la nueva política económica “neoliberal” auspiciada por el denominado “Consenso de Washington”, que en tres décadas de aplicación ha estrangulado las capacidades de intervención estatal en la economía en los países pequeños y ha entregado a las empresas priva-

das (transnacionales) la potestad sobre los recursos y los mercados.

Mediante los procesos de apertura comercial los países de la periferia, luego de que sus Estados retrocedieron obedientemente en su soberanía económica, abandonan la última trinchera de su capacidad reguladora e interventora sobre la economía y sociedad locales. Los Tratados de Libre Comercio consumarán el acto final de la entrega de los recursos y mercados locales a manos de las empresas transnacionales.

Al igual que aconteció con las sociedades precapitalistas, estructuradas en autarquías territoriales, que se transformaron en naciones por la fuerza del naciente mercado capitalista en la actualidad los Estados Nacionales experimentan la presión para declinar sus ámbitos de soberanía a favor de gigantescas Corporaciones multinacionales que controlan el mercado mundial.

La política imperial de los Estados Unidos

El proceso histórico de conformación de los EEUU, impulsado por una burguesía compuesta por propietarios de plantaciones esclavistas, banqueros, comerciantes e industriales, rompió los lazos de subordinación con el imperio inglés, para dar rienda suelta a una dinámica acelerada de acumulación capitalista basada en la explotación de la fuerza laboral esclava y de los obreros de los estados del Norte.

La configuración política del estado norteamericano bajo el modelo “Federalista”, se corres-

ponde directamente con el carácter regional de la acumulación económica y la imperativa concertación de intereses entre élites dominantes locales, acordada en un modelo político fuertemente descentralizado. Cada estado de la Federación, dotado de un gobierno propio, asume la mayor parte de competencias sobre la economía, la sociedad y la política, locales.

El sistema presidencialista de EEUU que centraliza el poder nacional, se mantiene fuertemente controlado por el Congreso, conformado por las representaciones locales, y asume las competencias negociadas que le otorgan los estados. Entre las funciones exclusivas que tiene el gobierno central se encuentra la política exterior, siempre supeditada al Congreso.

Desprovisto de muchas atribuciones y responsabilidades, la misión principal del gobierno estadounidense ha girado en torno de su política exterior, sintetizada en la consigna de la Doctrina Monroe: ¡América para los americanos!

Espoleado por la necesidad de impulsar un agresivo proceso de acumulación de las empresas estadounidenses para saltar en su escala de producción, equiparar a Europa y posteriormente obtener la supremacía mundial; la política exterior de EEUU se ha caracterizado por un continuo intervencionismo, atribuyéndose el rol de “hermano mayor” de los países latinoamericanos. A través de la conformación de una poderosa fuerza naval y haciendo uso de este “gran garrote” sustentó una política de defensa absoluta

*Igualmente,
a través de los
organismos
multilaterales
(FMI, BM, BID)
en los cuales el
Departamento del
Tesoro tiene una
incidencia
preponderante,
el impulso y promoción
de la Apertura
Comercial,
se ha incorporado al
recetario neoliberal...*

de las empresas transnacionales de bandera local, invadiendo naciones, imponiendo gobiernos y desestabilizando países.

Durante la década de los 80 en el siglo pasado un grupo de ultra conservadores que ha mantenido una enorme influencia sobre la política exterior de EEUU difundió varios textos denominados “Documento de Santa Fe I, II y III”, en los que, señalan que la estrategia principal para consolidar los intereses de EEUU en América deberá ser la profundización de la apertura comercial en todos los países de la región, la misma que producirá la articulación definitiva de las economías locales a la órbita de las empresas y la economía norteamericanas.

Las negociaciones comerciales se han convertido en el compo-

nente fundamental de la política exterior de EEUU. El andamiaje institucional del gobierno se ha reestructurado dando la prioridad principal a las negociaciones comerciales, que aunque son impulsadas en forma centralizada por el Departamento de Estado, se soportan técnicamente en el Departamento de Comercio que se ha convertido en un superministerio con más de ochocientos funcionarios y cerca de quinientos asesores provistos por las Corporaciones multinacionales de EEUU.

Igualmente, a través de los organismos multilaterales (FMI, BM, BID) en los cuales el Departamento del Tesoro tiene una incidencia preponderante, el impulso y promoción de la Apertura Comercial, se ha incorporado al recetario neoliberal para condicionar e imponer a los países de la región mediante los instrumentos de presión financiera e intervencionismo que disponen estas instituciones multilaterales.

ALCA y TLCs

El constante déficit comercial que de manera crónica experimenta la economía de EEUU, que alcanzó la cifra record de 500.000 millones de dólares en el año 2005, ha puesto sobre el tapete las rigideces del aparato productivo agrícola e industrial norteamericanos (fuertemente subsidiado y protegido), y la necesidad imperiosa de construir mercados preferenciales para recuperar el dinamismo de estos sectores. Más aún cuando la consolidación de la UE como un bloque económico, así como de Japón y los tigres del Asia, pero

principalmente el dinamismo de China que crece a un ritmo constante del 10% anual en la última década, pone en graves aprietos la estabilidad comercial y económica norteamericana.

Alcanzar un vínculo preferencial a través de la suscripción de los tratados de libre comercio (ALCA, TLCs), en palabras del anterior negociador, Robert Zoellick, favorecería el acceso a productos y bienes agrícolas e industriales estadounidenses para un mercado de 800 millones de personas.

Por otro lado, las proyecciones estratégicas geopolíticas estadounidenses identifican la importancia determinante que poseen los recursos naturales y geográficos existentes en la región de Sudamérica para la economía y política norteamericanas. Es un secreto a voces que las reservas de petróleo liviano del Orinoco y la Amazonía son las fuentes de aprovisionamiento más cercanas y seguras para cubrir la seguridad energética estadounidense, así como también que las fuentes de agua dulce, de oxígeno y de biodiversidad, localizadas en la región amazónica son las más importantes del planeta. Finalmente, en las rutas de comercio Asia-Pacífico-Atlántico que poseerán un volumen creciente del comercio mundial, el control de los corredores estratégicos sobre el Océano Pacífico y sobre el continente adquieren una importancia determinante.

Los intereses de las corporaciones petroleras, de las empresas químicas, de las multinacionales cuya propiedad intelectual es su principal activo (la industrial cinematográfica, farmacéutica,

Alcanzar un vínculo preferencial a través de la suscripción de los tratados de libre comercio (ALCA, TLCs), en palabras del anterior negociador, Robert Zoellick, favorecería el acceso a productos y bienes agrícolas e industriales estadounidenses para un mercado de 800 millones de personas.

de software, etc.), de la industria automovilística y del sector financiero, constituyen entre otros el segmento hegemónico del bloque dominante estadounidense y han logrado hacer remontar a la política de comercio como política de Estado, mediante la acción de los poderosos grupos de lobby, algunos de los cuales tienen en su lista de beneficiarios a la mayor parte de congresistas estadounidenses (senadores y diputados) a quienes financian algunas de sus actividades políticas.

Esta política sin embargo debe enfrentar fuertes conflictos y procesos de negociación con sectores económicos tradicionales de

EEUU acostumbrados a sostenerse sobre políticas de subsidio y protección. Los sectores agrícolas que son los más sensibles a la apertura comercial poseen el poder suficiente para bloquear las decisiones en el Congreso y por ello han recibido un trato especial obteniendo por ley - aprobada en el año 2003- un apoyo estatal de 150.000 millones de dólares para 10 años, que se suma a los subsidios específicos que recibe la agricultura en cada estado (servicios de infraestructura, riego, asistencia técnica, créditos preferenciales, precios de sustentación y garantía de cosechas).

Otros sectores reacios a la apertura comercial son los sindicatos laborales que identifican la apertura como una amenaza al empleo y a la estabilidad laboral, pues, han resentido con fuerza la pérdida de 3 millones de puestos en los últimos tres años, los mismos que se han trasladado a las zonas francas de China. Es aleccionadora la experiencia de la empresa Levy Strauss que se mantuvo sosteniendo sus fábricas en California hasta que disminuyó a la mitad el volumen de sus ventas, viéndose obligada a cerrar y relocalizar sus fábricas en China pagando salarios inferiores a un dólar diario.

Los Sindicatos como la AFL-CIO con 15 millones de afiliados, poseen una influencia significativa en el Partido Demócrata y han provocado el posicionamiento de algunos sectores del Partido en contra de los TLCs, manteniendo una constante campaña en contra del aperturismo comercial, porque, entre otras razones, sienten

amenazadas sus condiciones y garantías laborales. Impulsando una oposición continua en contra del ALCA y de los TLCs han logrado un importante respaldo en la población estadounidense que mira con preocupación la invasión de la manufactura china y el incremento del desempleo local.

Otros sectores, vinculados a la agricultura familiar y a la defensa del medio ambiente tienen también una actitud opositora a los procesos de apertura comercial, porque son conscientes de que el comportamiento poco ético que caracteriza a las corporaciones multinacionales arrasará con los frágiles y valiosos ecosistemas existentes en América Latina, así como también con los pequeños productores campesinos de la región, que suman más de un centenar de millones de personas.

Las negociaciones desplegadas por las Administraciones norteamericanas de la última década para lograr el apoyo favorable de la mayoría del Congreso de EEUU a su estrategia de apertura comercial, ha marcado con absoluta nitidez los límites de cualquier acuerdo comercial, sea este bilateral o multilateral. De esta forma, las negociaciones en la OMC, los acuerdos con México y Canadá (NAFTA), con Chile, con los países centroamericanos (CAFTA) o el que se esta nego-

...en el caso del azúcar, a pesar de que es un producto de enorme relevancia para los países de Centroamérica, EEUU apenas ha cedido un contingente anual (liberado de aranceles) de 150.000 toneladas, igual al consumo de un día de la población estadounidense. Y en las negociaciones con los países andinos pretende excluir totalmente al azúcar del acuerdo.

ciando con los países andinos; todos ellos plantean con rigidez absoluta aquello que EE UU pretende obtener para las empresas norteamericanas y también todo lo que no van a ceder en ningún caso para proteger a determinados sectores y empresas.

Por ejemplo, en el caso del azúcar, a pesar de que es un producto de enorme relevancia para los países de Centroamérica, EEUU apenas ha cedido un contingente

anual (liberado de aranceles) de 150.000 toneladas, igual al consumo de un día de la población estadounidense. Y en las negociaciones con los países andinos pretende excluir totalmente al azúcar del acuerdo.

Esta posición del negociador estadounidense es inaudible, pues de ello depende lograr el respaldo de la mayoría de miembros del Congreso, que están fuertemente condicionados por los grupos de presión empresariales en defensa de sus intereses. El estrecho margen de dos votos alcanzado en la votación para la aprobación del CAFTA, sumado al considerable desgaste político experimentado por los errores crasos de la administración Bush, producirá un endurecimiento mayor de la posición negociadora del TLC Andino y que podría obligar a posponer su tratamiento hacia el 2007.

Como han manifestado personas vinculadas al gobierno norteamericano, EEUU suscribirá un tratado de libre comercio con los países que estén listos para firmarlo, es decir, con los que hayan aceptados sus términos en el acuerdo.

Los ingenuos que pensaban que era posible obtener condiciones favorables para los sectores productivos del Ecuador en el proceso de negociación del TLC andino, se equivocan totalmente, el imperio no negocia, impone.

En Hong Kong se salvó la OMC

*María Fernanda Espinosa**

El pasado mes de diciembre concluyó la sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong. 147 Ministros de Economía y Comercio se reunieron para tomar decisiones claves que afectan no solo las condiciones del comercio mundial sino la producción agrícola, la seguridad alimentaria, la transferencia de tecnología, el medio ambiente; en síntesis, el desarrollo y futuro de nuestros países. Sin embargo, los acuerdos de Hong Kong se han silenciado y no han merecido casi ningún comentario de la opinión pública.

Extraño pero no tan extraño, primero porque Hong Kong se caracterizó por micro encuentros secretos y a hurtadillas entre los poderosos y los medianamente poderosos; negociaciones a altas horas de la noche y a media luz. Las decisiones importantes se tomaron siempre a puerta cerrada y con ninguna participación ni espacio para la sociedad civil.

Por el contrario, se registraron violentos enfrentamientos con los altermundistas y los campesinos que participaron de la Conferencia. Las sesiones plenarias estuvieron llenas de acusaciones mutuas, fuertes intercambios. Las salas alternas se repletaron de eventos paralelos de las ONGs que fluctuaban entre análisis sobrios, constataciones resignadas y exacerbadas posturas confrontacionales.

Mientras esto ocurría del otro lado del planeta, en el Ecuador debatíamos que si la Asamblea Constituyente, que si los candidatos presidenciales, que si las ternas para nombrar al superintendente de compañías, que si la historia garciamarquiana del Notario Cabrera y la vergonzosa complicidad de las Fuerzas Armadas. En fin, ni tiempo ni espacio para preocuparse de la OMC.

Todo hacía pensar que esta Cumbre fracasaría como ocurrió en Cancún en el 2003 por falta de consensos. Sin embargo, en Hong Kong hubo acuerdos, pero con grandes costos para nuestros países.

A pesar del tono triunfal de la rueda de prensa de clausura y las declaraciones de cierre, el tema de la reducción de subsidios agrícolas y acceso a mercados en favor de los países en desarrollo no se concretó. Se estableció el 2013 como fecha límite para la eliminación de las subvenciones. Los países llamados del “SUR” pero grandes potencias comerciales como China, India o Brasil,

pelearon tenazmente por sus preferencias comerciales, salvaguardas y excepciones para evitar abrir sus propios mercados u ofrecer ventajas comerciales a sus “hermanos” africanos o latinoamericanos.

Recordemos que la ronda de Doha en el 2001 inauguraba una transición de la OMC hacia una agenda para el desarrollo, pensando en los países más pobres. Pero el desarrollo en el contexto del comercio parece significar la integración de los países del sur al sistema económico mundial sin considerar sus diferencias estructurales, políticas, históricas.

Debemos analizar con mucho cuidado los acuerdos de Hong Kong porque como siempre ocurre en las negociaciones multilaterales “el demonio se esconde en los detalles”. Por ejemplo, los impactos de la fallida ronda de Doha ya empiezan a tomar cuerpo: cuerpos hambrientos, silenciosos y excluidos de más de tres mil millones de pobres en el planeta. No en vano, la idea de cooperación para el desarrollo de Doha se transformó en Hong Kong en “ayuda al comercio”. Es decir, mecanismos para apoyar a los países pobres a exportar correctamente, de acuerdo a los estándares y requerimientos de los consumidores del norte. Esto quiere decir más liberalización comercial, más consumo, más degradación ambiental, menos



* Profesora Investigadora de FLACSO. Miembro del Directorio de la Fundación Terranueva.

límites al uso de recursos y al control de los efectos contaminantes de la producción. Es decir, los ministros de comercio ignoraron una vez más los costos sociales y ambientales del crecimiento económico, en un espíritu pragmático y mercantilista.

Hong Kong logró efectivamente un pacto entre las potencias tradicionales del Norte y las economías emergentes del Sur. Es decir la Unión Europea y los Estados Unidos exigieron a cambio de una promesa de mayor apertura a los productos agrícolas y manufacturados del Sur, un tratamiento similar a los sectores terciarios del norte, como la banca, los transportes, el turismo, y el reconocimiento de sus derechos de propiedad intelectual. Esto último, con la intención de entrar de manera abierta a una tercera división internacional del trabajo basada en una “economía del conocimiento”. Pero claro, esta negociación no está exenta de riesgos ya que países como la China y la India se convierten cada día en poderosos exportadores de servicios, las capacidades biotecnológicas de Brasil crecen vertiginosamente para convertirse en fuertes competidores de Europa y Estados Unidos.

Recordemos también que en Seattle en el 99, los acuerdos se hicieron humo porque los países de economías emergentes como las del sudeste asiático juzgaron insuficientes las concesiones del norte en materia de apertura de sus mercados agrícolas. En Cancún, se produjo el segundo fracaso por la negativa de eliminación de los subsidios agrícolas, sobre todo los subsidios a la produc-

...Los perdedores como era de esperar, fueron los manifestantes altermundialistas, los campesinos de todo el mundo que fueron disciplinados por las fuerzas policiales de Hong Kong. Pero, sobretodo, perdieron la agricultura campesina, el autoconsumo, la soberanía alimentaria, la salud pública, la sustentabilidad de la producción, el consumo y el sentido común.

ción de algodón, y en eso estuvieron juntos las potencias emergentes y los países africanos y latinoamericanos. Lo que ocurrió en Hong Kong es fundamentalmente que las nuevas potencias terminaron por aliarse a la Unión Europea y los Estados Unidos a la vez que defendían sus intereses. Se llegó a un acuerdo, sin duda. ¡Se salvó la OMC! Los perdedores como era de esperar, fueron los manifestantes altermundialistas, los campesinos de todo el mundo que fueron disciplinados por las fuerzas policiales de Hong Kong. Pero, sobretodo, perdieron la agricultura campesina, el autoconsumo, la soberanía alimentaria, la salud públi-

ca, la sustentabilidad de la producción, el consumo y el sentido común.

Es una gran paradoja que el libre comercio tenga tantos efectos en la distribución del espacio, los recursos, las relaciones internacionales y el poder si más de la mitad del comercio internacional se basa en la importación y exportación de los mismos bienes. No se respeta el principio de las ventajas comparativas naturales ó geográficas. Es verdad que unos países tienen mayores avances tecnológicos que otros y que las condiciones de producción varían, pero lo cierto es que el comercio tiene poco que ver con la satisfacción de necesidades ó con la salud, el bienestar y la alimentación, sino más bien con el mantenimiento de relaciones y el afianzamiento de sistemas de poder.

Además, se debe señalar que el 80% del trabajo que consumen las sociedades occidentales, en forma de bienes y servicios, se producen en un perímetro inmediato de 20 kilómetros. ¿Por qué entonces el 20% de bienes y servicios que se producen fuera de los 20 kilómetros aledaños a los consumidores determinan las reglas, el acceso, la distribución del 80% restante? Aquí existe un fuerte dilema que nos lleva a pensar en la legitimidad de un sistema de comercio mundial que exacerba el consumismo y sobrepone los intereses comerciales por sobre la política, la democracia y el interés general.

El comercio internacional se topa con varias contradicciones. No estimula la asignación eficiente

de recursos; no fomenta la distribución equitativa de ingresos y empleo; no estimula el mantenimiento de umbrales de producción y consumo que sean sostenibles; fomenta el libre tránsito de bienes pero restringe, limita y sanciona el libre tránsito de la mano de obra. Como vemos, no hay nada menos libre que el libre comercio.

Además, la geografía del comercio internacional estimula el traslado de actividades industriales a los lugares con más baja internalización de costos (renovación de recursos, contaminación, relaciones laborales, etc.), y eso significa que va hacia los lugares donde el valor de los servicios ambientales es menor o inexistente. Se trata de una situación compleja y contradictoria, ya que mientras se establecen políticas y mecanismos internacionales de regulación ambiental, se obliga a los países pobres a sobrepasar los límites de regeneración y absorción de desechos. Por ejemplo, la eliminación de basura peligrosa se hace en los países más permisivos y con mayores premuras económicas.

En Hong Kong, nadie mencionó estas paradojas, nadie habló de mecanismos reales de establecimiento de relaciones horizontales y solidarias entre el norte y el sur como por ejemplo la condonación de la deuda externa, el reconocimiento de la prolongada deuda ecológica del norte con el sur, o por qué no, el reconocimiento, por medio de incentivos, a los servicios ambientales que prestan los países megadiversos como el

Un sistema internacional basado en la solidaridad, la equidad y la redistribución del ingreso y del empleo no va a venir de la OMC, eso es seguro. Se requiere una transformación de los sistemas políticos y la redefinición de las estructuras de gobernanza multilateral y de las prioridades de los países en el establecimiento de acuerdos que privilegien el bienestar interno, las alianzas horizontales, la reconstitución de las democracias.

nuestro al equilibrio y bienestar mundial, es decir, la biodiversidad, el balance climático o la provisión de agua dulce. Obviamente estos son mecanismos más políticos que comerciales.

Ahora bien, es importante señalar que más de la mitad del comercio mundial se desarrolla actualmente al amparo de acuerdos subregionales o bilaterales con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México (TLCAN)

o el Mercado Común del Sur (Mercosur), o la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Esto quiere decir que las reglas multilaterales y los complejos acuerdos entre 150 países o más, cederán espacio a pactos como los TLCs de Estados Unidos con Perú, Colombia y Ecuador, que superan los mismos acuerdos de la OMC, en beneficio de la parte más poderosa. La pregunta del millón es entonces sobre el futuro rol de la OMC como espacio de grandes marcos y lineamientos para el comercio mundial, que luego son interpretados a discreción por los diferentes países de acuerdo su nivel de poder, intereses y capacidad de negociación.

Un sistema internacional basado en la solidaridad, la equidad y la redistribución del ingreso y del empleo no va a venir de la OMC, eso es seguro. Se requiere una transformación de los sistemas políticos y la redefinición de las estructuras de gobernanza multilateral y de las prioridades de los países en el establecimiento de acuerdos que privilegien el bienestar interno, las alianzas horizontales, la reconstitución de las democracias. Esto tampoco vendrá del comercio y peor del “libre comercio”, vendrá de la política en su sentido más amplio; dependerá de las correlaciones de fuerza entre quienes a nivel “glocal” promueven únicamente la acumulación de riqueza y quienes global, nacional y localmente buscan un cambio hacia la justicia social y la sustentabilidad ambiental.

Contribución al debate sobre los movimientos sociales

Mario Unda*

1. Los movimientos sociales

Estamos –o deberíamos estar– en un momento de profundos y amplios debates. Los movimientos sociales han llenado un período de 10 o 15 años de la historia reciente de las luchas sociales en el Ecuador (y en América Latina). Los movimientos sociales han tomado formas distintas, desde las movilizaciones organizadas hasta las explosiones más o menos espontáneas. Han movilizado a diversos sectores, desde indígenas hasta clases medias, pasando por desempleados. Han sido entendidos como movilizaciones, rebeliones y levantamientos. Se han puesto objetivos variados: desde la defensa del agua hasta la revocatoria del mandato de los gobiernos; desde la revocatoria de un presidente hasta el “fuera todos”. El Ecuador y América Latina han cambiado profundamente en este período con la presencia de los movimientos sociales.

En realidad, se trata de una historia más antigua, pero esta oleada reciente no es una mera continuidad. Al mismo tiempo, presenta mayores puntos de contacto con las movilizaciones anteriores de lo que generalmente se reconoce. De una parte implican una serie de creaciones novedosas en el accionar social y político; de otra parte, están atravesados por las mismas limitaciones que han llevado a la crisis a las anteriores formas de acción. Los movimien-

tos sociales, como cualquier otra práctica social son esencialmente ambiguos y contradictorios. Sus encrucijadas, su significación, sus potencialidades sólo pueden percibirse adecuadamente desde esta condición básica.

Nos interesa resaltar algunos aspectos: los movimientos sociales ponen en cuestión la comprensión de la política. Y resitúan la actualidad de las discusiones estratégicas.

2. Los vacíos de la política

Decíamos que los movimientos de hoy no son una simple continuidad de los que le antecedieron; en primer lugar, porque se produjo y creció en un ambiente de vacío político, un vacío que fue primero el dejado por la izquierda. Como se recordará, en los años 80 y 90, las izquierdas en el continente fueron afectadas por una combinación de factores diversos; entre ellos, suele mencionarse mucho la caída del muro de Berlín y el descalabro del mal llamado “socialismo real”, que evidentemente tuvo efectos, tanto en la visión que tenía la izquierda sobre sí misma, como en el modo en que era vista por las clases populares. Pero no se han señalado suficientemente los efectos de los procesos de “retorno a la democracia” que se extendieron por el continente en la década de los 80, a caballo de la “doctrina Carter”, comenzando por el Ecuador en 1978-1979. Sospechamos que este fue el elemento nodal de la crisis de la izquierda. Particular-

mente, y primero, de la izquierda revolucionaria, que no logró resolver el tránsito de dictaduras a democracia, y por lo tanto no llegó a formular una política revolucionaria frente al advenimiento de regímenes “democráticos”.

Las izquierdas reformistas, en cambio, fueron absorbidas por el discreto encanto de la burguesía, por la vecindad del poder y por la búsqueda de acceso a los ansiados “resortes de poder” que les ofrecía la participación en el Estado. Por eso, pasan a compartir la suerte de los partidos políticos en general y del conjunto del sistema político tradicional.

Pero la crisis de la izquierda no fue sino el primer acto de una crisis mayor de la política que se acentuó después, ya entrada la década de 1990, y sobre todo, con el cambio de siglo. Esta segunda, fue la crisis de los políticos neoliberales, y sobrevino casi de improviso, pues en algún momento pareció que las derechas se entronizarían duradera-

* Sociólogo, profesor universitario e investigador del Centro de Investigaciones CIUDAD.



mente en los gobiernos latinoamericanos, con su mismo rostro o con el rostro “renovado” que le ofrecían los populismos conversos. Y por extensión, ha sido la crisis de todos aquellos que, presentándose como distintos e incluso contrarios al neoliberalismo, terminaron como meros administradores de las políticas neoliberales.

En pocas palabras, el manejo neoliberal develó el vínculo que une al sistema político con el despotismo del capital. La democracia fue utilizada como pretexto para exigir la sumisión a ese despotismo. La caída de la credibilidad en los partidos, en las instituciones y en la democracia suelen ir juntas desde entonces.

La crisis de las izquierdas, la crisis de las derechas, la crisis de los populismos: cada vez más, el escenario fue haciéndose el de una crisis de la política misma como esfera relativamente autónoma de representación. Detrás de ella, una crisis de credibilidad que afecta no solamente a los políticos (y a la política que de ellos se desprende), sino a las propias “instituciones democráticas”, percibidas como nido que incubaba a todos ellos.

Detrás de este vacío político, la crisis de las políticas. Detrás de la crisis de las políticas, la crisis de la democracia. Porque la democracia se mostró descarnadamente como régimen de dominación de clase, como cara política de la tiranía del capital, incluso como instrumento de intereses particulares claramente identificados. Neoliberalismo y democracia mal se avienen, como ha señalado ya Atilio Borón.

La crisis de las izquierdas, la crisis de las derechas, la crisis de los populismos: cada vez más el escenario fue haciéndose el de una crisis de la política misma como esfera relativamente autónoma de representación.

Sostenemos que todas esas crisis reflejan y, al mismo tiempo, profundizan una real crisis de la hegemonía de las clases dominantes que tienen ya grandes dificultades para hacer pasar sus intereses particulares por intereses generales de la sociedad. Y por lo tanto, ya no logran obtener el “consenso activo de los dominados”.

Esta ola de movimientos sociales aparecen y se desarrollan (a veces orgánicamente, a veces explosivamente, normalmente combinando explosión y organicidad) en este preciso contexto. Lo que significa que son, al mismo tiempo, un producto y una respuesta al vacío político. Desde este punto de vista, los movimientos sociales son e implican una crítica práctica a la democracia representativa y a la política como ejercicio de representación, es decir, como modelo de separación de lo político y lo social.

3. Movimientos sociales y neoliberalismo

En segundo lugar, porque esta oleada de movilización social se

produce, como acabamos de ver en la época de las políticas neoliberales, en un momento en que las orientaciones políticas cambiaron radicalmente desde un modelo más o menos desarrollista (yerran obviamente quienes quieren calificar de “estado de bienestar” a estos modelos que se vivieron en América Latina). Un modelo “nuevo” en el cual el capital emprende una verdadera guerra de depredación contra el proletariado y el conjunto de las clases subalternas. Un modelo duradero, que llegó a convertirse en “política de Estado”, más allá de las modificaciones operadas en los gobiernos contingentes.

El modelo neoliberal, en su aplicación desigual, pero uniforme, modifica la economía, pero lo hace modificando las relaciones entre el capital y el trabajo (a través, sobre todo, de la flexibilización laboral), entre el capital y el Estado (a través de las privatizaciones, la desregulación y en fin, la “reforma del Estado”, entre el capital y los consumidores (a través de la liberalización de precios), entre el centro y la periferia (a través de la apertura de mercados, los tratados de libre comercio...), y entre capitales grandes y chicos.

En síntesis, es un modelo que extiende y profundiza el dominio del capital sobre el conjunto de la sociedad, o por lo menos, que pretende subordinar todo a la lógica de acumulación del gran capital privado (transnacional). La concentración de capitales, la mengua, la desaparición o absorción de las empresas pequeñas por las grandes, el desempleo, la precarización del trabajo, el em-

pobrecimiento y el incremento de la desigualdad son apenas resultados de ese proceso.

Lo que no está subsumido formalmente al capital, acaba subordinándose económicamente al pretender ser forzado o convertido en mercancía. Por supuesto, lejos estamos de la colonización completa de las actividades humanas por el capital. Muchos espacios de resistencia subsisten (las economías comunitarias) o se re-crean (las economías de trueque, etc.). Hay un claro enfrentamiento entre estos modos económicos.

Finalmente, aquello que no puede ser subsumido a la lógica económica es considerado, no obstante, objeto de dominio político y cultural.

En esta “oscura noche del neoliberalismo” hemos vivido, por un lado, el amplio fracaso del modelo, y al mismo tiempo, su reiterada implementación. Es verdad que en estos últimos años hemos visto el apareamiento de políticas más bien heterodoxas (por ejemplo con Kirchner). Pero al mismo tiempo, hemos visto la continuidad de esas políticas bajo gobiernos que aparentemente deberían (o podrían) haber tomado otras orientaciones (como Lula).

Es aún pronto para saber si estas experiencias indicarán nuevos caminos o si solamente son paréntesis reformistas que buscan aplacar la movilización y el descontento social. Pero en cualquier caso, se ha reflejado en una modificación importante del mapa geopolítico del continente. Y se ha tratado de un cambio que se

*Lo que no está
subsumido formalmente
al capital,
acaba subordinándose
económicamente al
pretender ser forzado o
convertido en
mercancía.
Por supuesto, lejos
estamos de la
colonización completa
de las actividades
humanas por el capital.*

relaciona directamente con las movilizaciones sociales de los años recientes, que fueron los factores de contrapoder que hicieron posible el retorno de los reformismos. Evo Morales no sería comprensible sin la guerra del agua y las movilizaciones que derribaron a dos presidentes; ni Kirchner sin las rebeliones piqueteras; ni Chávez sin las movilizaciones populares que lo devolvieron al poder luego del golpe de estado empresarial, de clara inspiración estadounidense.

El por qué, es claro. La mayoría de estos movimientos han enfrentado diversas manifestaciones políticas o sociales del modelo neoliberal y de su aplicación en cada uno de los países. Ahora bien, esto nos remite a discusiones programáticas ¿qué significa luchar contra el neoliberalismo? ¿qué significa proponerse plantear alternativas al neoliberalismo? ¿hasta dónde deben llegar esas alternativas? Y este es un punto en el que no se ha avanzado mu-

cho. La economía se ha vuelto una especie de caja negra.

4. Movimientos sociales y modificaciones en la estructura de clases

En tercer lugar, los cambios en la economía han modificado también la estructura de clases. Sobre esto, faltan estudios y datos que podrían, quizás, clarificar algunas cosas. Sin embargo, pueden adelantarse algunas consideraciones.

Dos aspectos, entre otros, se relacionan con la implementación del nuevo modelo y con las demandas del capital. Por un lado, la desindustrialización (en algunos lados, deslocalización) que se inscribe en un marco más amplio de relocalización de los capitales, que en buena parte se ha convertido en parte integrante de los movimientos globales del capital. Hay pues, una transformación estructural en las clases empresariales, cuyas determinaciones se enlazan cada vez más inmediatamente a los capitales globalizados y se subordinan a él.

Pero la desindustrialización debilita también la presencia del proletariado, por lo menos, del proletariado en el sentido en que nos habíamos acostumbrado a pensarlo. El trabajo es profundamente modificado. Lo que primero se creyó que era un crecimiento del “sector informal”, se ha revelado como un movimiento profundo de precarización del trabajo en general, con una evidente “informalización” de los trabajos anteriormente formales. Al mismo tiempo, una serie de trabajos aparentemente independientes no

son sino manifestaciones de proletarización disfrazada. De hecho, aunque suene paradójico, podría afirmarse que la nueva imagen del trabajo es el desempleo.

Pero las modificaciones del trabajo no tienen que ver sólo con la economía, sino más propiamente, con la economía política. La flexibilización ha ido de la mano con una fuerte desintegración de vínculos sociales y con un ataque desembozado a las formas de organización de los trabajadores. La crisis del movimiento sindical es inseparable de las privatizaciones, de las modificaciones legales que han limitado e incluso prohibido la sindicalización y las acciones de protesta laboral, de las oleadas de despidos.

Al mismo tiempo, las clases medias han sufrido modificaciones igualmente drásticas. Han vuelto a expandirse las capas “independientes” de ella, vinculadas a negocios pequeños o medianos. Al mismo tiempo, se han incrementado grandemente los ingresos de las capas medias vinculadas a las actividades de punta, mientras que otros sectores han visto estancarse o reducirse su nivel de vida. Vistas estas realidades, es difícil seguir utilizando el término de “clases medias” con el mismo significado que se le daba en los 60 y 70, o incluso en los 80.

Por otra parte, los movimientos migratorios han ido transformando de manera acelerada la figura del trabajador. Nuestros países se han convertido cada vez en más urbanos, mientras que en ciertas zonas ciudades pequeñas funcionan apenas como entorno de las

Pero las modificaciones del trabajo no tienen que ver sólo con la economía sino, más propiamente, con la economía política. La flexibilización ha ido de la mano con una fuerte desintegración de vínculos sociales y con un ataque desembozado a las formas de organización de los trabajadores.

actividades agrícolas (por ejemplo en zonas de producción vinculada a las exportaciones tradicionales o “nuevas”). Mientras las ciudades atraen cada vez más población del campo, los países en general, se convierten en exportadores de fuerza de trabajo barata, más o menos calificada. También el trabajo se globaliza.

Los movimientos sociales de hoy son una expresión de estas mutaciones. Son el reflejo de la nueva estructura de clases. Quizás sean la forma flexible de actuación y expresión de muchos sectores que han sido forzados a flexibilizarse y que, por tanto, encuentran dificultades para organizarse al modo anterior. Desde este punto de vista, no debería resultar extraña la presencia de sectores medios en muchas de las movilizaciones del período.

5. Los movimientos sociales y la redefinición de la dependencia

La implementación del modelo y de las políticas que han incrementado empobrecimiento y desigualdades están ligadas, a ojos vistas, con otra transformación del período: la dependencia.

La globalización económica ha corrido pareja de una redefinición de la relación centro-periferia. Las periferias somos ahora más periféricas que antes. Al haberse vinculado segmentos de las clases dominantes con el capital global, se ha interiorizado el conflicto centro-periferia, y el centro ya no es solamente un lugar que está fuera de nuestros países (bien es cierto que estos fenómenos ya se estaban verificando en las décadas pasadas y habían sido analizados por los teóricos de la dependencia; lo que hoy vivimos es un perfeccionamiento y una profundización de la conversión transnacional de la economía y de las burguesías).

La dependencia económica es inseparable de la dependencia política. Los tratados de libre comercio, las normativas de la OMC, los sometimientos a los dictados del FMI y del Banco Mundial. Las políticas son cada vez menos soberanas. En esto reside parte del éxito de gobiernos como el de Kirchner o de Chávez.

Pero la dependencia económica y la dependencia política enlazan con la dependencia militar. La proliferación de bases militares por varios países de la región son un botón de muestra; así como la definición de la acción de las fuerzas armadas en función de

los intereses geoestratégicos de imperio.

Los movimientos sociales responden también, en parte, aunque desigualmente, a respuestas sociales frente a esta redefinición de los términos de la dependencia. Cada vez más estas demandas se hacen presentes en la acción social.

6. Nuevamente: los movimientos sociales y la política

Entonces, la significación de los movimientos sociales debe ser analizada en este contexto particular, y los debates deben situarse en la realidad a la que los movimientos responden. Los debates interpretativos han sido más o menos efusivos, lo que es buena señal. Por supuesto, son debates políticos, aún cuando a veces aparezcan como discusiones teóricas. Entonces debemos preguntarnos primero “¿Qué está en juego?”.

A nuestro juicio, lo que está en juego es la posibilidad de reconstrucción de una política revolucionaria.

Al haber surgido los movimientos sociales en un vacío político, significa en concreto, que las clases populares y, sobre todo, los sectores en lucha, han carecido de una representación que pudieran considerar más o menos adecuada. Pero la movilización necesita darse, así sea con mínimos niveles de coincidencia y de orientación. Los movimientos sociales se redescubrieron como actores políticos casi por necesidad.

Esto significó que el proceso de constitución de sujetos políticos se aceleró. El vínculo entre lo político y lo social se modificó. Desde los movimientos se pugna por una redefinición de la política desde lo social, y en consecuencia, se iba en dirección a superar la división entre lo político y lo social.

(Los intentos de retomar la diferencia y señalar la preeminencia política del personal político responden, nos parece, a un movimiento de expropiación de la politicidad de los movimientos, incluso si estos afanes provienen desde dentro de los propios movimientos sociales).

En definitiva, son los sentidos de la sociedad lo que está en juego, en la medida en que está en cuestión los sentidos de acción política de los sujetos.

Pero este debate, en la práctica, implica seriamente a los componentes de los movimientos. Se ha traducido, en consecuencia, en profundas tensiones, disensiones, e incluso rupturas. Las rupturas pueden parecer a veces marcadas más por intereses inmediatos, y es probable que en muchos casos mucho haya de eso. No obstante, situadas en la perspectiva de las determinaciones objetivas que constituyen hoy la dinámica de los movimientos sociales, nos parece que responden a temas de mayor profundidad. Ya señalamos uno: el carácter de la constitución política de los sujetos. Otro tiene que ver con la definición estratégica.

La politicidad casi espontánea generada en la dinámica de movilización se cruza con el sen-

tido tradicional de la política: la subordinación a los espacios institucionales y la representación. Son dos tendencias que se superponen, se niegan, se llaman, pero implican potencialidades enteramente divergentes.

Divergentes porque se relacionan con la definición de estrategias. ¿Cómo se vinculan las estrategias políticas que devienen de la acción social y las estrategias que derivan de la participación, por ejemplo, en elecciones? ¿Cómo encontrar un puente entre las alianzas que surgen naturalmente de la lucha social y aquellas otras que se buscan en el campo electoral?

Porque, mirando la experiencia reciente, parecería ser que las lógicas originadas en la lucha social apuntan claramente a la búsqueda de constituir un bloque social de todos los sectores oprimidos de la sociedad (lo que se construye no tanto como discurso, sino como reconocimiento de la extensión de la movilización) y a la independencia social y política de los movimientos con respecto a las formaciones de las clases dominantes. Es más, en ciertos casos se ha llegado a vislumbrar con absoluta claridad un antagonismo de clases claramente delineado por la acción tanto de las clases subalternas cuanto de las clases dominantes. Nuevamente: lo que se vislumbra se entrevé en la lucha social más que en las elaboraciones discursivas: los momentos más altos de las confrontaciones sociales en Argentina, Ecuador, Bolivia o Venezuela dan claras muestras de lo que decimos.

Por el contrario, la acción política ha tendido a ser mirada como escalones de acceso al gobierno y, por lo tanto, las alianzas son pensadas en términos de votos y de pretendidas proximidades que desconsideran las líneas de demarcación e identidades generadas en la lucha y en la movilización. La independencia de clase acaba diluyéndose: sea por las alianzas con sectores empresariales, sea por la declinación de principios de política: el precio que se paga por obtener el favor de la alianza. De esta manera, el horizonte se achica.

Ahora bien: ocurre que ambas tendencias existen al mismo tiempo al interior de los movimientos sociales. La disputa por orientar el sentido de la acción ha sido evidente y reiterada en casi todos nuestros países: Argentina, Brasil, Ecuador...

Un trasfondo (y, al mismo tiempo, un momento) de este debate político práctico es la redefinición o reconstitución, según los casos, de las definiciones políticas estratégicas. Resultan obvios los pasos que en ese sentido han dado las corrientes más reformistas de los movimientos sociales y políticos¹. En ellos se delinean con claridad algunos puntos centrales: la primacía de los espacios institucionales; la separación de lo social y lo político (y la subordinación del primero al segundo); la alianza con sectores empresariales; el direccionamiento del programa de acción hacia un programa mínimo que no avance más allá de los marcos generales dados; un discurso antineoliberal que se detiene cuando se trata de pensar el anticapitalismo (y que

ha llegado incluso a realizar más de una concesión al propio neoliberalismo); en fin: conductas que recuerdan toda real politik que en el mundo ha sido.

En cambio, en el campo de las posiciones radicales los avances han sido menores. Es verdad que fácilmente pueden seguirse las pulsiones de la multitud para elaborar aunque sea un esbozo inicial de estrategia política. Pero eso aún no ha sido hecho. Las corrientes radicales, ahora como al inicio de los períodos democráticos caminan sobre un tensionamiento que las ha marcado de entonces para acá: avanzar sobre la delgada línea que queda situada entre la caída en el reformismo y dejarse llevar por las tentaciones ultristas –que, ultimatas frente a la acción social, terminan por desconocer en los hechos todos los avances que ha logrado el propio movimiento social.

Un último aspecto para mencionar: la democracia. La acción social la ha vuelto a traer a la discusión. Ocurre que los procesos de “retorno” y las participaciones en elecciones y en instituciones fueron creando un cierto sentido de aceptación fácil de la democracia; de la democracia que existe, con las formas en que existe: representativa, henchida de fetichismos institucionalistas y juristicistas, acotada por marcos institucionales y normativos siempre previamente definidos; la democracia como ejercicio individual y electoral. Parecía que no había posibilidad de algo diferente. Incluso se ha hablado mucho de retomar “la democracia sin adjetivos”.

Pero ocurre que una cosa tal nunca ha existido. Habían otras aspiraciones democráticas que los movimientos sociales de este tiempo han logrado sacar nuevamente a la luz del día (y de la noche). El cuestionamiento de la representación es un claro indicio; pues se ha llegado a cuestionar no esta o aquella representación, sino la representación misma: un sentido muy extendido es que no queremos ser representados, queremos representarnos nosotros mismos.

De igual manera, el claro cuestionamiento de la democracia como gobernabilidad, es decir, de la política como acción y atributo del que, en fin, quedan excluidas las multitudes. Cuando una anciana indígena ecuatoriana dice “No estamos de acuerdo con este gobierno: hemos de cambiar normas”; cuando las movilizaciones más recientes en la Argentina, en Ecuador y en Bolivia han repetido “Que se vayan todos”, lo que muestran es la recuperación de la noción de democracia como autogobierno. Y este es un cambio de profunda significación.

En fin: para terminar, repetiremos que estos significados más altos y profundos de los movimientos no aparecen en estado puro, y de contornos claros. A veces, sí, la mayor parte de veces, quizás no. Los movimientos sociales no son solamente actores centrales en los conflictos que estamos viviendo: son ellos mismos campo de batalla.

1. Utilizamos acá el término reformismo en su sentido histórico.

Sociedad civil y partidos: Más allá del corporativismo

*Fernando Bustamante P.**

En el Ecuador y en muchos otros países del mundo existe abundante evidencia de que los partidos políticos, tal como los hemos conocido hasta ahora, se hallan en una profunda crisis. Esta crisis reviste varias dimensiones: orgánicas, morales, de credibilidad, de funciones y de pensamiento. En suma, existe cada vez más una difundida creencia de que estas formas de instituir la participación política sencillamente no están cumpliendo con el papel que normalmente se les ha encomendado y que tradicionalmente se ha esperado que cumplan.

En general, los partidos políticos han justificado su existencia y su importancia por el cumplimiento de ciertas funciones que parecen indispensables en el marco de una poliarquía (democracia) moderna¹. Estas funciones son las siguientes²:

- Representar intereses de sus votantes, simpatizantes, afiliados y de segmentos significativos de la ciudadanía que confían en ellos y les delegan, por medio del voto, o de otras formas de expresión de confianza y consentimiento, la cura y procuración de demandas y necesidades, dirigidas al poder público y expresables en el espacio del orden político.
- Permitir y proporcionar un canal de participación en los asuntos públicos, a sus miembros, simpatizantes, afiliados y bases.

- Permitir, promover y proporcionar un espacio institucional para la rendición de cuentas por parte de los funcionarios electos.
- Ser la escuela por excelencia de la formación de líderes y cuadros políticos a todos los niveles de la función pública.
- Desarrollar, consolidar identidades sociales y políticas, así como fomentar el desarrollo de cultura(s) cívica(s) a través de las cuales los actores políticos se constituyen y se posicionan unos frente a otros.
- Articular y “universalizar” intereses, filtrando los particularismos para poder formular propuestas y políticas que representen el interés público y den a la acción estatal una clara orientación de defensa de aquello que es de interés común.

Al margen de lo que ocurra en otros países, parece muy evidente que los partidos políticos ecuatorianos no están cumpliendo idóneamente ninguna de estas tareas, y en ciertos casos no las están cumpliendo en absoluto³.

Al menos en parte, este fracaso ha dado pie para que en muchos círculos surja – de manera más o menos espontánea-, la idea de reemplazar a los partidos en sus funciones mediante el fortalecimiento de otras instancias que tal vez pudiesen cumplir análogas funciones a las que históricamente las colectividades han venido cumpliendo. Tras de esta postura, hay diversas motivaciones, que van desde la interesada búsqueda

de hacerse con cuotas de poder sin necesidad de pasar por los procesos de formación de opinión y de representación que los partidos normalmente exigen, o bien la impaciencia ante la aparente imposibilidad de reconstituir el partidismo o de reformar los supuestamente insanables partidos “realmente existentes”.

Pero, sea cual sea el origen del anti-partidismo, la realidad es que este debe- por fuerza-, proponer mecanismos alternativos que puedan cumplir simultáneamente las seis funciones que hemos mencionado más arriba: representación, participación, exigencia de cuentas, formación

* Catedrático universitario y politólogo ecuatoriano.

1. El concepto de "poliarquía" fue acuñado por Robert Dahl y se refiere a la idea de que la democracia es en realidad un sistema de "poderes limitados" y balanceados, que impiden la tiranía, pero que no permiten, sino de manera muy parcial, la verdadera participación ciudadana en la conducción estatal. Al menos en el sentido fuertemente normativo de la teoría clásica liberal. Ver DAHL, R.A. A Preface to Democratic Theory, the University of Chicago Press, 1.956.



de líderes/cuadros, articulación/universalización de intereses y constitución simbólica de identidades. A continuación examinaremos brevemente estas alternativas y trataremos de mostrar cómo ninguna de ellas parece adecuada. Finalmente, volveremos sobre el tema de los partidos y trataremos de fundamentar la opinión de que la cuestión de la construcción partidista, lejos de hallarse superada, es hoy día más importante y más urgente que nunca.

¿La sociedad civil en lugar de los partidos?

En las ideas que se han mencionado, se insinúa la posibilidad de desarrollar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para realizar las funciones tradicionalmente entregadas a los partidos. Tales propuestas van desde la idea de reemplazar la representación territorial de electorados universalistas por la representación funcional de organismos sectoriales, hasta la aparentemente más inicua de potenciar las capacidades fiscalizadas de la ciudadanía, organizada o no; o de entregar a organizaciones no gubernamentales el mane-

...en la definición más aceptada de "sociedad civil", lo específico de sus organizaciones es que no tienen por objeto competir en elecciones o ganar votos o cargos electivos. Cuando una OSC hace tal cosa, se convierte, de hecho, -quíéralo o no-, en un partido político.

jo de ciertos asuntos de interés público o de servicios presumiblemente estatales.

Es preciso, en primer lugar, precisar qué ha de entenderse por sociedad civil y cotejar dicha definición con la que cabe dar de los partidos políticos. De manera muy sencilla, y sin entrar en un dilatado debate académico sobre la larga y compleja historia del término, "sociedad civil" se refiere a aquel conjunto de organi-

zaciones sociales que reúnen al menos dos rasgos: a) no tienen como objetivo inmediato el lucro económico⁴, y b) no son parte del Estado, y por tanto no tienen a su cargo la formulación y ejecución de "políticas públicas". De hecho, en la definición más aceptada de "sociedad civil", lo específico de sus organizaciones es que no tienen por objeto competir en elecciones o ganar votos o cargos electivos. Cuando una OSC hace tal cosa, se convierte, de hecho, -quíéralo o no-, en un partido político. Es más, podríamos sugerir que algunos partidos políticos ecuatorianos, son en efecto, OSC's que han asumido -de manera por lo demás equivocada-, el papel de partidos.

La contradicción, por cierto, estriba en que mientras las OSC se articulan para defender los intereses y promover la satisfacción de las necesidades de sus integrantes, un partido político no solo que no busca, sino que NO DEBE buscar el interés de sus miembros y militantes. Un partido constituye una propuesta de Gobierno y, por tanto, no le es lícito presentarse como un portador exclusivamente de los deseos de sus integrantes. Prueba de ello

2. Para elaborar esta lista se puede recurrir a varias fuentes y entre ellas: Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos. Madrid. Alianza Editorial, 1999, Lawson, Kay; Merkl, Peter WHEN PARTIES FAIL. Princeton University Press 1988; Duverger, M.: Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1957.
3. Internacional para la Democracia y el Apoyo Electoral (IDEA) Partidos políticos en la región Andina: entre la crisis y el cambio; La Paz-Bolivia 2005; ver también, por ejemplo el artículo de Rafael Roncagliolo en: <http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=129> Pachano, Simón, comp., (2005). Partidos políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio. Lima, IDEA, Lima, 2005 y Pachano, Simón (2004). "Ecuador: Fragmentation and regionalization of Representation". En: Mainwaring, Scott, Bejarano, Ana María y Pizarro, Eduardo, eds., The Crisis of Democratic representation in the Andes, Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame. (En prensa)
4. Aunque es muy frecuente y "normal" que muchas OSC's defiendan los intereses de otras organizaciones que SI tienen fines de lucro. Un ejemplo muy claro son las Cámaras Empresariales. Estas últimas y en tanto tales no pretenden ganar dinero, aunque sirvan a firmas que si tienen tal propósito. Las firmas son organizaciones con fines de lucro, no así las Cámaras. Por ello podemos cómodamente clasificar a las Cámaras como organizaciones de la sociedad civil, pero no así a las empresas que apoyan y sostienen a las Cámaras.

es que ningún partido, por cínico que sea, puede decir abiertamente que su propósito es el provecho de sus miembros. Muy distinto es el caso de las OSC, las cuales pueden legítima y abiertamente constituirse como promotoras de la causa de sus afiliados y bases. De esta forma, la “sociedad civil” constituiría un espacio equidistante del estado, del mercado y de la vida familiar (aunque cabe hacer la salvedad de que en la sociedad donde la familia sigue siendo una institución socio-política decisiva, y no solamente una institución de la privacidad y de la esfera íntima de las personas, esta última precisión debe ser relajada y relativizada: en sociedades de familia extensa, la familia también forma parte de la sociedad civil)⁵.

Ahora bien, como puede verse, la “sociedad civil” constituye un espacio en donde las personas y grupos se organizan para propósitos propiamente sociales o vinculados a la sociabilidad y, asimismo, con fines que son, desde ya políticos: Presentar una petición, promover un proyecto de ley, intentar poner en agenda ciertas demandas grupales, forman parte de la acción política “normal” de las OSC. Pero, y esto es decisivo: las OSC no son las encargadas de “procesar” estas demandas o de poner en marcha las decisiones públicas sobre los temas de su interés.

La razón para ello es la siguiente: todas y cada una de las OSC, tiene como meta y propósito el bien particular de sus asociados: por numerosos que estos sean, solo serán un segmento minoritario de la ciudadanía o su interés

...todas y cada una de las OSC, tiene como meta y propósito el bien particular de sus asociados: Por numerosos que estos sean, solo serán un segmento minoritario de la ciudadanía o, su interés cubrirá un segmento limitado de los intereses que sus integrantes tienen en tanto personas

cubrirá un segmento limitado de los intereses que sus integrantes tienen en tanto personas: el interés del socio de un sindicato, en tanto trabajador, no cubre la universalidad de su persona en tanto ciudadano. El trabajador (al igual que el empresario, el profesional, el estudiante o cualquier otra posición identitaria social) no agota su humanidad en su posición de clase (por importante que esta última sea). En la vida pública y estatal, es donde toda esta pluralidad de determinaciones socio-lógicas y personales debe articularse y universalizarse, de mane-

ra tal que la persona y sus identidades concurren además en su personalidad ciudadana igualitaria. La esfera pública es el escenario de la igualdad, y es por ello, que solo en la política pública las personas adquieren colectivamente su realidad humana genérica en tanto iguales. La esfera de la sociedad civil, en cambio, es la esfera de la diferencia, en donde cada cual expresa, en cada OSC, una parte finita de su ser como persona, y en donde cada OSC expresa tan solo una dimensión limitada y finita del interés público. Precisamente lo que es decisivo es que debe existir un espacio o ámbito, por encima de la sociedad civil, que este en condiciones de sacar a las personas de su unilateralidad y a los grupos de su exclusivismo, para hacerlos existir como miembros de una comunidad política fundamentada en la igualdad.

Es por lo anterior, que un intento de cimentar la representación política de manera dominante en las OSC, simplemente no puede constituir una situación estatal y ciudadana. Entregar funciones estatales a las OSC implica dos consecuencias normativamente indeseables: por una parte, puede derivar en un pluralismo anárquico y, por otra, en un corporativismo estamental.

5. Hay muchos intentos de hallar una definición de la sociedad civil que alcance cierto consenso. La aquí presentada no es materia de acuerdo generalizado, ver, por ejemplo la que realiza David Colas que es aún más sencilla. "Designa la vida social organizada según su propia lógica, principalmente asociativa, que asegura la dinámica económica, cultural y política".

En http://www.wolton.cnrs.fr/glossaire/esp_sociedad_civil.htm

Ver también la intervención de Héctor Pesquera en el taller sobre Partidos Políticos y Movimientos Sociales efectuado en el Foro de Sao Paulo, la cual se aproxima aún más a la aquí sugerida:

<http://www.redbetances.com/cnh/towi/Partidos%20Politicoss%20Sociedad%20Civil.htm>

En efecto: un “gobierno de la sociedad civil” carente de una instancia articuladora relativamente independiente de ésta, se halla imposibilitado de hallar un terreno de consenso político y valórico más allá de las demandas de las componentes. De esta forma, este pluralismo “desenfrenado” termina en la lucha cabalística de una miríada infinitamente divisible de intereses que no hallan un punto de articulación en un espacio común de necesidades y consensos. De hecho, la quiebra de los partidos políticos se asocia, casi de inmediato, con el surgimiento de una lucha tendencialmente caótica entre grupos de interés, y en la cual, no es posible jerarquizar necesidades, articular valores y establecer prioridades: vale tanto un interés o una demanda como cualquier otra, y en esta anomia, tan solo el poder de imposición violenta o de chantaje deciden. Mucho de lo que ocurre en la política y en la administración estatal ecuatoriana acusa, precisamente, síntomas de lo mencionado.

Simétrico pero diferente al pulular del pluralismo anárquico es el corporativismo estamental. En efecto, en esta salida, las OSC se reparten áreas jurisdiccionales de su interés privativo y se establecen como una especie de gobierno segmentado. En el corporativismo, diferentes estamentos de la sociedad civil adquieren tutela política y monopolios decisionales sobre aquellos sectores de la actividad en los cuales ellos mismos tienen especial o particular interés⁶. En el corporativismo, desaparece la idea de que la política pública debe ser imparcial, y

El problema del corporativismo radica precisamente en que desaparece la posibilidad de una instancia pública que cautele el interés de la ciudadanía como tal. Esta falta de imparcialidad termina haciendo de los sistemas corporativos, básicamente sistemas de composición de privilegios.

nos hallamos ante la realidad de que el interés preeminente se convierte en la fuente de la legitimidad de la tutela de ciertos estamentos sobre áreas de la vida social o pública. Esto conforma definitivamente un “estado de estamentos”⁷, que termina en un mosaico de ámbitos de jurisdicción discretos y entendidos como privilegios o prebendas reconocidas públicamente. El problema del corporativismo, radica precisamente en que desaparece la posibilidad de una instancia pública que cautele el interés de la ciudadana como tal. Esta falta de imparcialidad termina haciendo de los sistemas corporativos

básicamente sistemas de composición de privilegios. En estas condiciones no existen ciudadanos, sino tan solo titulares de constelaciones discretas de prerrogativas, frente a los cuales los excluidos (la enorme mayoría) aparecen como desvalidos cívicos. Los sistemas de status estamental son precisamente el universo de las OSC convertidas en poder estatal directo y particularista. En tales condiciones, lo que quiera que tal sistema signifique, ciertamente, no involucra redundancia en la constitución de una democracia, de un orden republicano, de un ámbito público de tipo ciudadano.

Existe, en el marco de la sociedad civil, otro tipo de organizaciones que podrían presentarse como candidatas a tomar el papel de los partidos: se trata de las organizaciones de “abogacía”, las cuales difieren de las OSC clásicas, en que no pretenden defender intereses o derechos de sus asociados o empelados, sino que asumen la lucha por una causa o por un grupo en cuyo nombre actúan o en defensa del cual justifican su accionar.

Estas organizaciones pueden también ser llamadas “organizaciones de empresariado moral” (OEM)⁸. Tal denominación surge del hecho de que sus promotores actúan impelidos por un interés en fabricar y vender una causa o

-
6. Sobre el corporativismo es recomendable leer los textos reunidos en **El fin de siglo del corporativismo**. Jorge Lanzaro (compilador) Nueva Sociedad, Caracas, 1998,
 7. El concepto de “estado estamental” puede hallarse claramente precisado en Max Weber. *Economy and society* (Berkeley: University of California Press, 1978), vol. II.
 8. Sobre el concepto de empresariado moral: Loseke, D. R. (1999). *Thinking about social problems: An introduction to constructionist perspectives*; New York; Aldine de Gruyter

incorporar esta a una agenda pública. Lo que se vende en este caso no es una mercancía o un servicio, sino que “bienes morales” o servicios extra-económicos (filantrópicos, benéficos, de promoción de necesidades de grupos vulnerables etc.).

Típicamente, muchas ONG's asumen este tipo de “empresariado” sin fines de lucro y actúan en presunto subsidio de grupos o valores incapaces de representarse a si mismos. Este tipo de OSC's tienen una cierta pretensión de altruismo, al no buscar satisfacer necesidades del empresario que las promueve, sino de terceros putativamente representados. A diferencia de la representación política, la representación que hacen las ONG's de sus clientelas, no deriva de un acto voluntario y presuntamente libre de la voluntad de los afectados. El representante político deriva su legitimidad del acto volitivo, por medio del cual es “elegido” o “escogido” por la ciudadanía (en ejercicio de su libertad de optar) para representarla. El “empresario moral” en cambio no ha recibido un mandato y asume por su cuenta y riesgo, por su propia convicción o interés; la cura del interés putativo del beneficiario. Se trata de una representación atribuida que, por ello mismo, es siempre controvertible y problemática.

Ahora bien, el empresariado moral tampoco puede reemplazar a la esfera de la ciudadanía política. Y esto por dos razones principales: en primer lugar, porque las organizaciones de empresariado moral, no pueden dar prueba concluyente e ínter subjetivamente

...la ONG no puede ser vista como plenamente imputable y responsable frente a un público, frente al cual carece de mecanicismos ciertos de rendición de cuentas y de exigibilidad (como podría ser el tener que enfrentar elecciones o referéndum frente a sus beneficiarios, clientes o bases putativas).

validable del carácter de su representatividad. Esta es, en el mejor de los casos presunta, y no se deriva de la autonomía de la voluntad del representado, antes bien supone a esta voluntad en capitis diminutio. La OEM surge precisamente de que el representado no puede auto-representarse y requiere de esta representación “impuesta” y presunta. Si el representado pudiese auto-representarse mediante un acto positivo de la voluntad (a través del voto o de otras formas de auto-expresión), la OEM no sería necesaria ni pudiese asumir una postura de “cura” del presunto representado.

De esta forma, la representatividad de la ONG (u OEM) no puede ser de tipo democrático, sino que nos remite –indirectamente – a un mundo de (más o menos benevolente y benéfico) paternalismo soterrado.

Por otra parte, no debe olvidarse que el empresariado moral desarrolla sus propios intereses privados e investidos en la empresa en la cual gasta sus recursos, capitales y energía. Las empresas morales están fuertemente sometidas a la “latencia de funciones”⁹. La organización y la voluntad particular de sus integrantes adquieren entidad propia. No solo se trata de servir a los beneficiarios o a la “causa” que da origen a la ONG o OEM: la organización y sus miembros están vitalmente interesados en incrementar la dotación de poder, recursos, influencia y credibilidad de la organización y de sus promotores. La organización se convierte en fin de si misma y fin en si mismo. Esto por cierto interactúa de maneras complejas, y a veces contradictorias, con el fin “manifiesto” de la empresa moral. De esta manera, la ONG no puede ser vista como plenamente imputable y responsable frente a un público, frente al cual carece de mecanicismos ciertos de rendición de cuentas y de exigibilidad (como podría ser el tener que enfrentar elecciones o referéndum frente a sus beneficiarios, clientes o bases putativas).

9. El concepto de “funciones latentes” recibió un tratamiento todavía clásico en Merton Robert King, La Teoría Y Estructuras Sociales. Editorial. Fondo de Cultura Económica. México, 1987.

En suma, las OEM no pueden sustituir la función estatal, porque su origen y relación con la ciudadanía son de naturaleza muy diversa y consecuencias muy diferentes a aquellas que emanan de las instituciones de la democracia. Ellas parten de una arrogación, que puede ser moralmente virtuosa, pero que es heterónoma desde la perspectiva de la ciudadanía. Las instituciones de la democracia, en cambio, deben partir de la radical decisión de aceptar la autonomía de la voluntad ciudadana en todas sus consecuencias universalistas e igualitarias. Tal cosa no parece estar al alcance ni de las OSC, ni de las OEM.

Volviendo a los partidos

En las páginas anteriores se ha señalado y se ha intentado demostrar que la sociedad civil y sus diferentes formas más importantes de organización, no pueden, ni deben pretender reemplazar o asumir la función de los partidos. Parece preciso, pues, retornar sobre los partidos a fin de encontrar solución a la “crisis de representación” política que aqueja a países como el Ecuador.

De hecho, el anti-partidismo se nutre de un malentendido: las fallas de las organizaciones con denominación de partidos, se achacan y se atribuyen al concepto mismo de partido. Si nos atenemos a dicho concepto, nos podremos fácilmente dar cuenta, que, con muy pocas y débiles excepciones, las organizaciones que se llaman a sí mismas partidos, no cumplen con ninguna de las condiciones que hacen a un partido político, ser, en efecto, y

no solo de manera nominal; un partido.

El problema, así planteado, no son los partidos, sino su ausencia, y la conculcación que su lugar propio sufre a manos de organizaciones que solo tienen de “partidos” el nombre. El problema, por tanto, consiste, primero en desnudar el hecho de que estos grupos denominados “partidos” no son sino usurpadores del lugar que le cabría al partidismo. Puede sostenerse que se trata, de hecho, de empresas electorales de tipo familiar (o sea “firmas”), que a través de la acción política, buscan conquistar posiciones estatales que les permitan monopolizar y extorsionar recursos para alimentar a la propia empresa política y al sistema prebendal que esta alienta y en la cual se sostiene. De esta forma, este tipo de pseudo-partidos, no pertenece sino al ámbito del interés privado y se mueve en la esfera de la colusión monopólica, con el propósito de obtener ventajas particulares de tipo material y simbólico para sus propietarios. Se trata de empresas crematísticas y políticas particulares que parasitan al estado para reproducir sus redes económicas y de poder, y utilizarla para extraer más rentas del estado y de la explotación política de la ciudadanía.

Otros partidos, en cambio, representan una velada institucionalización del corporativismo. Se trata de OSC's travestidas en partidos y que se presentan a las

elecciones para ganar algunos diputados o representantes que pueden defender en los espacios de decisión pública, los intereses particulares (grupales) de sus asociados y de sus bases. Su horizonte, no es sino el de una defensa gremial, pero dislocada de su espacio propio y específico (el cabildeo de la Sociedad civil), y consagrada a ocupar posiciones en el estado, a fin de colonizarlo prebendalmente y reproducir un vergonzante sistema de tipo estatal.

La tarea ciudadana, es pues, descorporativizar y desprivatizar el estado, a fin de, en un mismo movimiento, constituir partidos políticos (ahora ausentes) y abrir el espacio para su posible acción política efectiva¹⁰.

A la sociedad le compete, no tanto soslayar o eludir el tema del partidismo, y mucho menos sumarse a un anti-partidismo abstracto y estéril; sino más bien, abocarse a la ardua y paciente doble tarea de construir el partidismo y construir partidos. Ello no implica tan solo “montar” organizaciones de este tipo, sino que reconstituir una praxis y unas rutinas operacionales que sean las apropiadas a la efectiva institucionalización del partidismo como tal. La crisis de las organizaciones que llevan el membrete de “partidos” proporciona el momento y la ocasión para repensar y reaprender lo que es un partido y, desde allí iniciar el camino de su construcción.

10. Fernando Bustamante "En Los Arrabales del Estado de Naturaleza"; en Ecuador Debate; N° 64; Quito-Ecuador; Abril.

Movimientos Sociales: Hipótesis para el debate

Marc Saint Upéry*

Argumenté en un artículo anterior que parte del atractivo de los movimientos sociales entre los intelectuales de la izquierda radical responde a una mezcla de frustraciones y de nostalgias inconfesadas que, a menudo, les lleva a percepciones sesgadas y fantasiosas de la dinámica empírica de dichos movimientos. Como escribía entonces: “Hoy en día, no se sabe muy bien qué es la revolución, ni quiénes son los revolucionarios y los reformistas, entonces la mejor manera de distinguir lo ‘puro’ de lo ‘impuro’ puede ser defender la virginidad de movimientos sociales idealizados contra cualquier contaminación institucional”¹. De ahí que el debate sobre movimientos sociales y política institucional se encuentra enredado en una serie de reflejos condicionados y de presupuestos inexplicados. Como lo señalan Pablo Ospina y sus coautores en una encuesta en curso de publicación sobre el movimiento indígena ecuatoriano y sus gobiernos locales, “uno de los defectos de la tesis de los decepcionados por el debilitamiento del potencial contestatario y anti-capitalista del movimiento indio, es que no hay suficientes evidencias de que hubiese existido una intención semejante ‘antes’ de haber sido anulada ‘ahora’ por efectos de la participación electoral”². Eso vale para muchos casos, incluso en amplia medida para el movimiento obrero clásico. Sin embargo, la espe-

ranza que los movimientos sociales puedan ofrecernos una especie de “plusvalía” de radicalidad prometedora de nuevas alternativas políticas y sociales tiene una cierta racionalidad y legitimidad en vista de la profunda frustración legada por las grandes experiencias de transformación social del siglo XX. Vale la pena volver brevemente sobre estas experiencias.

La socialdemocracia clásica preconizaba un matrimonio de razón con un capitalismo nacional que necesitaba nuevos equilibrios sociales. En el marco de lo que algunos describen como el “compromiso fordista”, alcanzó en algunos países del Norte niveles de bienestar, de reducción de las desigualdades y de democratización sociales bastante envidiables y nítidamente superiores al desempeño de los despotismos burocráticos de tipo soviético³. Sin ni siquiera explayarse sobre las decenas de millones de muertos de la colectivización forzada, de las purgas stalinistas y del gulag, o sobre los campos de reeducación chinos, la barbarie de la Revolución cultural o del genocidio camboyano, el fracaso generalizado de las economías de tipo soviético se manifestó por una incapacidad notable de superar la fase supuestamente transitoria de la acumulación extensiva (y sanguinaria)⁴, que el propio Lenin definía en abril del 1918 como necesaria imitación “de la escuela del capitalismo de Estado alemán, aplicándonos a asimilarlo con todas nuestras fuerzas, sin

escatimar los procedimientos dictatoriales para implantarlo en Rusia más rápido aún de lo que había hecho Pedro I para los costumbres occidentales, sin vacilar frente al uso de métodos bárbaros para luchar contra la barbarie”. Mientras algunos se satisfacían de la explicación de tamaña catástrofe por un simple problema de aplicación defectuosa de principios sanos e indiscutibles, otros se dejaron convencer que la vía reformista gradual elegida por los socialdemócratas, si supiese añadir a su recetario ingredientes como la equidad de género, el desarrollo sustentable y las ansias de participación ciudadana, podría ofrecer una alternativa decente en la espera de tiempos mejores.

* Periodista e Investigador social francés radicado en el Ecuador.

1. Marc Saint-Upéry, “Los límites de los movimientos sociales: Una reflexión intempestiva”, *La Insignia*, noviembre del 2004 (texto también publicado bajo el título “La mistificación de lo social” en la revista *Barrataria de La Paz*).



Sin embargo, como lo señala Tarso Genro, “la socialdemocracia, como organización socio-económica completa, solo existe como experiencia restringida en pocos países, si bien algunas cláusulas del contrato social-demócrata fueron implementadas en varias naciones del globo. Hoy, la mayoría de esta experiencias está en crisis y proceso de ‘adaptación’ a las recetas neoliberales, lo que demuestra la bajísima capacidad de resistencia de la social-democracia a las exigencias reaccionarias del capital financiero globalizado”⁵. De hecho, con la “tercera vía” blairista y sus equivalentes, ya no se trata de un matrimonio de razón, sino de un matrimonio de amor con un capitalismo nómada y especulativo sin ningún compromiso social serio, y los socialdemócratas se limitan a menudo a defender la modernización de la infraestructura económica y los intereses de la nuevas clases medias.

Mientras tanto, en el mismo Norte desarrollado, hay cada vez más gente que rechaza la inseguridad económica generalizada, la colonización de la existencia por el mercado e incluso la privatización biotecnológica de la vida. El mal llamado movimiento antiglobalización expresa el deseo de preservar los derechos sociales, proteger los equilibrios naturales amenazados y tener una democracia más participativa, tendiendo puentes con las luchas de los pueblos del Sur. Surgen en el mundo nuevas líneas de fractura que parecen desmentir la validez de un enfoque gradualista moderado. La agresividad redoblada de la potencia norteamericana parece vinculada a un inicio de

...Surgen en el mundo nuevas líneas de fractura que parecen desmentir la validez de un enfoque gradualista moderado. La agresividad redoblada de la potencia norteamericana parece vinculada a un inicio de declive imperial, tal una larga agonía de bestia herida que la puede volver aun más peligrosa.

declive imperial, tal una larga agonía de bestia herida que la puede volver aun más peligrosa. El nacionalismo mesiánico y unilateralita de los neoconservadores se combina con las perspectivas catastróficas que anuncian la creciente fragilidad energética y financiera de EE.UU., el aumento de las desigualdades internas, la degradación de las infraestructuras y la automutilación de la capacidad de intervención pública (cf. el huracán Katrina). El auge espectacular de China y de India, la posible consolidación de un polo nacional-desarrollista en la fachada atlántica de Sudamérica, cohabitan con el caos medio-oriental, el lento hundimiento de África, la multiplicación de las alertas ambientales y epidemiológicas que amenazan con volver aun más ingobernable la

divergencia entre Norte desarrollado y Sur empobrecido. Un escenario que parecería confirmar lo que se solía definir como “la agudización de las contradicciones del capitalismo” —en realidad no sólo las del capitalismo, sino también la contradicción entre el desarrollo industrial en general y la segunda ley de la termodinámica. Pero al contrario de lo que se solía decir, estas contradicciones no garantizan ninguna vía de superación automática, sino que pueden perfectamente ser metabolizadas por el mismo sistema y desembocar en una combinación de democracia restringida y liberalismo autoritario (Locke para las élites y Hobbes para las masas, como decía un analista perspicaz) con un “turbocapitalismo” ultra-flexible que segmenta y recompone sin fin la sociedad en islotes incomunicados y privatizados cuyo único imaginario común es el líquido amniótico del espectáculo mediático, con sus efectos narcóticos de generación de una creciente inmadurez colectiva. Con todos los matices y las diferencias acumuladas entre los países del centro y de la periferia (ellas mismas relativizadas por la emergencia de un “Norte” dentro del “Sur” y de un “Sur” dentro del “Norte”), el escenario se podría describir más o menos como sigue: para los profesionales calificados y las clases medias más o menos competitivas, la auto-explotación “creativa” al servicio de la subsunción real de las redes de inteligencia colectiva por el capitalismo cognitivo; para la plebe sin calidades, la exclusión y/o la neo-domesticidad precarizada dentro de una economía post-for-

dista de servicios y de servidores –o más bien de siervos desterritorializados.

En este marco poco alentador, ¿qué papel pueden jugar los movimientos sociales?, a sabiendas de que son marcados por limitaciones que he tratado de describir en otra ocasión: el hecho de que, si bien pueden tener una influencia indirecta, son estructuralmente ajenos a los mecanismos centrales de formación de las políticas públicas, que se encuentran generalmente minoritarios en la sociedad y entre los mismos sectores populares y subalternos, y que no tienen ninguna perspectiva clara y garantizada de sociedad alternativa⁶. Propondría como hipótesis las perspectivas siguientes:

- La repolitización de los problemas técnicos y supuestamente “gerenciales” y la fiscalización de los mecanismos de decisión, lo que no significa complacerse en la ignorancia populista o la remoción ideológica de los problemas de coordinación, de eficiencia y de sustentabilidad de la producción económica y de la reproducción social.
- La reconquista de los espacios públicos contra el embate privatizador del capital y del individualismo consumista, lo que no significa la negación de la esfera de la autonomía individual ni de la legítima separación entre público y privado⁷, aún menos el alistamiento de todas las energías individuales en una sociedad de movilización permanente y de saturación del cuerpo social por las

*Más allá de una
siempre posible
involución hacia un
gremialismo o un
corporatismo sin
horizonte, ahí estaría el
espacio de
intervención de los
movimientos sociales.*

*O sea que no
se trata de
concebirlos como
substituto de una
vanguardia
leninista...*

fantasías heroicas del “líder” o de la “vanguardia”.

- La resistencia a la colonización del mundo de la vida por el fetichismo de la mercancía y la división del trabajo, lo que no significa ceder a un sueño infantil de regreso a una plenitud comunitaria perdida, de transparencia y homogeneidad social tranquilizadora y de voluptuosa fusión con la madre naturaleza⁸.

Más allá de una siempre posible involución hacia un gremialismo o un corporatismo sin horizonte, ahí estaría el espacio de intervención de los movimientos sociales.

O sea que no se trata de concebirlos como sustituto de una vanguardia leninista, lo que es más o menos el modo en que Atilio Borón, en el Foro Social de Quito de 2004, describía el MST, “organización de cuadros revolucionarios profesionales” supuestamente capaz de hegemonizar las fuerzas más avanzadas del campo popular, olvidando su carácter de movimiento campesino sectorial en una sociedad con más de 80% de población urbana. Tampoco se trata de ver los movimientos sociales como contra-sociedad ajena a todas las perversiones jerárquicas y competitivas del sistema imperante, lo que parece ser la visión un poco angelical y consoladora de un autor como Raúl Zibechi y de los admiradores de John Holloway.

Ahora bien, como lo señalaba en el artículo citado, “por sí misma, la dinámica de la autoorganización social no diluye los dilemas de la lucha por el poder estatal, de la formación conflictiva de la voluntad general, de la institucionalización de las reglas de convivencia social y de deliberación pública, de la administración equitativa de los recursos, de la representación de los ciudadanos y de su participación activa en los asuntos públicos”. Este es el espacio propio de lo político, cuya frontera con lo social es por supuesto porosa, cambiante y objeto de disputa permanente entre los mismos actores sociales. Sin

6. Para los detalles de este análisis, ver Marc Saint-Upéry, “Los límites de los movimientos sociales”, op. cit.

7. Una conquista irrenunciable de la Ilustración, si bien hay que deconstruir su oculto sesgo de género, como bien lo han demostrado las teóricas feministas.

8. Ver el recuadro adjunto: “El espejismo comunitario”.

embargo, la democracia –y eso incluye una democracia poscapitalista– como construcción social de un espacio público, donde las reglas plasman los conflictos y éstos reestructuran las reglas y transforman a los mismos actores y sus intereses exige, también otros instrumentos de intervención pública e institucional que la dialéctica reivindicativa e identitaria de los movimientos sociales. Plantear el tema de la especificidad de la organización política no significa para la izquierda que se deba retomar la forma-partido clásica, sea en su versión reformista o revolucionaria. De hecho, la flexibilidad y la pluralización de los modos de identificación social, las formas de articulación en red facilitadas tanto por la tecnologías de comunicación como por la cultura antijerárquica y “horizontalista” de los nuevos actores sociales (la juventud en particular), la misma complejidad estructural de las sociedades contemporáneas, implican repensar las modalidades de relacionamiento y coordinación entre actores político-institucionales y colectivos sociales autónomos dentro del campo popular.

Desde este punto de vista, resultaría interesante analizar los logros y las limitaciones de experiencias organizativas novedosas y a veces muy poco conocidas o estudiadas como la que el filósofo y activista marxista venezolano Alfredo Maneiro, fundador de La Causa Radical, había ideado en los años 70 y 80 bajo la forma de una coordinación política relativamente descentralizada (“conjura de iguales”) de cuatros focos de organización autónomos: las luchas barriales y vecinales del gran Caracas,

...resultaría interesante analizar los logros y las limitaciones de experiencias organizativas novedosas y a veces muy poco conocidas o estudiadas como la que el filósofo y activista marxista venezolano Alfredo Maneiro, fundador de La Causa Radical, había ideado en los años 70 y 80

el nuevo sindicalismo democrático y combativo de Guayana, la lucha estudiantil y los núcleos de construcción de debate ideológico y programático en el campo intelectual y cultural. Para citar un ejemplo diferente y más contemporáneo, en Italia, una organización política de izquierda como el PRC (Partido de la Refundación Comunista) decidió hace poco abandonar totalmente los rezagos de estructuración leninista o kominterniano y abrir sus espacios de debate interno y representación institucional a una cuota mínima de colectivos y actores sociales independientes, ellos mismos articulados en redes de alcance y geometría variables. En el Ecuador, recoger y sistematizar estas ideas podría ser parte del trabajo de reflexión y de proposición de lo que se podría llamar una necesaria “constituyente de la izquierda”.

Por supuesto, la innovación organizativa no puede sustituir la reflexión sobre los retos estratégicos del poder, la formulación de políticas públicas transformadoras y la construcción de una hegemonía duradera. Tampoco resuelve las angustiantes interrogantes que suscita la involución bárbara del capitalismo posmoderno y la relativa impotencia y atomización de las fuerzas sociales antagonistas. Pero ofrece la perspectiva de una articulación compleja entre lo político y lo social que supere las dicotomías míticas entre poder y contrapoder, las simplificaciones ideológicas excluyentes y lo sectarismos posicionales⁹. Así mismo, podría fortalecer la receptividad de la inteligencia colectiva a la doble necesidad de trabajar desde ahora dentro de los límites de lo posible –definiendo estos límites sin dejarse intimidar por los prejuicios abstractos del moderantismo friolento o del radicalismo mágico y de mantenerse atentos a los desplazamientos sísmicos más o menos perceptibles de la geología social y al eventual retroceso de las fronteras de lo imposible.

9. Si bien esta autora plantea su perspectiva con un matiz tal vez más radical y desde las mismas entrañas de lo social, me parece que este enfoque confluye con la preocupación de Maristella Svmapa (ver su artículo en este número de Entre Voces) de “tender puentes y articulaciones entre los elementos más positivos y aglutinantes de las diferentes vertientes de la izquierda –la tradición nacional-popular, la tradición clasista y la narrativa autonomista.”

Movimiento indígena: radicales o moderados

Pablo Ospina Peralta*

Las evaluaciones de los resultados de la participación política electoral del movimiento indígena ecuatoriano son muy contrastadas. Una de las versiones críticas más frecuentes insiste en la anulación del potencial contestatario y subversivo que el movimiento tenía antes de aceptar las reglas torcidas del sistema político ecuatoriano. En esta percepción de las cosas, las organizaciones indígenas ecuatorianas desarrollaron una acción contestataria hasta 1994 y luego fueron progresivamente cooptadas y burocratizadas por efectos de sus compromisos electorales. Otra versión, influyente entre los propios dirigentes indígenas, insiste en el debilitamiento organizativo y las divisiones internas que la participación electoral ha supuesto. Ambas lecturas de los resultados de la participación electoral podrían tal vez confluir en la idea de que si el movimiento indígena pretendió democratizar el Estado ecuatoriano, lo que ocurrió fue más bien que terminó “estatizándose” él mismo.

Este problema es perfectamente percibido por los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), tanto en la base como entre los altos responsables políticos. Entre las mujeres, por ejemplo, este problema se identifica con la “politi-quería”:

Para mí el concepto de politiquería (es)...que ya la gente no hace las cosas por bien o provecho

*para la comunidad sino por bien y provecho personal primero, y después por bien o provecho de un grupo pequeño o minúsculo, entonces manipula incluso leyes o fórmulas políticas, las manipula para ellos salir en ventaja y así queda como siempre relegada otra vez la gente (...) Y veo que ha debilitado muchísimo las organizaciones porque han den-
trado muchos politiqueros a ofrecer ...con harina, con arroz, con tantas cosas y hay veces, como decía alguna de las compañeras, hay veces que el hecho de vivir en la pobreza le obliga (a la gente) a coger, no? (Arboleda 2005).*

Mentira, privilegio personal, debilitamiento de organizaciones y relaciones clientelares. Esas son las prácticas que dentro y fuera del movimiento indígena se identifican como los costos de la participación en elecciones e instituciones de un Estado caduco.

En estas interpretaciones pesimistas, la cooptación electoral es decisiva pero no es la única fuerza de moderación de las demandas y las prácticas anti – sistémicas de los indígenas. Un lugar privilegiado en la cooptación y burocratización del movimiento lo cumplen las agencias de desarrollo y el mismo discurso del desarrollo, que, se supone, ahoga las prácticas anti – capitalistas que duermen en el seno de la sociedad indígena. Un ejemplo de esta interpretación lo da María Fernanda Vallejo (2005: 19):

La historia de la UNOCANC, ilustra claramente este patrón: bajo el lema de “Tierra, justicia

y libertad”, esta organización que acompañó las luchas campesinas por el control de los recursos productivos y la construcción de derechos, experimenta una rápida transformación funcional que responde a un proceso de sometimiento al mercado. El acceso a educación como nuevo recurso de acumulación - resistencia, produce al mismo tiempo ejecutores de la modernidad, los cuadros “ilustrados” se convierten en vehículos para la introducción del paquete verde promovido por el capital, el discurso de la producción individual para el mercado y la sustitución de la insurgencia para la obtención de nuevas tierras por la figura mercantil de la compra. El sujeto colectivo es presionado a su formalización/ individualización¹.

No hay ninguna duda de que un sistema social secularmente in-

* Investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y profesor del área de historia de la Universidad Andina Simón Bolívar.

1. En un plano más general, ésta es la línea de argumentación de Víctor Bretón (2001: 235-44, y 254).



justo como el que vivimos dispone de poderosas herramientas de absorción, cooptación y anulación política de los procesos y actores que buscan subvertirlo. Eso ocurre mucho más en una época como la actual en la que el triunfo conservador parece inapelable. Pero hay que examinar más de cerca la transformación de las energías de cambio social que están contenidas en el movimiento indígena y en cualquier movimiento social contestatario.

Un primer defecto de la tesis sobre el debilitamiento del potencial contestatario y anti – capitalista del movimiento indio, es que no hay suficientes evidencias de que haya existido una intención semejante “antes” de haber sido anulada “ahora” por efectos de la participación electoral o el proyectismo. Como dice León Zamosc (2005: 210), aunque el contenido fundamental de las luchas de los años noventa fue de resistencia al neoliberalismo, de énfasis en los contenidos “de clase” de la lucha social, “en el Ecuador el contenido del conflicto de clases dista mucho de ser radical. Las luchas populares no apuntan a cuestionar la estructura agraria o la economía capitalista (...) son luchas puramente defensivas, focalizadas en impedir el empeoramiento de la situación de los sectores más empobrecidos”. Desde un inicio, la CONAIE mostró una estrategia que combinaba la protesta social con la creación de espacios propios dentro del Estado. La actitud de la CONAIE antes de 1990 fue de constantes y “prudentes” negociaciones con el Estado, hasta el punto que firmó en 1989 un acuerdo para hacerse cargo de la

La actitud de la CONAIE antes de 1990 fue de constantes y “prudentes” negociaciones con el Estado, hasta el punto que firmó en 1989 un acuerdo para hacerse cargo de la educación bilingüe.

educación bilingüe: muchos pensaron entonces que la organización había sido “cooptada” (Zamosc 1993: 284-5). El levantamiento de 1994 contra la Ley Agraria terminó en una negociación bastante moderada de una nueva Ley consensuada que no logró modificar su intención general original: clausurar el proceso de reforma agraria abierto en 1964. No se trata de convertir a la CONAIE de inicios de los noventa en un modelo de reformismo negociador, sino de criticar la idea de una organización contestataria que habría existido antes de la participación electoral y el surgimiento súbito de una organización contemporizadora después.

Algo similar ocurre con los efectos políticos del proyectismo. La UNOCANC no se formó “antes” por la acción movilizadora de la lucha por la tierra y “después” se debilitó por el proyectismo modernizador y moderador de las demandas, como parece sugerir María Fernanda Vallejo. La UNOCANC nació desde el principio como resultado de la íntima asociación entre la lucha por la tierra y los proyectos de desarro-

llo liderados por CESA en los años 1970. La entrega de las tierras de la hacienda Cotopilaló por parte de la curia ambateña se hizo en conjunción con proyectos productivos asociativos e individuales e incluso con compras de terrenos individuales a los herederos de varias haciendas locales (Eguiguren 1995; Martínez 1987).

Ocurrió que el liderazgo que la CONAIE logró condensar en las luchas de clase “adquirió un enorme valor instrumental para el movimiento indígena” (Zamosc 2005: 212). Luego de las protestas durante los años 1990, donde las principales reivindicaciones no eran específicamente indígenas, se entablaba la negociación y allí la CONAIE incluía invariablemente las demandas específicamente indígenas:

Así, las movilizaciones nacionales se convirtieron en un canal importante para alcanzar metas puntuales (...). Es muy difícil imaginar que tales conquistas hubieran sido posibles si la CONAIE se hubiera comportado como lo esperaban los teóricos de los nuevos movimientos sociales; es decir, preocupándose principalmente por la identidad cultural de los indígenas, evitando los conflictos de clase y sin meterse demasiado en la política (Zamosc 2005: 213 y 214).

Una vez conquistados los espacios propios y consolidados sus logros económicos y políticos, se creaba un nuevo frente de lucha: la defensa de lo adquirido en luchas pasadas. Es lo que ocurrió con Lucio Gutiérrez entre 2003 y 2005. “En cierto modo, la CONAIE se había convertido en un

rehén de su propio éxito: el temor de perder lo que el movimiento había ganado emergía ahora como un factor que podía inhibir su carácter contestatario” (Zamosc 2005: 218). La CONAIE y sus organizaciones se ven colocadas en una posición “defensiva”, no solo por la potencia de las reformas neoliberales (contra las cuales sus solas fuerzas no han alcanzado a pesar de los esfuerzos), sino por el imperativo de no retroceder en el manejo de los espacios institucionales conquistados: el CODENPE, la Dirección de Educación Bilingüe, la Dirección de Salud Indígena, entre otras. No es tanto la cooptación lo que transforma las condiciones de la acción política del movimiento indígena, sino sus conquistas sociales reales.

Algo similar ocurre con el proyectismo de las OSG. Tenemos ejemplos contrastados en los cuales estas organizaciones no logran convertirse en las mediadoras eficaces de intervenciones externas. Visión Mundial, por ejemplo, es una ONG de inspiración evangélica que en muchos casos ha eludido a organizaciones que considera demasiado vinculadas a la Iglesia Católica. En la parroquia Flores, de Chimborazo, desconoció a la UCIF y ésta tenía a inicios de los noventa, muchas dificultades para lograr el vínculo con sus bases (Carrasco 1993: 57). En Pujilí, su intervención para dividir a la COJACAP y fundar la UOPICJJ fue decisiva y su mismo funcionamiento cotidiano gira alrededor de los programas de esa ONG internacional (Vallejo 2005a: 9-12). En términos generales pare-

En términos generales parece ocurrir que el proyectismo tuvo efectos disgregadores, divisores y de debilitamiento político en regiones como Chimborazo (que estudia Víctor Bretón) y en Pujilí.

ce ocurrir que el proyectismo tuvo efectos disgregadores, divisores y de debilitamiento político en regiones como Chimborazo (que estudia Víctor Bretón) y en Pujilí, mientras que en otros lugares, como Suscal, Cotacachi o Saquisilí, sus resultados son menos claramente una absorción o cooptación.

Organizaciones como la UNOCANC en Toacazo o la UNORCAC en Cotacachi, han logrado eficientemente instalarse como mediadoras casi exclusivas de los fondos y las propuestas productivas, construyendo un papel redistribuidor nodal sin el cual su entramado organizativo, como ha ocurrido en muchos otros lugares, se hubiera debilitado. ¿Ha significado eso el abandono por parte de la UNORCAC y la UNOCANC de las reivindicaciones redistributivas (redistribución de tierras y agua) a favor del proyectismo del desarrollo? ¿Ceden las dirigencias “políticas” el lugar a dirigencias “tecnocráticas”? La UNORCAC cuenta con un conjunto de recursos materia-

les y de capacidades técnicas notables. El local que actualmente ocupa la organización pertenece a una ONG quiteña. Está cerca de la plaza principal, tiene cuatro cuartos amplios, dos baños, y dos áreas una donde trabaja la organización y otra donde está actualmente trabajando la ONG Ayuda en Acción. Hay una oficina de las contadoras y financieras. Cuentan con un área donde trabajan los dirigentes, dos salas de reuniones amplias, y la oficina del presidente. Hay internet y tienen más de doce computadoras. Al salir del local tienen una bodega y el garaje donde se guardan cinco camionetas (dos doble cabina y tres simples). Además tienen cinco motos para los promotores que se desplazan casi a diario a las distintas comunidades (Santillana 2005).

La verdad es que las dirigencias de estas dos organizaciones pueden manejar alternativamente los discursos reivindicativos y los técnicos. En las recientes movilizaciones contra la posible firma del TLC en la semana del 14 al 22 de noviembre de 2005, la UNOCANC (uno de cuyos dirigentes “tecnocráticos” es actualmente presidente del MICC) proporcionó una gran parte de las bases movilizadas en una manifestación que volvió a colocar a la CONAIE en el centro de la movilización nacional. Los dirigentes de la UNORCAC, incluidos sus cuadros técnicos, insisten reiteradamente en reivindicaciones distributivas de tierras, agua y problemas de linderación y legalización de terrenos. Proyectismo y reivindicación no se excluyen necesariamente.

El imperativo político de las dirigencias y de las organizaciones étnicas no era solamente mantener la coherencia ideológica. Había otro igualmente importante: si se mantiene una actitud intransigente de lucha callejera y no se consigue ningún logro material concreto para sus bases sociales empobrecidas, las propias bases se cansan, se alejan de las dirigencias y se debilitan las organizaciones. Para la CONAIE no había opción: tenía que usar su capital movilizador y ético para impulsar conquistas concretas y metas alcanzables. Esas conquistas se tradujeron en programas económicos en las comunidades y en instituciones desde las que se impulsaran sus demandas, además de contribuir al retraso de la aplicación de medidas neoliberales.

Por esto, el proceso político de un movimiento social no puede confundirse con la aplicación directa de principios de parte de una dirigencia más o menos corruptible por un sistema social perverso. El sistema social es perverso y todas las dirigencias políticas y sociales son corruptibles, sin duda ninguna. También es cierto que las más perversas tendencias a acomodarse a “lo posible” son dominantes y que para los “posibilistas” lo “posible” nunca dista mucho del mundo de muerte a manos llenas que ahora existe. Pero formular la crítica de manera tan general como si fuera el resultado inevitable de la participación electoral o del proyectismo, nos deja como único camino político la abstención y la protesta. La gente puede aceptarlas por un tiempo, pero no lo hace eternamente.

La vieja pregunta de una política revolucionaria sigue siendo la misma: ¿cómo hacer que las conquistas concretas y que las reformas parciales contribuyan a un cambio social radical en lugar de sustituirlo? Ambas cosas son posibles: que las reformas apuntalen un cambio profundo o que lo impidan. El problema no es, entonces, el proyectismo del desarrollo o la participación electoral en general, sino el modo de hacerlo y el camino de largo plazo que ayuda a recorrer. ¿En qué casos la participación electo-

ral y los proyectos de desarrollo dividen a las organizaciones, minan las dirigencias, y anulan su potencial transformador? ¿En qué casos y en qué condiciones, al contrario, llegan a favorecer el control social de los territorios, la acumulación de fuerzas y la formación de dirigencias políticas que saben ser radicales en el momento necesario? Radical no es el que proclama más alto y más rápido las metas más imposibles, sino el que hace de cada oportunidad de lo real, un paso al ideal.

Bibliografía

- Arboleda, María 2005. “Los asuntos de etnicidad y género en Cotopaxi”, Informe del grupo focal de dirigentes mujeres del MICC, Latacunga, Septiembre. Documento para el IEE.
- Bretón Solo de Zaldívar, Víctor 2001 Cooperación al Desarrollo y demandas étnicas en los Andes Ecuatorianos. Ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo (Quito: FLACSO-Ecuador / Universitat de Lleida / GIEDEM).
- Carrasco, Hernán 1993 “Democratización de los poderes locales y levantamiento indígena” En J. Almeida, et. al. Sismo Étnico en el Ecuador. Varias perspectivas. Quito: CEDIME / Abya-Yala.
- Eguiguren, Amparo 1995 “La teoría de la práctica aplicada a la interpretación del desarrollo rural: El caso de la UNOCANC”. Quito: Tesis de maestría en antropología de FLACSO. Inédito.
- Martínez, Luciano 1987 [1984]. De campesinos a proletarios. 2a. ed. Quito: El Conejo.
- Santillana Alejandra 2005. “Informe de trabajo de campo etnográfico en las comunidades andinas de Cotacachi afiliadas a la UNORCAC”. Mayo – agosto. Inédito.
- Vallejo, María Fernanda 2005. “Espacio y poder en tres organizaciones de los Andes de Cotopaxi”. Quito: Inédito. Marzo.
- María Fernanda Vallejo 2005a. “Análisis de procesos: UNOCANC, Jatarishun, UOPICJJ, UCOIC”. Quito: Inédito. 15 pp.
- Zamosc, León. 1993. Protesta agraria y movimiento indígena en la sierra ecuatoriana. En J. Almeida, et. al. 1993. Sismo Étnico en el Ecuador. Varias perspectivas. Quito: CEDIME / Abya-Yala.
- Zamosc, León 2005. El movimiento indígena ecuatoriano: de la política de la influencia a la política del poder. En N. Grey Postero y L. Zamosc (eds.). La lucha por los derechos indígenas en América latina. Quito: Abya – Yala.

Algunos aportes desde el movimiento indígena a las concepciones sobre democracia en el Ecuador

Ana María Larrea M.*

El paradigma liberal sobre la democracia ha sido cuestionado desde distintas perspectivas teóricas y políticas. En esta tarea, las contribuciones de los movimientos sociales han permitido no solamente enriquecer la reflexión y el debate, sino contar con un cúmulo de experiencias que demuestran las posibilidades concretas de inventar una nueva democracia más allá del paradigma liberal. En el caso del movimiento indígena ecuatoriano, los cuestionamientos a la democracia liberal se asientan en prácticas ancestrales de profunda base comunitaria, prácticas que han logrado sobrevivir a pesar de los distintos procesos de dominación que los indígenas han sufrido durante siglos y que sin duda, en los momentos actuales, se han convertido en invalorable estrategias de resistencia a la aculturación, a la dominación y al neoliberalismo.

Si bien en las realidades presentes de las comunidades andinas estas prácticas y las concepciones de ellas derivadas han sufrido profundos procesos de cambio que han ido desconfigurando muchos de los planteamientos, nos parece importante recoger lo fundamental de estos aportes con el fin de construir una democracia para todos y todas que dé cuenta de la identidad de nuestros pueblos y de nuestras raíces históricas.

A nuestro juicio los aportes fundamentales del movimiento indígena para concebir un nuevo tipo de democracia descansan en la centralidad de lo comunitario y colectivo en la vida andina, que cuestiona profundamente los planteamientos centrados en la fragmentación y el individualismo, característicos de la sociedad de mercado.

La comunidad como fuente de poder: Autogobiernos y democracia participativa

El paradigma liberal de democracia se sustenta en la separación entre estado y sociedad como esferas diferenciadas. De este modo, surge la tensión entre la necesidad de contar con un Estado que por una parte, establezca límites a los excesos de los ciudadanos (derechos positivos) y por otra, garantice los derechos y las libertades individuales (derechos negativos), evitando a su vez los excesos por parte del Estado. La democracia representativa es el punto de encuentro ante esta tensión, estableciendo una serie de procedimientos y contrapesos que limitan el poder del estado y garantizan las libertades individuales.

Por su parte, la tradición indígena andina de gobierno descansa en la comunidad como fuente de poder. El cabildo es la expresión del autogobierno de la comunidad, al más clásico estilo de la democracia antigua. No existe una separación entre la comuni-

dad y sus niveles de gobierno. La comuna es la comunidad política, que establece mandatos y controla a sus autoridades pudiendo en cualquier momento revocarles el mandato. El principio de “mandar obedeciendo” tan promovido por los zapatistas opera claramente en el mundo andino. No es casual en este sentido que las “directivas” de las organizaciones de segundo, tercer y cuarto grado sean llamadas “Consejos de Gobierno”. El nombre refleja una vocación de autonomía y gobierno propio, que de alguna manera se expresa en el planteamiento sobre nacionalidades y pueblos de la CONAIE.

Como ya lo observaron Andolina y otros (2005: 144) para el caso de Bolivia, se trata de un sistema de democracia directa limitada. Es directa porque la asamblea es la máxima autoridad para la toma de decisiones y es limitada porque generalmente son solo los

* Directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Miembro del Comité Directivo de CLACSO-



jefes de familia (hombres indígenas) quienes forman parte de la asamblea. Se privilegian los procesos deliberativos y la generación de consensos, el voto como mecanismo para la toma de decisiones no existe o es secundario dentro del sistema, por el contrario, priman la deliberación y la necesidad de que las decisiones sean consensuadas. El rol de los amautas (sabios) ancianos es fundamental en los procesos deliberativos, su palabra es buscada y respetada.

Las experiencias locales de gobiernos indígenas, recurren a estos planteamientos y se nutren de otras experiencias como las promovidas por el Partido de los Trabajadores en el Brasil y su propuesta de construcción de un poder dual. Se plantea entonces recoger y potenciar las prácticas andinas de democracia directa en espacios interculturales con el fin de construir un poder dual que pueda poco a poco, desde las organizaciones sociales, disputar los sentidos del accionar público. De este modo nacen las propuestas de Asambleas Cantonales o Parlamentos Indígenas y Populares, como formas de construcción de un contrapoder a partir de la existencia de un poder dual.

¿Ciudadanías comunitarias?

En la democracia liberal son los individuos, los ciudadanos, quienes “representan una esfera autónoma de acción privada, cuyos derechos y libertades deben ser garantizados frente a cualquier forma de ejercicio del poder. Estas bases filosóficas son la garantía del funcionamiento de un régimen de libertad política y de

Frente a los valores de igualdad, libertad y fraternidad, la tradición liberal ha reducido a la democracia a un simple procedimiento para elegir gobernantes y a una “mera ideología legitimadora de la supremacía del capital”

la formación del Estado de derecho” (Villavicencio, 2003: 83).

La democracia liberal “No cree en la existencia de actores sociales definidos a la vez por unos valores y unas relaciones sociales. Cree en los intereses y en las preferencias privadas y procura dejarles el mayor espacio posible, sin atentar contra los intereses y las preferencias de los demás” (Touraine, 2000: 70). Se basa en el principio de dar a cada cual el mayor espacio posible para su realización, siempre y cuando no interfiera en la realización de los otros. Esta concepción excluye la idea misma del poder, pues deja de lado las creencias y los conflictos. La sociedad es vista como un gran mercado, regulado por la ley (Cfr., *Ibid.*: 70 - 71).

A diferencia de la democracia liberal, en la cosmovisión indígena no hay cabida para la concepción de la ciudadanía basada en el individuo. Los pueblos indígenas plantean un ejercicio colectivo de ciudadanía, que a la larga permita transformar el estado y el mercado. Una ciudadanía inspirada en la comunidad andina. El

colectivo es fuente de poder, pero también soporte del individuo, incapaz de ser y de pensarse a sí mismo sin la fuerza y el sustento que le da la comunidad. De ahí que el peor castigo dentro del mundo andino sea la expulsión de la comunidad, que significa el desarraigo, la pérdida del soporte y el sustento que da el colectivo.

Los pueblos indígenas cuestionan la categoría de ciudadanía liberal por homogeneizadora y provocan una profunda reflexión sobre la importancia y la necesidad de pensar los grandes temas de la ciencia política a la luz de la categoría de diversidad.

Por consiguiente, para la construcción de un nuevo tipo de democracia es fundamental trabajar una nueva concepción de ciudadanía que reconozca la diversidad social existente y las múltiples identidades de los sujetos sociales.

Los valores de la democracia

Frente a los valores de igualdad, libertad y fraternidad, la tradición liberal ha reducido a la democracia a un simple procedimiento para elegir gobernantes y a una “mera ideología legitimadora de la supremacía del capital” (Borón, 2003: 92).

La libertad entendida como el medio para garantizar el derecho a la propiedad privada ha pasado a constituirse en el valor fundamental de las democracias liberales, en desmedro de la igualdad y la fraternidad, retomando las ya clásicas concepciones de Locke sobre el Estado y la democracia. Para John Locke “la razón por la que los hombres entran en socie-

dad es la preservación de su propiedad” (1962: 127, citado por Borón, 2003 88). El contenido igualitario que caracterizaba los escritos de Aristóteles y Rousseau es reemplazado por el pensamiento liberal, fiel a Locke para quien la igualdad, la soberanía popular y la democracia directa eran inadmisibles. Se pasa de este modo a privilegiar los procedimientos en desmedro de los atributos sustantivos de la ciudadanía. Con ello, la democracia perdió su médula igualitaria y se convirtió en un mecanismo formal (Cfr., Borón, 2003: 88, 89, 91).

La jerarquización realizada por el liberalismo de la libertad sobre la igualdad trae como consecuencia una diferenciación entre derechos civiles y políticos por una parte y derechos económicos, sociales y culturales, por la otra. De este modo el pensamiento liberal apuntala el sesgo individualista de los derechos, deshaciendo el eje social que los cruza. Esto lleva a que en la práctica los únicos derechos verdaderos sean los civiles y políticos, y los otros sean solo deseos poco realistas (Cfr., Díaz Polanco, 2005: 57). Los pueblos indígenas al plantear el tema de los derechos colectivos no solamente han cuestionado al pensamiento liberal, sino que además están sentando las bases para la construcción de un nuevo tipo de estado.

A más de separar los derechos, el liberalismo los ha jerarquizado. Nuevamente la libertad tiene prioridad sobre la igualdad. Entonces, “existen derechos sustantivos (que son inalienables) y adjetivos (que pueden pasarse

por alto, al menos hasta que se realicen plenamente los primeros)” (Ibíd.: 58). Esta arbitraria jerarquía ha sido un obstáculo para que la mayoría de la humanidad disfrute una vida plena. “Los derechos humanos así jerarquizados no responden a ningún imperativo universal; constituyen el punto de vista particular de una doctrina, asumido por grupos de intereses también muy determinados” (Ibíd.). Esta visión se ha concretado en una defensa de la libertad (léase ciertos derechos civiles entendidos desde los valores dominantes) en detrimento de la justicia entendida como igualdad, que era la médula de los derechos humanos proclamados en 1948.

Los pueblos indígenas incorporan un valor que no había sido tomado en cuenta en la construcción democrática occidental: la

diversidad. Con ello, cuestionan profundamente ya no solamente la concepción liberal de la democracia, sino los andamiajes del pensamiento liberal en su conjunto ya que el enfoque liberal “es la doctrina que ha llevado más lejos la pretensión de convertir todas sus concepciones particulares del bien en normas generales ... Su universalidad, más bien, proviene de la voluntad poderosa de un tipo de sociedad que decide que su visión del mundo debe ser reconocida universalmente como la vida buena: la única forma legítima, democrática, etc., de ordenar la sociedad y sus instituciones” (Díaz Polanco, 2005: 56).

Al introducir la diversidad como un valor y un principio, cualquier pretensión de universalidad es cuestionada.

Bibliografía

- Andolina Robert; Radcliffe, Sara y Laurie, Nina, 2005. “Gobernabilidad e identidad: Indigeneidades transnacionales en Bolivia”, en: Pablo Dávalos (Comp.) Pueblos indígenas, estado y democracia, Buenos Aires, CLACSO.
- Borón, Atilio, 2003. Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Buenos Aires: CLACSO.
- Díaz, Polanco, Héctor, 2005. “Los dilemas del pluralismo”, en: Pablo Dávalos (comp.) Pueblos indígenas, estado y democracia, Buenos Aires, CLACSO.
- Touraine, Alain, 2000. ¿Qué es la democracia?. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Villavicencio, Susana, 2003. “La (im) posible república”. En Borón, Atilio (Comp.), Filosofía Política Contemporánea: Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, Buenos Aires: CLACSO.

Lula y los Movimientos Sociales. Encuentros y desencuentros

*Emir Sader**

En un documental de Joao Salles Jr., Lula aparece diciendo que su candidatura y su gobierno serían muy diferentes de los otros, precisamente por la fuerza que provenía de los movimientos sociales que lo apoyaban. Se refería a la Central Única de los Trabajadores (CUT), al Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) y al conjunto de los movimientos que habían protagonizado, junto con el PT y otras fuerzas, la lucha de resistencia a la dictadura primero y al neoliberalismo, después.

Lula no se equivocaba en esto. La particularidad del PT viene, ante todo, de sus vínculos con los movimientos sociales. ¿Qué representaban estos vínculos? La política tradicional opera una ruptura – típica del liberalismo – entre el plano económico-social y el plano político. Todas las desigualdades, las injusticias, incluidos los mecanismos que las generan, quedan reclusos en la economía y en el plano social. El

liberalismo trata que no “contaminen” la política, que debería aparecer como el cielo impoluto en el que desaparecen todas las desigualdades, para que todos se declaren mágicamente “iguales ante la ley”. Esto es el fundamento de la “democracia liberal”: igualdad entre los desiguales, política separada de los planos social y económico.

El PT como expresión de los movimientos sociales

El PT nació como expresión política de los movimientos sociales. El propio Lula resistió mucho antes de aceptar la necesidad de fundar un partido político. Y cuando este fue fundado, la referencia “de los trabajadores” buscaba inscribir en la propia denominación del partido al sector más importante del movimiento social en aquel momento. Los movimientos sociales, a su vez, se sentían políticamente representados por el PT, diferenciándose en el grado de articulación con el partido. La fuerza del PT venía de esta relación.

El papel central del movimiento obrero del ABC en la quiebra del eje de la política económica de la dictadura –el bloqueo de los salarios– demostraba el potencial que un movimiento social de base poseía para interferir en el plano político. Pero la transición entre la dictadura y la democracia política abría espacios de lucha que el PT resolvió disputar, sin perder su característica de expresión de los movimientos sociales, como

sello de autenticidad de la lucha política, como factor que lo diferenciaba de la política tradicional. En el inicio, para demostrar que su campo de acción no era absorbido por la institucionalidad política, el PT elegía sus dirigentes con sus propios criterios y no con los de los tribunales electorales. Posteriormente, esta diferencia fue eliminada.

El PT y los movimientos sociales en la lucha de resistencia al neoliberalismo

Los movimientos sociales fueron los principales protagonistas en la lucha de resistencia al neoliberalismo. Junto al PT, articularon una fuerza capaz de impedir que, en el Brasil, se produzca una versión del proceso de privatización tan radicalizada como la que sufrió Argentina, donde, por falta de oposición en la izquierda –ya que el peronismo fue el protagonista del neoliberalismo, arrasando consigo al movimiento sindical–, prácticamente todo el patrimonio público fue privatizado, incluso la empresa estatal de petróleo, YPF.

Las movilizaciones de masas, la acción de la bancada del PT, la lucha ideológica desarrollada por los intelectuales y los dirigentes políticos y de los movimientos sociales, generaron un marco de resistencia al neoliberalismo. Las propuestas del gobierno de Fer-



* Director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.

nando Henrique Cardoso eran consideradas como contra-reformas, vinculadas al proyecto del Banco Mundial. Eran condenadas porque afectaban directamente los intereses de los trabajadores, conquistados a través de largas jornadas de lucha.

El gobierno Lula y los movimientos sociales

La relación del gobierno de Lula con los movimientos sociales no está determinada por los ministerios sociales, sino por la política económica. Al optar por la continuidad del modelo económico heredado, el gobierno definió, automáticamente, su relación con las políticas sociales y con los movimientos sociales. Algunos capítulos esenciales de esta relación son la (contra-)reforma del seguro social, la política de medio ambiente, la política indigenista, la política de reforma agraria, las cuales, entre otros aspectos, produjeron un distanciamiento entre los movimientos sociales y el gobierno. Estas políticas son proyecciones de las orientaciones económicas esenciales asumidas por el gobierno. El ajuste fiscal bloquea los recursos necesarios para las políticas sociales, al mismo tiempo que la política de exportación adoptada por el gobierno privilegia la producción agrícola con transgénicos y perjudica la agricultura familiar.

Las alianzas buscan sumar fuerzas. Pero como la realidad es contradictoria -y, en el Brasil, el país más injusto del mundo, es aún más contradictoria-, las alianzas con un sector rompen o impiden alianzas con otros. Optar por un modelo económico que

La relación más clara es la del MST, cuya posición refleja la conciencia de que ha habido cambios significativos entre el gobierno FHC y el gobierno Lula, pero que el eje central de la gestión no ha cambiado, por la preservación de la política económica heredada.

extiende puentes hacia una alianza con el capital financiero, a través del mantenimiento de la política económica anterior, significa bloquear la posibilidad de la prioridad de lo social. En la práctica, eso significó optar por el capital financiero en detrimento de los movimientos sociales.

La relación más clara es la del MST, cuya posición refleja la conciencia de que ha habido cambios significativos entre el gobierno Fernando Henrique Cardosos y el gobierno de Lula, pero que el eje central de la gestión no ha cambiado, por la preservación de la política económica heredada. Revela también la conciencia de que, si la reforma agraria no se realiza bajo este gobierno, tendrá aún menos posibilidades de concretarse bajo otros gobiernos. De ahí la articulación entre las varias movilizaciones por la reforma agraria, contra los transgénicos, por la

soberanía alimentaria, por las expropiaciones de grandes haciendas, por la obtención de recursos para los asentamientos de campesinos sin tierra y por la resolución de sus problemas.

La CUT critica la política económica del gobierno, propone una democratización de la composición del Consejo Monetario Nacional, concentra sus críticas en los elevados niveles de las tasas de interés y en sus efectos en el nivel de desarrollo económico y en el empleo. Representa una oposición más moderada a la política económica del gobierno, pero define sus distancias en relación al gobierno.

Aún con diferencias en el tono de las críticas y en las propuestas, los movimientos sociales brasileños dieron una gran demostración de fuerza y de madurez al formular la Carta al Pueblo Brasileño, publicada el 21 de junio del 2005. En ella, hacen un análisis de la crisis actual, buscan sus raíces en la política económica mantenida por el gobierno, se pronuncian por la investigación radical de todos los casos de corrupción, incluidos los del gobierno anterior, por la depuración de todos los miembros del gobierno implicados, así como de los sectores conservadores que sólo buscan sacar ventajas de la confusión. Llaman a una recomposición de la base social y política de apoyo al gobierno en base a la lucha antineoliberal y a la puesta en práctica una serie de medidas que permitirían recuperar el prestigio y el apoyo popular del gobierno.

Entre estas medidas, proponen prioritariamente cambios en la

política económica, eje del carácter conservador y continuista del gobierno, con una disminución de la tasa de interés y del superávit primario, destinando los recursos públicos para la garantía de los derechos básicos de la masa de los trabajadores, dedicándolos a políticas de empleo, salario mínimo, salud, educación, vivienda, reforma agraria, medio ambiente, y de demarcación de tierras indígenas y *quilombos* (palenques) afrobrasileños.

La Carta plantea la realización de una reforma política democrática que asegure la fidelidad partidaria (fin de los “camisetazos”), el financiamiento público de las campañas, la eliminación de las cláusulas de barrera, la presentación de candidatos en listas cerradas con alternancia de género y de etnia, conforme a criterios de representación pluriétnica y multinacional. Reivindica también la inmediata reglamentación de los procedimientos de realización de plebiscitos y referendums, conforme a la propuesta de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos) y de la OAB (Orden de los Abogados) al Congreso Nacional. Propone enfren- tar el monopolio de los medios privados de comunicación, con el fortalecimiento de las redes públicas y comunitarias, el control social sobre las empresas estatales y de economía mixta, para la socialización de las decisiones de poder. Al mismo tiempo, plantea el fortalecimiento de iniciativas locales a favor de la ciudadanía, de la participación y de la educación popular.

La Carta al Pueblo Brasileño está firmada por decenas de entidades

El triunfo de Lula predicando la prioridad de lo social como su principal objetivo de cambio en el país, generó grandes expectativas y, por primera vez, llevó los movimientos sociales brasileños a un diálogo directo con el gobierno, sobre varios temas de su interés.

de la Coordinación de los Movimientos sociales, entre ellas, la CUT, el MST, la UNE (Unión Nacional de Estudiantes), la ABI (Asociación Brasileña de Empresas), la Coordinación de los Movimientos Populares, la CNBB, la Pastoral Obrera Nacional, el Grito de los Excluidos, la UBES (Unión Brasileña de los Estudiantes de Secundaria), la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Confederación Nacional de los Trabajadores en Establecimientos de Educación, la Comisión Pastoral de la Tierra, el CIMI (Consejo Indigenista Misionero), el EDUCAFRO (Educación y Ciudadanía para Afro descendientes y Necesitados), la Corriente Sindical Clasista, la Federación Nacional de los Economistas y muchas otras más.

La Carta es una demostración de la fuerza y de la capacidad de unificación, aunque sea en un marco democrático de diversidad, de los movimientos sociales, que representan la base de apoyo alternativa a las alianzas elegidas por el gobierno. Los movimientos sociales apuntan a un proyecto alternativo y a un arco de alianzas, el único que puede llevar a la superación del neoliberalismo en el Brasil.

Conclusión: conflicto y diálogo

Los movimientos sociales brasileños viven, en el gobierno de Lula, situaciones muy diferentes a las que conocieron bajo gobiernos anteriores -sea durante la dictadura militar (1965-1985), sea durante los gobiernos que llevaron a cabo el programa neoliberal en el Brasil (Fernando Collor de Mello- 1990/1992; Fernando Henrique Cardoso- 1994/2001). El triunfo de Lula, predicando la prioridad de lo social como su principal objetivo de cambio en el país, generó grandes expectativas y, por primera vez, llevó a los movimientos sociales brasileños a un diálogo directo con el gobierno, sobre varios temas de su interés.

Sin embargo, desde el comienzo del gobierno de Lula, se manifestaron nuevos desencuentros y distancias, especialmente a partir de la propuesta de reforma del Seguro Social, articulada con la política económica neoliberal mantenida por el nuevo gobierno. Esta reforma suscitó ya en el primer año del gobierno una movilización de los trabajadores del

sector público, que se daban cuenta de que esta propuesta hacía parte de la segunda generación de reformas del Banco Mundial. A pesar de las promesas gubernamentales de colocar las políticas sociales en el centro de su acción, los recortes presupuestarios posibilitaron sólo programas de carácter asistencial, entre ellos el programa “hambre cero”, posteriormente substituido por el de “beca familiar”. Lo mismo pasa con la política salarial del gobierno, que promovió aumentos poco significativos en los dos primeros años de gobierno, encontrando la oposición de la Central Única de Trabajadores, a pesar de su orientación moderada.

El Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) es quien protagoniza de forma más sistemática y movilizadora la presión sobre el gobierno, incluso para que este cumpla metas de asentamientos de trabajadores rurales bastante inferiores a las que el mismo movimiento propone. El MST organizó sucesivas campañas nacionales de movilización, con ocupaciones de tierras y de predios administrativos públicos, presionando por el cumplimiento de las promesas y por la liberación de recursos. Periódicamente, el gobierno concede algunos recursos para los campesinos sin tierra, si bien son insuficientes. Sin embargo, se mantienen tanto el diálogo como las movilizaciones.

Si las políticas sociales padecen de los recortes presupuestarios, la reforma agraria y la política ambiental son también víctimas del papel que la agricultura de exportación y los agro negocios

...la relación entre los movimientos sociales y el gobierno Lula es de conflicto y diálogo.

La existencia de ministros comprometidos con las reivindicaciones de estos movimientos en varias áreas, como la de la reforma agraria, educación, salud, del Ministerio de las Ciudades, de la cultura, y del medio ambiente, demuestra la diferencia existente entre los gobiernos anteriores y el actual.

desempeñan en la política económica del gobierno. El dinamismo económico brasileño tiene en la exportación de productos agrícolas -la soya en particular-, su factor más importante. Pero esto choca con la agricultura familiar, con la política de seguridad alimentaria, contando con la oposición del MST y de los ecologistas.

De esta forma, la relación entre los movimientos sociales y el gobierno Lula es de conflicto y diálogo. La existencia de ministros comprometidos con las reivindicaciones de estos movimientos en varias áreas, como la de la reforma agraria, educación, salud, del Ministerio de las Ciudades, de la cultura, y del medio

ambiente, demuestra la diferencia existente entre los gobiernos anteriores y el actual. Los movimientos se suman a la reivindicación de estos ministros por más recursos e inclusive por otra política económica. Sin embargo, mantienen su autonomía, criticando, promoviendo movilizaciones contra varias políticas del gobierno.

Algunos sindicatos se desvincularon de la Central Única de los Trabajadores, siguiendo la lógica de los que rompieron con el Partido de los Trabajadores y buscando la construcción de una fuerza política alternativa al gobierno de Lula y al PT. Son sectores minoritarios, ya que la mayoría del movimiento social continúa expresándose dentro del PT, de la CUT, del MST y de los que desarrollan una política de crítica y diálogo con el gobierno de Lula.

La crisis más reciente del gobierno de Lula y del PT, con las denuncias de corrupción que implicaron a la dirección del PT y ministros del gobierno, plantea nuevos desafíos para los movimientos sociales. Por un lado, la ofensiva de la derecha y de sus partidos tradicionales, así como la de la unanimidad de los grandes medios privados, e incluso de grupos y políticos que se pretenden de izquierda, se sumó en un festival de denuncias – reales en sus fundamentos, pero exacerbadas en la ocupación de todos los espacios mediáticos, haciendo desaparecer todos los otros problemas y buscando destruir al PT y la izquierda, aprovechando sus defectos para acabar también con sus méritos. Esta situación plan-

teó a los movimientos sociales la necesidad de defender el gobierno de Lula, con un tono parecido al de las dramáticas banderolas exhibidas en la última manifestación de apoyo al gobierno de Allende, antes del golpe militar: “Es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”.

Si no se sienten identificados con las políticas centrales del gobierno de Lula, saben que su eventual derrota significaría el retorno de la derecha dura y pura, ya que la izquierda fue incapaz de construir su alternativa propia. Saben que la lentitud de la reforma agraria del gobierno se sustituiría de nuevo por la represión estatal contra el MST. Saben que sería el retorno de la política de privatización desenfrenada en la educación, el retorno de la política externa de sumisión a EE.UU., de una retirada aún mayor del Estado en las políticas culturales. Por eso no pueden darse el lujo que se permiten una parte de los intelectuales y de la propia izquierda, quienes se suman ale-

...los movimientos sociales asumen las duras denuncias contra el gobierno, luchan por la moralidad en la política, pero también por la prioridad de lo social, por los avances en la reforma agraria, contra el favorecimiento de los transgénicos y del agro negocio, por los derechos de los pueblos indígenas.

gremente a las denuncias y críticas al gobierno Lula, siendo utilizados por la derecha para asestar duros golpes a la izquierda.

Pero al mismo tiempo, los movimientos sociales asumen las

duras denuncias contra el gobierno, luchan por la moralidad en la política, pero también por la prioridad de lo social, por los avances en la reforma agraria, contra el favorecimiento de los transgénicos y del agro negocio, por los derechos de los pueblos indígenas. Saben que la raíz de las alianzas espurias del gobierno de Lula está en una concepción mercantilizada de la política, que invadió la dirección del PT y se trasladó hasta el gobierno. Así que sus movilizaciones son por la defensa del gobierno de Lula contra los planos golpistas de la derecha, pero al mismo tiempo por el cambio de la política económica, ofreciendo al gobierno apoyo y alternativas, como la expresada en el documento Manifiesto al Pueblo Brasileño, planteando a Lula propuestas de una vuelta drástica en el gobierno, caso en el que podría contar con el apoyo popular para superar la crisis actual y dar una nueva cara a su gobierno y a su relación con los movimientos sociales.

Brasil: crecimiento social

*Carlito Merss**

Antes que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupe el Palacio del Planalto, la preocupación de muchos analistas políticos y económicos era la posibilidad de un agravamiento de la complicada situación macroeconómica del país. Según ellos, el gobierno de centro-izquierda no tendría condiciones para posicionarse frente a las turbulencias del mercado interno y externo. La apuesta por el caos fracasó. Todos los más recientes indicadores señalan un cuadro de estabilidad con crecimiento sustentable, baja inaudita del índice de inflación y un superávit primario capaz de garantizar consistencia hasta el punto de poder eliminar las deudas con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Club de París.

Ahora nos dicen que el asunto es la política social. Critican al actual gobierno porque no se invierte, según ellos, en esta área fundamental para el desarrollo de los ciudadanos. Sin la justicia social, por supuesto, no habrá una nación sólida y preparada para asumir una postura soberana ante los otros países y bloques económicos. Sin compartir los recelos de una oposición que no está dispuesta a digerir resultados tan positivos en el área económica, me quedo con las palabras del presidente Lula en lo que se refie-

re a lo social: "En mi gobierno, la política social dejó de ser sólo un condimento y pasó a ser el plato principal".

Estoy confiado que, a partir del año que viene (2006), habrá un salto cualitativo que consolidará los programas en ejecución, con inversiones presupuestarias superiores en educación y salud, por ejemplo. El presidente ya anunció también que el Ministerio de Desarrollo Social tendrá 22 mil millones de reales a su disposición en el 2006. El programa Beca Familia ya atiende a 8,5 millones de familias, o sea un total de 40 millones de personas de todos los municipios del Brasil. Es el mayor programa de transferencia de renta/ingreso de la historia de este país. Incluso, sirve de ejemplo para otros.

Las desigualdades sociales en el Brasil están disminuyendo. Lo señala el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) a través de datos conseguidos por la Pnad (Encuesta Nacional por Muestras Domiciliarias). El informe del IBGE comprueba que "Brasil está avanzando en el campo de los derechos sociales, reduciendo la pobreza y combatiendo con eficiencia las desigualdades en todos los niveles". Para tener una idea, la participación en la renta del ingreso del 50% más pobre pasó en el período entre 2002 y 2004 de 14,4% a 15,2%. Los 5% más ricos de la

población conocieron una reducción de 33,8% a 32,5% en el mismo período.

Soy relator general para el presupuesto federal en debate en el Congreso, y afirmo que no se compadece con la verdad pretender que hay disminución de recursos para los programas sociales. Para la salud, por ejemplo, incluyendo los gastos de personal, están presupuestados 41,100 mil millones de reales¹ - un aumento nominal de 4,3 mil millones en relación con 2005. En educación también, el gobierno pretende invertir más. Están previstos para el 2006, 8,01 mil millones de reales, lo que es superior, a los 7,16 mil millones de 2005. En materia de saneamiento público se registra un crecimiento de 27% en relación al 2005 y se invertirán 906 millones de reales de recursos presupuestarios. Con los recursos del FGTS (Fondo de Garantía del Tempo de Servicio) y del FAT (Fondo de Amparo del Trabajador), llegamos a un monto de 6,2 mil millones de reales, 14 veces más que lo que invirtió Fernando Henrique Cardoso en su segundo mandato.

El programa de viviendas de interés social está estimado a un total de 561,3 mil millones, reduciendo el déficit de vivienda de 1,8%. Ya, el Fondo de Garantía dispone para este sector 1,2 mil millones de reales al que hay que sumar varias otras

formas de crédito y subsidio nacional y regional.

Pero sin ninguna duda, una de las metas sociales más importantes alcanzada por el actual gobierno es la generación de empleos. En treinta y seis meses, se crearon 3,7 millones de empleos con contrato fijo. En los cuatro años del segundo mandato del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, surgieron sólo 400 mil nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, el resultado del gobierno Lula es 12 veces mejor que el del gobierno anterior. No sólo hay más empleos, sino que también mejoró el poder de compra de los salarios. Este año el salario mínimo tuvo un reajuste de 15%, contra una inflación de 5%. El aumento de la oferta de empleos es más que un elemento económico que comprueba el acierto del gobierno de Lula, es también un indicador de inclusión y estabilidad social, así como un factor fundamental para garantizar el reparto de la riqueza y el acceso a los bienes de consumo y a derechos sociales inalienables, como la vivienda, la educación, la salud y las actividades recreacionales.

Esta situación de desarrollo económico y social no es sólo el reflejo de un crecimiento permanente y sustentable, sino que expresa la validez de políticas sociales y económicas orientadas hacia la diversificación productiva y el incremen-

to del crédito y de la competitividad.

El gobierno enfrentó con determinación la irresponsabilidad económica heredada del precedente régimen, en particular la avalancha del endeudamiento público. Hubiera podido utilizar el recurso fácil de pasar la factura de la deuda a las generaciones futuras, ampliando el costo social del endeudamiento. Prefirió el camino de la austeridad fiscal, del control riguroso de las cuentas públicas y de una política tributaria selectiva, ofreciendo exoneraciones a los sectores productivos y apretando la tuerca a los evasores. Redujimos la vulnerabilidad externa y controlamos la inflación.

La cuestión de los intereses de la tasa Selic sobre la deuda pública es todavía uno de los problemas agudos que heredamos de la política monetaria desastrosa aplicada por el gobierno anterior. La gestión actual enfrenta este problema con mucha responsabilidad. A pesar de una cautela exagerada, el proceso es conducido sin demagogia, a través de una reducción progresiva y consistente de las tasas de interés. El

cambio es fluctuante y definido por el propio mercado, sin intervenciones que equivaldrían a un subsidio público hacia sectores privados. Pero esta política económica, tan criticada por los que prefieren el derroche y el no cumplimiento de los contratos firmados, demuestra, a través del empleo y del crecimiento sustentable, que el gobierno está en el camino correcto.

Son necesarios algunos ajustes, pero no podemos dejar de reconocer los aciertos que se manifiestan en la reducción de la relación deuda/PIB, en el aumento de las exportaciones (record de superávits comerciales), en las inversiones sociales y en las perspectivas diferenciadas de renta nacional y capacidad productiva. La crisis política, que debe ser enfrentada con rigor y seriedad, no puede ignorar que el país ya es otro gracias a la estabilidad económica y a las transformaciones sociales. Este contexto no puede ser desvalorizado en función de objetivos electorales ocultos, con lo cual se intenta socavar la gobernabilidad y la representatividad popular del gobierno Lula.

*. Carlito Merss es economista, diputado federal del PT por el Estado de Santa Catalina, miembro de la Comisión de Finanzas y Tributación y de la Comisión Mixta del Presupuesto del Congreso. Es relator general del Presupuesto Federal para el 2006.

1. La tasa de cambio es de 2,35 reales por dólar

La Argentina: Movimientos sociales e izquierdas

Maristella Svampa*

Por un lado, la Argentina actual aparece recorrida por una proliferación de conflictos y movimientos sociales, en torno a temas como el reclamo salarial, las demandas de los desocupados y la defensa del habitat, entre otros. Este conjunto de acciones colectivas, en gran parte, presenta un fuerte anclaje territorial, una clara propensión a la organización asamblearia y abarca una multiplicidad de organizaciones. Por otro lado, pese a la tan mentada crisis del sistema institucional y de los partidos, los movimientos sociales presentan una gran dificultad por constituirse en una nueva alternativa político-social, o incluso por conseguir una real vinculación entre los diferentes actores sociales y políticos movilizados. Las elecciones parlamentarias de octubre de 2005 vieron la consolidación “desde arriba” de una suerte de “peronismo infinito”, fortalecido tanto por el debilitamiento de los otros partidos tradicionales como por la pérdida de los pocos escaños que poseía la izquierda parlamentaria. Mientras que “desde abajo” el desarrollo de una fuerte política asistencial y clientelar y la crisis de las organizaciones de desocupados afianzaron la reproducción de la relación del partido justicialista con los sectores populares más vulnerables.

Los actores y las luchas: piqueteros, sindicatos, fábricas recuperadas

Entre los actores sociales organizados que más traspies han sufrido los últimos años están los desocupados. La emergencia de un conjunto de movimientos de desocupados (piqueteros), a partir de 1996/97, ha sido uno de los hechos más significativos y originales de las últimas décadas. Desde sus orígenes, estos movimientos antineoliberales estuvieron atravesados por diferentes corrientes político-ideológicas, que incluyen desde el populismo nacionalista hasta una multiplicidad de organizaciones de corte anticapitalista, ligadas a las diferentes vertientes de la izquierda. Sin embargo, más allá de la heterogeneidad, estos grupos reconocen un espacio común recorrido por determinados repertorios de acción, entre los cuales se encuentra el piquete o corte de ruta, la inscripción territorial (el trabajo comunitario en el barrio), la democracia directa y, por último, la institucionalización de una relación con el Estado, a través del control de planes sociales (subsidios de 50 dólares) y del financiamiento de proyectos productivos (huertas comunitarias, panaderías, emprendimientos textiles, cooperativas de agua y de construcción, entre otros).

Desde el inicio, las relaciones de los sucesivos gobiernos con las organizaciones piqueteras combinaron diferentes estrategias, alternando la negociación con

una política de disciplinamiento y represión, siempre acompañada por la judicialización del conflicto social, traducida en más de 4.000 procesamientos. Ello no impidió ni el crecimiento ni la visibilidad cada vez mayor de los movimientos de desocupados, que alcanzaría su climax entre el 2000 y 2003, años de gran efervescencia social. Sin embargo, luego de la asunción de N. Kirchner, en 2003, la situación cambió ostensiblemente. Los primeros gestos políticos del gobierno actual, así como su retórica “progresista” (que muchos asimilan a posiciones de centro-izquierda) generaron una gran expectativa social, otorgándole un margen de acción más amplio respecto de los gobiernos anteriores.

Luego de la fuerte devaluación de 2002, el crecimiento de la economía argentina ha sido importante (en 2005 fue del 9,3%). Gracias al superávit fiscal, recientemente el gobierno argentino decidió cancelar la deuda que

* Socióloga y activista social argentina



tenía con el FMI, un total de 9500 millones de dólares, que pese a constituir solo un 9% de la deuda externa del país, ha tenido una repercusión muy positiva en la sociedad. Sin embargo, la pobreza y la desocupación continúan afectando a franjas importantes de la sociedad argentina. El gobierno de Kirchner ha venido mostrando escaso interés por llevar a cabo una política redistributiva que beneficie a los trabajadores ocupados, castigados por tres lustros de precariedad y bajos salarios (a lo cual se suma una inflación que alcanzó el 12,3% en 2005), o por desarrollar una verdadera política de inclusión, hacia los desempleados, más allá del renovado clientelismo afectivo peronista o de los pequeños emprendimientos productivos.

El resultado de esta política ha sido tanto la integración de las organizaciones afines a la matriz populista, como el control, división y disciplinamiento de las agrupaciones más movilizadas (izquierda partidaria e independiente). Para ello, el gobierno se apoyó en el estado de la opinión pública, fuertemente apuntalado por los grandes medios de comunicación, que no vacilaron en realizar una cruzada antipiquetera, teñida de un claro maniqueísmo. Dicha situación no puede ser disociada de la demanda de "normalidad" que recorre fuertemente la sociedad argentina. El escenario de esta batalla política entre organizaciones piqueteras y gobierno fue la ciudad de Buenos Aires. Fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, más aún, frente a la propia legislatura porteña, a la hora de discutir el Código

El gobierno de Kirchner ha venido mostrando escaso interés por llevar a cabo una política redistributiva que beneficie a los trabajadores ocupados, castigados por tres lustros de precariedad y bajos salarios...

Contravencional propuesto para la ciudad de Buenos Aires (16 de julio de 2004), que tuvo máxima expresión y corolario esta puja desigual entre aquellos que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido), y los diferentes actores movilizadas (la demanda de los excluidos). El corolario de ello fue el avance de la judicialización y criminalización en el tratamiento de los conflictos sociales y, sobre todo, la instalación de un fuerte consenso antipiquetero en amplias franjas de la opinión pública.

Por otro lado, en los últimos dos años, se multiplicaron las luchas sindicales en demanda de incrementos salarial es (no sólo como consecuencia de la inflación, sino con el objetivo de reducir las disparidades salariales entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los '90), así como los reclamos ligados a la defensa de la educación y la salud públi-

ca. En 2005, los conflictos laborales que terminaron en huelgas o suspensión de servicios se triplicaron con relación al año anterior (819 conflictos sindicales contra sólo 249 en 2004). Éste ha sido el índice más alto desde 1990, año en que se implementaron las primeras reformas neoliberales.

Se trata claramente de un nuevo ciclo de acción sindical, protagonizado por cuerpos de delegados combativos, en algunos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Hasta la propia CTA (Central de Trabajadores Argentinos), reconocida por su carácter antineoliberal y cuyo rol de oposición fuera crucial en los '90, se ha visto desbordada por la radicalidad que adoptaron los nuevos conflictos en varios sectores. Citemos entre otros el de la telefonía (Telefónica Argentina), la salud pública (hospitales), alimentación (carne), docentes (de todos los niveles), transporte (metro de Buenos Aires; pilotos y técnicos de Aerolíneas Argentinas), así como en ciertos sectores más tradicionales, como la metalurgia y las plantas automotrices (Daimler-Chrysler, Ford y Volkswagen).

No son pocas las acciones sindicales que adoptan un formato piquetero (inmediatamente asociado al corte de calles), lo cual conlleva también a una rápida estigmatización. Así, es frecuente que la lectura de los conflictos promovida por el gobierno y los grandes medios de comunicación subraye prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (obstrucción del tránsito, problemas de transporte,

pérdida de días de clase, riesgo de desatención en los hospitales públicos, etc.) o apunten a denunciar su carácter “eminente-político”. En el caso de los reiterados paros realizados por el personal no-médico del Hospital Garrahan (el centro pediátrico más importante del país), el gobierno lanzó una campaña de desacreditación contra uno de sus líderes sindicales (perteneciente a un pequeño partido trotskista) e intentó ilegalizar el conflicto, mientras que el ministro de la salud tildaba a los huelguistas de “terroristas sanitarios”...

Sin embargo, la escalada sindical continúa. Durante 2004 y 2005, pese a las represalias patronales y a la escasa visibilidad mediática que tienen ciertos conflictos -sobre todo los que ocurren en el interior del país-, muchos de ellos han terminado con el triunfo de las demandas de los trabajadores. En su mayoría se trata de acuerdos por empresas, entre los cuales no suele faltar la exigencia de la no divulgación pública del mismo, a fin de no crear un “efecto arrastre” en otros sectores. Salvo excepciones, hay que señalar la escasa vinculación de estas expresiones sindicales con otros actores, en especial con los desocupados, tan estigmatizados hoy en día.

Por último, hay que recordar que en Argentina existe un importante movimiento de fábricas recuperadas, que continúan luchando por la vía judicial y legislativa a fin de obtener la ley de expropiación y el reconocimiento como cooperativa de trabajadores. En la actualidad, existen más de 150 fábricas recuperadas, nucleadas

*Sin embargo,
la escalada sindical
continúa.
Durante 2004 y 2005,
pese a las represalias
patronales y a la escasa
visibilidad mediática
que tienen ciertos
conflictos -sobre todo
los que ocurren en el
interior del país-,
muchos de ellos han
terminado con el triunfo
de las demandas de los
trabajadores.*

en diferentes corrientes, y constituidas en cooperativas. A diferencia de la experiencia piquetera, las fábricas recuperadas han conitado desde el inicio una fuerte simpatía y apoyos sociales, que fueron fundamentales para su expansión y consolidación. Las fábricas recuperadas se consideran a sí mismas como “movimientos”, en tanto la recuperación (el acto de resistir) es equiparada a la protesta social. En realidad, salvo casos excepcionales (entre los cuales se encuentran dos casos emblemáticos, como cerámica Zanón, en el norte de la Patagonia y el Hotel Baúen, en la ciudad de Buenos Aires), las fábricas recuperadas no han encontrado una fuerte resistencia por parte del Estado. Se han registrado varios intentos de desalojos y de entrega a los antiguos propietarios, pero más bien la crisis abrió nuevas oportunida-

des políticas, primero a través de una oficina del estado (el INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social-, que creó una unidad ejecutora para las empresas recuperadas); luego, facilitando la formación de cooperativas y la expropiación en favor de los trabajadores.

No olvidemos que la expropiación solo es temporaria y que no son pocas las empresas recuperadas que se encuentran en una difícil situación económica y sus trabajadores, en condiciones de verdadera autoexplotación. Los obstáculos remiten tanto a la falta de apoyo del Estado en el proceso de comercialización de los productos, como a la fragmentación organizacional que presenta dicho movimiento. Hoy existen 4 corrientes, de las cuales las más importantes son el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), que poseen aceitados vínculos con el gobierno actual.

Las diferentes tradiciones ideológicas en el campo militante

¿Cuáles son los principales obstáculos que presentan los movimientos sociales en su proceso de articulación político-social? Acerca de los factores externos, sólo quisiera hacer mención a la productividad política del peronismo, la cual se nutre menos de una supuesta vocación de poder que estaría ausente en sus opositores, que de un hábil liderazgo presidencial que sintetiza legado decisionista y eficacia populista,

así como de una demanda de normalidad vehiculada por una sociedad golpeada por el desvanecimiento de la ilusión neoliberal (la pertenencia a un supuesto “Primer Mundo”) y la posterior amenaza de disolución social, vivida bajo la gran crisis de 2001-2002. Señalemos además el contexto de fuerte crecimiento económico que atraviesa el país.

Me gustaría, en cambio, delinear con más detalle algunos de los factores propiamente internos que dificultan una verdadera articulación del campo militante. Sin duda, lo más notorio dentro del espacio militante ha sido la creciente fragmentación organizacional ligada a las posiciones y diagnósticos asumidos por las distintas vertientes de la izquierda. Lejos de buscar las convergencias estratégicas, las diferentes tradiciones ideológicas han potenciado el conflicto interno y, con ello, han fomentado la división infinita entre movimientos y organizaciones.

En primer lugar, en todo este proceso cabe una responsabilidad mayor a la izquierda partidaria, sobre todo las diferentes variantes del trotskismo, que presenta el mayor grado de dogmatismo ideológico respecto de sus definiciones del poder, del sujeto político y de la estrategia de construcción. A esto se añaden notorios errores de diagnóstico político: la no percepción del cambio de oportunidades políticas (redefinición del escenario político a partir de 2003) y la subestimación de la productividad política del peronismo han sido fundamentales en el agravamiento de la crisis de ciertos movimientos,

...pese a todas las afinidades –más deseadas que efectivamente existentes–, el modelo kirchnerista poco tiene que ver con el proyecto propugnado por Chávez en Venezuela, cuyo carácter controvertido y ambivalente nos advierte ya acerca del carácter multidimensional de esa experiencia.

tanto de las asambleas barriales (durante 2002) como principalmente en el proceso de deslegitimación y aislamiento social de las organizaciones de desocupados (2003-2005). Por otro lado, las inveteradas tentativas de la izquierda partidaria por forzar una suerte de hegemonía dentro del campo militante suelen terminar, más temprano que tarde, en fuertes implosiones organizacionales e ideológicas, traduciéndose en un vaciamiento del capital político y simbólico de los nuevos movimientos. Por último, en tiempos electorales los partidos de izquierda suelen acentuar el énfasis instrumental respecto de las organizaciones sociales, en detrimento de su autonomía decisional y del desarrollo de una lógica de construcción más territorial (ligada al trabajo comunitario y los emprendimientos productivos).

En segundo lugar, podemos señalar el rol más reciente que puede adjudicarse a la izquierda populista, que ha terminado por reactivar los elementos más negativos de la tradición nacional-popular, a partir de su alianza con N. Kirchner. La tradición populista argentina retoma elementos diferentes de aquellas otras experiencias que recorren el continente, como es el caso de Bolivia, donde la tradición nacional-popular reaparece ligada a las demandas de nacionalización de los hidrocarburos, que proclaman el conjunto de los actores movilizados. Asimismo, pese a todas las afinidades –más deseadas que efectivamente existentes–, el modelo kirchnerista poco tiene que ver con el proyecto propugnado por Chávez en Venezuela, cuyo carácter controvertido y ambivalente nos advierte ya acerca del carácter multidimensional de esa experiencia. En Argentina, la tradición populista tiende a desembocar en el reconocimiento de la primacía del sistema institucional, a través del protagonismo del Partido Peronista, por sobre los movimientos sociales.

Esta inflexión responde a una cierta concepción del cambio social: aquella que deposita la perspectiva de una transformación en el cambio en la orientación política del gobierno, antes que en la posibilidad de un reequilibrio de fuerzas a través de las luchas sociales. La primacía del sistema político-partidario tiende a expresarse en una fuerte voluntad de subordinación de las masas organizadas a la autoridad del líder y una notable desconfianza hacia las nuevas formas de

autoorganización de lo social y sus demandas de empoderamiento y autonomía. Como para la izquierda partidaria, para la tradición populista argentina y sus herederos actuales, la cuestión de la autonomía de los actores constituye un punto ciego, impensado, cuando no se percibe incluso como “artificial” en función de nuestra geografía de la pobreza. Esta no-tematización denota que el populismo argentino, en todas sus facetas, tiene un gran desconocimiento de las nuevas tendencias organizativas globales. No valora las nuevas prácticas políticas ni el impacto positivo que éstas podrían ejercer en un proceso de reformulación del contrato social, en un sentido incluyente.

En tercer lugar, subrayemos el rol que han tenido aquellos grupos que componen el heteróclito espacio de las organizaciones independientes y autónomas. Estas nuevas experiencias militantes –sobre todos en los jóvenes- se nutren de un ethos común cimentado en el imperativo de la desburocratización y democratización de las organizaciones y en una gran desconfianza respecto de las estructuras partidarias y sindicales. No es casual la fuerte resonancia que en Argentina ha tenido lo que genéricamente se ha venido denominando “autonomismo”. Esta nueva narrativa política, que atraviesa un conjunto de colectivos y movimientos contra la globalización neoliberal, se nutre también del pensamiento de un sector de la filosofía política italiana, especialmente en la obra de Toni Negri y Paolo Virno y, a nivel continental, reconoce su modelo de referencia en la experiencia y el dis-

curso zapatista¹. Pese a que el campo de la autonomía es mucho más amplio y variopinto que lo que las referencias anteriores indican, lo cierto es que en Argentina éste tuvo su inflexión hiperbólica, especialmente entre los movilizadados años 2002 y 2003.

Si la izquierda partidaria y populista tienen dificultades para entender las nuevas formas de auto-organización de lo social, por su lado, el autonomismo se caracteriza no sólo por su visión demasiado unidimensional del poder y de la relación con el Estado, sino por la negación de la posibilidad de pensar la instancia de la articulación política como algo más que una coordinación horizontal de movimientos. Inclusive, para muchos militantes autonomistas, la noción misma de “hegemonía” -cuyo sello gramsciano tanto marcó el pensamiento de la izquierda argentina hace unas pocas décadas- se ha convertido en una suerte de cristalización de todos los males...

Lo cierto es que la tentación hegemónica de los partidos de izquierda no hizo más que potenciar los elementos extremos del campo autonomista, que en muchos casos confundió la defensa de la diferencia con el llamado a la pura fragmentación y tendió a disolver la lógica política en la pura acción contracultural, o en una suerte de ontologización de lo social carente de mediaciones. Finalmente, dicho exceso generó también una reacción inversa, sobre todo dentro del campo piquetero y las organizaciones contraculturales, donde se registra una suerte de involu-

ción por parte de ciertos grupos y colectivos militantes decepcionados de la poca repercusión política que han tenido las promesas de democratización y horizontalidad del autonomismo (pues la política de Kirchner ha traído consigo una profundización del clientelismo en el mundo de los sectores populares). Frente a este nuevo cierre de las oportunidades políticas, algunos tienden a hundirse en una defensa por demás ortodoxa y dogmática de los principios revolucionarios clásicos, en su modalidad leninista y guevarista.

La posibilidad del surgimiento de un nuevo sujeto político que pudiera encarnar la fuerte expectativa de cambio que recorría la sociedad argentina de principios del nuevo milenio se desvaneció, tanto por la vuelta a la normalidad institucional encarnada por el “peronismo infinito”, como por la divergencia entre las diferentes tradiciones ideológicas presentes entre las organizaciones sociales. El proceso de estigmatización de las luchas sociales entre 2003 y 2005 plantea la importancia de la disputa cultural y simbólica, así como la necesidad de tender puentes y articulaciones entre los elementos más positivos y aglutinantes de las diferentes vertientes de la izquierda -la tradición nacional-popular, la tradición clasista y la narrativa autonomista.

1. Ha sido muy influyente también la versión más simplificada que presenta el libro de John Holloway, *Cambiar el mundo sin tomar el poder*, Buenos Aires, Herramienta, 2001.

“Chávez deberá escoger entre el MVR y las bases”

Entrevista a Roland Denis*

Roland Denis Boulton, licenciado en filosofía de la Universidad Central de Venezuela, es miembro fundador del Movimiento 13 de Abril (en referencia al 13 de abril del 2002, cuando el pueblo venezolano salió a la calle para reclamar el regreso del presidente Hugo Chávez derrocado el 11 de abril y derrotó a los golpistas), que se propone reagrupar sectores radicales del movimiento social bolivariano en base a la democracia directa, la autonomía organizativa y la lucha contra la burocracia y el electorerismo. Fue viceministro de Planificación regional del gobierno bolivariano entre septiembre 2002 y febrero 2003. Es autor de dos libros: Los fabricantes de la rebelión. Movimiento popular, chavismo y sociedad en los años 90, Caracas, Editorial conjunta Primera Línea y Nuevo Sur, 2001, y Rebelión en Proceso. Dilemas del movimiento popular luego de la rebelión del 13 de abril, Caracas, Ediciones Nuestra América Rebelde, 2005. Siendo Ro-

land Denis un luchador social intachable y uno de los más lúcidos y respetados analistas de la relación entre el proceso “constituyente” de la auto-organización social y el poder bolivariano constituido, nos pareció interesante reproducir esta entrevista. Ofrece una visión por cierta polémica y debatible, pero que cristaliza el malestar que se está difundiendo cada vez más en varios sectores de la base chavista y se reflejó en la enorme abstención que marcó el proceso electoral legislativo del 4 de diciembre 2005, al punto de llevar Hugo Chávez a llamar sus tropas a hacer una autocrítica.

P. ¿Cómo juzga el reiterado discurso del presidente Chávez sobre el socialismo del siglo veintiuno?

R. Que Chávez haya abierto el debate sobre el socialismo, a nivel nacional, me parece que es muy importante y positivo de su parte; algo que nadie le estaba pidiendo, él lo activó por propia iniciativa. Y es positivo, más que por razones personales del Presidente, porque nos da los signos de estos tiempos; es decir, hay una radicalización evidente dentro del proceso social venezolano y la conciencia política que vienen tomando muchas comunidades, y que obligan a radicalizar también el lenguaje del mandatario quien, desde los años noventa ha querido ser el vocero de los oprimidos. De allí la relación muy directa que ha existido siempre entre

el discurso político de Hugo Chávez y el proceso de radicalización que se está dando en las organizaciones populares. Pero, eso no comienza con él, se inicia con la subversión social que tiene su primer estallido en febrero de 1989. Cuando Chávez abre el debate sobre el socialismo del siglo veintiuno, el socialismo formal, como modelo de sociedad y como tesis está en decadencia, muere con la caída del Muro de Berlín. No está planteada en el mundo una pelea de ideologías sino que estamos luchando por la salvación de la vida; y eso quiere decir, que existe la necesidad por parte de los pueblos de reapropiarse de las riquezas que le han sido arrebatadas por los grandes monstruos del capitalismo.

P. ¿Cómo se puede entender ese socialismo?

R. Ya te dije, como un proceso radical de socialización, de riqueza, de conocimientos, de tecnologías; muchas veces nos confundimos y creemos que vamos a concluir una obra revolucionaria dentro de nuestro país, no, esa es una tarea de todos los no capitalistas a nivel mundial.



* Entrevista realizada por Fernando Olivares Méndez y publicada en el semanario La Razón (Caracas), 25 de septiembre 2005.

En estos momentos no hay revolución

P. Ahora, ¿estamos en vías de una revolución en Venezuela?

R. No, en estos momentos no; lo que existe es un movimiento popular que acrecienta su fuerza y su potencia. Chávez ha contribuido a potenciar ese movimiento; y hay una maquinaria de Estado que sabotea y trata de frenar el ímpetu transformador que existe en las bases.

P. ¿Es coherente ese discurso cuando petróleo, gas y carbón son explotados por transnacionales?

R. Políticamente, el gobierno es antiimperialista, pero económicamente es complaciente; por otra parte, hay una gran confusión en los sectores populares: entre finales del 2001 y el 2004 (golpe de Estado, paro petrolero, plaza Altamira, referendo) vivimos una situación donde las bases tenían muy claro quién era el enemigo, dónde estaba ubicado y los sitios de divulgación (medios de comunicación privados) en que ese enemigo se expresaba y se sigue expresando. Luego del referendo las contradicciones comienzan a ser mucho más intensas; desgraciadamente, en el discurso del Presidente se hacen cada día más abismales las relaciones entre discurso y práctica de gobierno. Es verdad, el discurso de Chávez es referencial, inspirador y amplía horizontes de conciencia, más no es útil para transformar reali-

Luego del referendo las contradicciones comienzan a ser mucho más intensas; desgraciadamente, en el discurso del Presidente se hacen cada día más abismales las relaciones entre discurso y práctica de gobierno.

dades concretas. El es el Presidente y dirige un Estado, unas instituciones que en estos momentos sufren una regresión desde el punto de vista de las leyes, frente a lo que es la Constitución. Todas las leyes, la de tierras, de cultura, de aguas, la de fronteras, regresan al marco privatizador y neoliberal.

P. Alianzas estratégicas como en la Sierra de Perijá donde las transnacionales del carbón están arrasando con el hábitat...

R. Exacto; las comunidades indígenas decidieron defender hasta con la vida su derecho a la vida, a la tierra, el ambiente, a la cultura, a un territorio que les pertenece ancestralmente, frente a las transnacionales estadounidenses, canadienses y brasileras que quieren apropiarse de ese terreno para explotar el carbón; y ser parte de un juego geopolítico-energético

que no solamente tiene que ver con el carbón, también con las aguas, el gas y el petróleo, en función de las necesidades energéticas de Estados Unidos. El gobierno se comprometió, a través de una comisión, a realizar un estudio en la región de Perijá, los resultados fueron clarísimos: que ambiental, cultural y socialmente hay un impacto enorme, un gran deterioro, por la explotación del carbón. No obstante, la explotación sigue, la Guardia Nacional entra nuevamente a los territorios y se comporta igual que la vieja máquina represiva que siempre ha sido, nunca ha cambiado. Mira, tenemos un Estado aliado a las grandes cúpulas económicas que tratan de salvar su propia condición y sobrevivencia utilizando el discurso de una revolución popular que no le pertenece a ningún hombre en particular, nos pertenece a todos.

Las contradicciones se están intensificando

P. ¿Acaso las contradicciones no se están intensificando cuando las bases critican al propio partido de gobierno, al MVR?

R. Es que la carencia de representatividad del MVR es gigantesca; este partido es un monstruo insoportable dentro de las dinámicas de organización y construcción social. Es un partido clientelar; independientemente que allí hay muchas personas que actúan de buena voluntad y que no atacan a las

bases, su dirigencia se comporta como la típica organización de control, captación y corrupción generalizada.

P. La decisión unilateral de las cúpulas al margen de la participación popular es un elemento del pasado que permanece igual...

R. Voy a poner un ejemplo con nombre y apellido, Diosdado Cabello: el gobernador del estado Miranda fue quien prácticamente manejó todo el listado de diputados que aspiran a una curul en la Asamblea Nacional. No quiero generalizar pero él, entre muchos otros, con ése inmenso poder en la toma de decisiones, se ha convertido en uno de los grandes capitalistas que gira alrededor del gobierno. En el Movimiento Quinta República hay sectores progresistas y transparentes, pero el partido, con William Lara y Diosdado Cabello a la cabeza, están manejando esa maquinaria de una manera claramente contrarrevolucionaria.

¿Hacia un choque de trenes violento?

P. ¿Qué presagia todo aquello que usted plantea?

R. Un choque de trenes, inevitable; allí es donde Hugo Chávez deberá decidir cuál es su posición ante una realidad que es imposible negar. Si él sigue aceptando que alrededor de él, gobernadores, alcaldes, ministros y militares se conviertan en multimillonarios a través del trabajo militante de cente-

Nosotros estamos con el proceso bolivariano y lo defendemos, apoyamos la posición de Chávez como Presidente; pero no aceptaremos que detrás de nuestro esfuerzo y luchas, algunos pocos que giran alrededor de las designaciones presidenciales, continúen convirtiéndose en monstruos capitalistas.

nares de personas, se verá en una situación sumamente delicada. Nosotros estamos con el proceso bolivariano y lo defendemos, apoyamos la posición de Chávez como Presidente; pero no aceptaremos que detrás de nuestro esfuerzo y luchas, algunos pocos que giran alrededor de las designaciones presidenciales, continúen convirtiéndose en monstruos capitalistas. Aspiro a que el choque de trenes sea lo menos violento o sangriento; Chávez tiene la inmensa responsabilidad que esa violencia no llegue y que la situación se dilucide mediante un proceso rápido de depuración y de definición de políticas. Por ejemplo, en Perijá tendrá que decidir entre los indígenas a quienes le destruyen su hábitat y las transnacionales del carbón,

detrás de las cuales están vendidos Corpozulia Carbozulia.

P. ¿Acaso el líder de este proceso político no capta eso que usted ha expuesto?

R. Lo capta pero él vive una tragedia; esta medido en el proceso y aquí nadie es inocente. Quien te habla también es absolutamente responsable de lo bien o mal que nos llegue a futuro. A Chávez le está sucediendo lo que a otros líderes que condujeron procesos de transformación en el mundo como Lenin, o Mao; el proceso social comienza a desbordarlo, y no solamente a él, a todos quienes hemos sido dirigentes, bajos, medios, altos. Se debe entender que los movimientos populares pulsán porque las transformaciones y cambios no se queden simplemente en la planificación de una cúpula. El presidente tiene una inmensa responsabilidad en toda esta situación.

Experiencias truncadas

P. ¿Qué objetivo se plantea el movimiento al que usted pertenece?

R. Somos una corriente revolucionaria que en estos momentos tiene la oportunidad de convertirse en un movimiento organizado en lo que ya hemos denominado ejército de multitudes; y no es que aspiramos a ser gobierno, queremos gobernar, las bases quieren gobernar.

P. Usted fue viceministro de Planificación (2202-2003)

durante la gestión de Felipe Pérez. ¿Por qué salió de ahí?

R. Eso habría que preguntárselo al presidente Chávez. Lo que si puedo decir es que, siendo viceministro, viví experiencias bellísimas; durante el paro petrolero del 2002, estuve presente en la reactivación de la planta de Azuay con la participación de ingenieros, técnicos, obreros, pescadores, mujeres. Azuay es un gigante tecnológico que a partir de manuales perdidos e informaciones sueltas, comenzó a reactivarse; el genio colectivo, cuando actúa, se convierte en una inteligencia fabulosa que supera cualquier tecnocracia o meritocracia.

La izquierda derrotada de Pdvsa

P. Alí Rodríguez (ex presidente de PDVSA, hoy canciller de la República Bolivariana) ha dicho que la directiva de Pdvsa, junto a las acciones emprendidas por el gobierno durante y después del paro, recuperó la industria...

R. Rodríguez, de alguna manera Rafael Ramírez (actual presidente de Pdvsa), Vierma, Bernard Mommer y todos aquellos que han tenido algún cargo de dirección en la industria petrolera, se mueven sobre los viejos códigos de una izquierda frustrada, abatida y derrotada. Uno puede reconocer en ellos algunos valores de izquierda, al menos en el lenguaje de soberanía y justicia social; pero, sencillamente, están afianzados en el espacio capitalista para luego pasar a

El presidente Chávez, es triste decirlo, ha reactivado eso e intentado darle vida a algo que ya no lo tiene, a algo que fue desaparecido por la historia y los movimientos populares.

Nos están conduciendo al desastre.

Esas viejas izquierdas ya no tienen ninguna ética en su comportamiento.

una etapa hipotética y completamente utópica de socialización de la riqueza. Es una izquierda que trabaja en base a la desaparecida ortodoxia soviética. El presidente Chávez, es triste decirlo, ha reactivado eso e intentado darle vida a algo que ya no lo tiene, a algo que fue desaparecido por la historia y los movimientos populares. Nos están conduciendo al desastre. Esas viejas izquierdas ya no tienen ninguna ética en su comportamiento. Siguen cobrando treinta y cuarenta millones de bolívares, no les da ninguna pena que ellos, revolucionarios, ganen cantidades millonarias y un pobre diablo que es tan o más revolucionario que ellos gane un millón¹, lo mínimo para lle-

var a su casa, en el caso que tenga trabajo. Se comportan como una tecnocracia más, como una cúpula que se enriquece con privilegios y lucros; es decir, reproducen un pasado que tanto criticaron. En Pdvsa, estas personas han sido seducidas por el poder; se reactivaron allí todos los privilegios de la élite, los viajes “shopping” internacionales de sus familiares que viajan a Moscú, a Pekín, a Europa.

P. ¿Están funcionando las misiones sociales?

R. La misión clave, la Vuelvan Caras (formación de núcleos de desarrollo endógenos y economía social), que se dirige hacia la transformación estructural de las relaciones de producción o de propiedad, está fracasando. Aplican, en esa misión, un esquema autoritario, verticalista, ajeno a lo que son las dinámicas comunitarias de formación de cooperativas; estas, muchas veces, no son tal sino instrumentos de reciclaje de riquezas por parte de quien la da y quien la recibe. Durante nuestra estadía en el gobierno, propusimos la formación de comunidades autogestionarias en áreas como la vivienda, a nivel de control obrero, entre otros; aunque son procesos largos y difíciles, si en aquél momento se hubiese comenzado, hoy tendríamos un cuarenta por ciento de la población organizada en comunidades autogestionarias.

1. Tasa de cambio: 2150 Bolívares cada dólar.

“Los sectores populares que no tenían voz ahora forman parte de la vida política venezolana”

Entrevista a
Edgardo Lander*

El sociólogo venezolano Edgardo Lander, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), es uno de los más importantes intelectuales latinoamericanos de la actualidad y uno de los principales organizadores del VI Foro Social Mundial Policéntrico de Caracas 2006. Nos da su visión de las principales conquistas del proceso de cambio que está viviendo Venezuela y de las dificultades que enfrenta.

P. ¿En qué fase se encuentra el proceso venezolano? ¿Se ha consolidado?

R. Hay tres momentos de confrontación con la oposición, que significaron una consolidación y el avance del proceso en Venezuela. El primero fue el fracaso del Golpe de Estado militar del 11 de abril de 2002 por la reacción multitudinaria de los venezolanos que restituyen a Chávez, esto constituye

la derrota de la totalidad de sectores de oposición: la iglesia, los partidos políticos de la oposición, los medios privados de comunicación, sectores de las fuerzas armadas, el sector empresarial y el sindicalismo corrupto, que apostaron por la ruptura del régimen constitucional y la salida del presidente Chávez. Un segundo momento se produce el 2 de diciembre del 2002 cuando los mismos sectores apuestan otra vez por la ruptura con el paro petrolero y empresarial con el objetivo de paralizar el país, detener la producción y distribución de petróleo, y forzar la dimisión del presidente Chávez. Nuevamente la capacidad organizativa y la disposición de lucha hizo que fuera derrotado el paro patronal y que el país no se detuviera, y logro que se recuperara la industria petrolera, saliendo el gobierno y el proceso fortalecidos mientras que la oposición sufrió una segunda derrota. El tercer momento, fundamental para la consolidación del proceso, fue el referendo del 15 de agosto del 2004; los dirigentes de la oposición habían convencido a su militancia de que el gobierno del presidente Chávez estaba aislado y no tenía apoyo popular porque la mayoría de la población lo rechazaba, cuando vieron que no era así y que el 60% de la población apoyaba a Chávez, se elevó el nivel de desmoralización de la

oposición y el fraccionamiento de la misma, la pérdida de legitimidad de esta dirigencia que había engañado a sus seguidores llevo a una situación de crisis profunda a la oposición de la que no se ha recuperado.

P. ¿Qué es lo que quiere la oposición?

R. Querían básicamente una aproximación mayor con Estados Unidos, un distanciamiento de Cuba y genéricamente un proyecto de cuño neoliberal. No iban más allá de eso, ya que estos sectores no tienen un proyecto político común. Ellos quieren derrotar el gobierno, derrotar el proyecto, derrotar las transformaciones económicas y sociales que están ocurriendo en el país, y derrotar el proceso de concienciación y organización popular. Quieren una capitulación total que les permita cambiar el régimen constitucional actual, los objetivos reales no son el cambio de gobierno y la sustitución del presidente Chávez, la oposición venezolana no quiere sólo la salida de Chávez, su objetivo es derrotar la organización popular y el cambio de régimen hacia el neoliberalismo.



* Profesor de la Universidad Central de Venezuela y Coordinador del Foro Social Mundial Policéntrico de Caracas

Tomado de: www.voltairenet.org

P. *¿Cuáles son los principales elementos positivos del proceso de cambio que está viviendo Venezuela?*

R. Primero, los procesos de organización social de base y la transformación de la cultura política, estas son las cosas más importantes que han ocurrido en estos años. El proceso de construcción de ciudadanía, en un sentido de creciente presencia y sentido de “ser parte de”, de incorporación de sectores amplios de la población que habían estado muy excluidos del sistema político. Los sectores populares que no tenían voz ahora forman parte de la vida política venezolana. Hubo una valorización de la autoestima de estos sectores, este es el cambio más importante que el gobierno Chávez promovió. Después, el impacto tan importante que han tenido las políticas públicas, las políticas sociales en el ámbito de la salud, de la educación, de las redes de alimentación, que han supuesto enormes cambios en las condiciones de vida de los sectores populares, en los elementos centrales de la vida social, de una forma significativa. Los programas de educación han conseguido, entre otros éxitos, eliminar el analfabetismo de Venezuela; los programas de salud, sobre todo lo que representa la misión Barrio Adentro, con la presencia masiva de médicos cubanos en módulos de salud en todas las zonas populares urbanas y rurales de todo el país, significan un cambio importante para la gente en relación al tema del derecho y acceso a la salud; las redes de

comercialización de alimentos se han extendido y proporcionan fácil acceso a una amplia gama de alimentos a precios muy inferiores a las cadenas de comercialización privadas; etc. Todo esto hace que la gente se identifique, y este sea su gobierno, su proyecto, una opción donde la gente es importante mientras antes no lo era. Hay otras áreas donde los avances son muchos más lentos y complicados, sobre todo en las transformaciones en la estructura productiva, hay inversiones importantes en la producción agrícola y un proceso de reforma agraria en marcha, pero la dependencia de importaciones todavía es muy elevada, aún no se ha logrado la soberanía alimentaria a la que aspiramos. Hay áreas productivas que tienen que ver con el impulso de pequeñas empresas y cooperativas, todo el sector de la economía social, que se espera que sea capaz de generar bienes para el mercado interno y mayores capacidades de empleo.

P. *¿Qué dificultades enfrenta el proceso y cuales son las perspectivas de cara al futuro?*

R. En el plano económico, la principal dificultad es: ¿cómo se construye un proyecto económico alternativo? En las grandes empresas e industrias públicas del país se va avanzando lentamente, en el sector de la mediana empresa y la economía social todavía no se sabe si se obtendrán los resultados previstos y si el proyecto es viable, y sobre el amplio sector de mediana y gran empresa e industria privada eso es

un asunto que no esta claro en el proyecto del proceso político venezolano. La constitución recoge un modelo mixto, con tres sectores productivos: publico, social y privado; pero en las nuevas discusiones sobre el Socialismo del siglo XXI aun no está claro si hay una intención de cambio de rumbo en relación a esto, por lo que el modelo tendrá que definirse en el futuro. En el plano político, la carencia más importante es la ausencia de estructuras políticas de intermediación entre el estado y la amplísima organización popular que existe. Yo reivindico el hecho de que el estado tenga una precariedad organizativa por un lado, y que en los partidos políticos del proceso no existan estructuras verticales eficientes, porque eso hace que las organizaciones sociales de base tengan elevados niveles de experimentación, diversidad y autonomía que son muy positivos por la extraordinaria riqueza, pluralidad que aportan al proceso venezolano, pero también se puede ver como una dificultad por la falta de capacidad del estado para controlar la organización social, y también al contrario.

P. *¿Qué papel tienen los partidos políticos en el proceso venezolano?*

R. Cuando se hace la [Asamblea] Constituyente se elimina el financiamiento público de los partidos, esto forma parte del imaginario antipartido por la crisis de los partidos tradicionales, pero significa también que se asume desde posiciones de izquierda lo que en realidad

es producto de una política ideológica neoliberal muy fuerte contra los partidos políticos. Entonces ¿cómo se construye democracia cuando el financiamiento de los partidos no es público y son los partidos que tienen mayores recursos privados los que pueden hacer campañas y propaganda? obviamente los partidos que están con el proceso de cambio si no es por el apoyo que reciben del gobierno estarían en desventaja. Los partidos anteriormente hegemónicos, Acción Democrática (AD) y COPEI, han perdido apoyo, son parlamentarios y no se basan en la movilización. En el caso de los partidos del proceso con mayor apoyo electoral, el Movimiento V República (MVR) no es propiamente un partido y tiene una estructura muy vertical, el peso de las decisiones del presidente Chávez es sobredeterminante y no existe “vida de partido”; y el partido más organizado, más grupal, más “leninista”, que es el partido Patria Para Todos (PPT), también ha abandonado la estructura de la organización porque sus principales cuadros dirigentes están en el gobierno. No existen grandes estructuras partidarias, existen pequeños partidos bien organizados como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), pero en el conjunto no significan mucho, no tienen mucho peso. Esto supone unos límites, porque esto se produce con un liderazgo político de las masas muy fuerte por parte del presidente Chávez que tiene aún dimensiones no democráticas, la toma de decisio-

*...hay mucha
organización social,
diversa y múltiple,
pero las formas de
articulación política de
esas organizaciones
sociales autónomas con
respecto al estado son
muy precarias.*

nes es tremendamente vertical, y eso no genera experiencia de democracia, no se aprende democracia. Esto plantea retos para el futuro porque en Venezuela hay mucha organización social, diversa y múltiple, pero las formas de articulación política de esas organizaciones sociales autónomas con respecto al estado son muy precarias.

P. ¿Cuál es el carácter político de la revolución bolivariana? ¿Cuál es su ideología?

R. Hasta la caída del Muro de Berlín los perfiles de la política eran o parecían muy nítidos; que era socialismo, que era socialdemocracia; que era liberalismo, y si alguien se planteaba un proceso de transformación socialista tenía que utilizar necesariamente una serie de instrumentos de esa caja de herramientas. Tras la crisis del socialismo real y el desconcierto que significó esto para las organizaciones de izquierda, se planteó cuáles eran las alternativas a la hegemonía del orden neoliberal imperante, si era posible un capitalismo más humano y menos salvaje, o la alternativa es una so-

iedad no capitalista. En la izquierda transformadora hay acuerdo en que la alternativa es una sociedad no capitalista, pero ¿en qué consiste hablar de una sociedad no capitalista? antes era automáticamente el socialismo que se estaba practicando en ese momento, este estaba ya escrito en la historia, y eso no es así. Ya es imposible pensar en que la historia está prescrita, que tiene un guión, la sociedad que se construye como alternativa la realizan los seres humanos con su propia lucha. Parece evidente que la sociedad capitalista está en un momento de profunda crisis, probablemente una crisis terminal que se prolongará no se sabe cuánto tiempo, no encontramos en tiempo de turbulencias, de guerra, pero no sabemos lo que viene después, si va a ser mejor o peor, no hay garantía alguna de que sea el socialismo.

Por todo esto nos planteamos la idea del Socialismo del siglo XXI, que significa plantearse la posibilidad de una sociedad alternativa no capitalista, no estatista, no industrialista, no desarrollista, que reconozca la diversidad de patrones de vida, formas de conocimiento, patrones culturales, diversidad de la vida humana, este es nuestro reto que está abierto para la política, para la teoría, ese es el sentido de lo que plantean los zapatistas: “vamos a construir un mundo donde quepan todos los mundos”, es de una dificultad enorme imaginarnos eso pero tenemos que hacerlo necesariamente. Es un debate abierto para Venezuela y para el mundo.

A diez meses del gobierno progresista uruguayo: ¿Es sustentable un gobierno progresista?

Marcelo Rosales*

Tabaré Vázquez fue investido en su cargo de presidente de la República Oriental del Uruguay el 1 de marzo de 2005. El discurso con que cerró los actos de ese día histórico cambió el lugar discursivo del Poder Ejecutivo. Hizo hincapié en las discontinuidades con los anteriores gobiernos conservadores, lo cual fue bien recibido por los votantes de la izquierda. El énfasis puesto en los derechos humanos en un país que ha entronizado y mantenido la más persistente impunidad hacia los militares criminales de lesa humanidad durante los años setenta, cambia radicalmente el lugar del sentido común político sobre el cual se construyó el discurso dominante de la transición democrática.

Otras discontinuidades se marcan, pero algunas de las expectativas de cambio puestas en juego por los ciudadanos han sido defraudadas, por ejemplo: el mantenimiento de los principales aspectos de la política económica y la continuidad de los vínculos con Estados Unidos. Pero estas continuidades y discontinuidades son señaladas como inconsistentes con el discurso del Frente Amplio cuando era oposición y se rotula como un corrimiento al “centro político”. En este sentido, más que ese “corrimiento”, lo que ha cambiado es el lugar del centro político hacia un discurso diferente. Lo que hasta hace unas

horas era lo impensable se transforma en lo razonable como efecto de un acto de imposición simbólica del novel Presidente de la República. El campo del poder empieza a reconfigurarse desde la institucionalidad política, lo cual es inevitable en un esquema de funcionamiento democrático, en el que los derechos ciudadanos y el vínculo de éstos con el Estado comienzan a ocupar un lugar central. El mercado y las inversiones dejan de ocupar el centro de la escena y del discurso gubernamental; pero no así de las prácticas gubernamentales.

Breve recorrido histórico

Antes de establecer algunos de estos acontecimientos que marcan cortes más o menos radicales con el pasado liberalismo conservador que rigió los destinos de Uruguay desde fines de los años sesenta, trazaremos un panorama de la izquierda uruguaya que conforma el “gobierno progresista”. El Frente Amplio surge en 1971 como la alianza sin exclusiones de los diferentes sectores de la izquierda política en un proceso de acumulación histórico que también logró la unificación de los sindicatos en una central única de trabajadores hacia mediados de los años 60. Existían consensos entre la amplia mayoría de los intelectuales uruguayos acerca de la necesidad de una unificación de la izquierda junto a los sectores progresistas de los tradicionales

partidos Blanco o Nacional y Colorado, partidos catch all que se habían alternado en el poder desde el surgimiento de Uruguay como país independiente.

La dictadura militar de 1973, producto de una alianza de parte del elenco político liberal conservador junto a la mayoría del estamento militar, significó una brutal represión al Frente Amplio, con miles de encarcelados políticos, más de un centenar de desaparecidos y decenas de miles de exiliados. El presidente del Frente Amplio, General Líber Seregni, preso durante casi todo el periodo, se constituyó en el símbolo viviente de la resistencia a la dictadura.

Concluido ese régimen (1984, elecciones nacionales con políticos proscritos; 1985, asunción como Presidente del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti, vencedor de esos comicios), el Frente Amplio, que no

* Profesor de la Universidad de la República de Uruguay.



para de crecer elección tras elección, enfrenta a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (o ley de impunidad), sometiendo a referéndum dicha ley, la cual es aceptada por la mayoría del electorado (1989). Quedaba así entronizada la impunidad a los militares violadores de los derechos humanos, más allá del derecho a la justicia que impone la Declaración Americana de los Derechos, transgredida por la citada ley.

Tras la impunidad, ya en los años noventa, el elenco gubernamental, en este caso del Partido Nacional, pero no menos liberal conservador, impone una ofensiva neoliberal incluyendo diversas privatizaciones, las que son sometidas a referéndum por la campaña de recolección de firmas de los sindicatos. La Ley de Empresas Públicas es parcialmente derogada por la voluntad popular (1992). Con ello asistimos a un “neoliberalismo amortiguado”. Para ese tiempo, el Frente Amplio obtuvo la Intendencia Municipal de Montevideo (1990) con el Dr. Tabaré Vázquez como Intendente. A partir de ese momento el Frente Amplio cuenta con una figura de singular carisma y autoridad, y por la misma razón, un líder cuestionado soto voce por varios intelectuales de izquierda que lo ven como un dirigente populista ajeno a la tradición de esta tendencia.

En esos años de derrumbe del llamado socialismo real, el Frente Amplio crece a pesar de divisiones internas y de un rumbo de la historia que no se mostraba muy auspicioso para la izquierda. En 1995, el Dr. Sanguinetti obtiene

*Tras la impunidad,
ya en los años noventa,
el elenco
gubernamental, en este
caso del Partido
Nacional, pero no
menos liberal
conservador, impone
una ofensiva neoliberal
incluyendo diversas
privatizaciones, las que
son sometidas a
referéndum por la
campaña de recolección
de firmas de los
sindicatos.
La Ley de Empresas
Públicas es
parcialmente derogada
por la voluntad popular
(1992).*

un segundo mandato presidencial y se produce al interior del Frente Amplio un debate entre los llamados “renovadores” y los “ortodoxos”. En el escaso espacio discursivo dejado para la izquierda, todo lo revolucionario y antiimperialista es reducido a eslogan por una alianza de hecho entre los doxófosos neoliberales (algunos de ellos formados en la izquierda) y otros de los llamados renovadores que empiezan a creer, al igual que los anteriores, que democracia y mercado mantienen un vínculo indisoluble. En esos años de crecimiento económico y de venta explosiva de au-

tomóviles cero kilómetro y electrodomésticos importados, baja la pobreza, pero aumenta la marginalidad social y se destruye gran parte del entramado productivo con la afluencia sin barreras de los productos importados. Al mismo tiempo, el Frente Amplio sigue creciendo como fuerza electoral, convocando a sectores sociales que anteriormente le eran muy refractarios, como los productores rurales y los pequeños empresarios.

Este Frente Amplio (más amplio socialmente) llega al gobierno en las elecciones del 31 de Octubre del 2004. El Frente es también políticamente más extenso porque incluyó a nuevos sectores provenientes de los partidos tradicionales y de viejas escisiones del propio Frente que volvieron a sus filas (así, la denominación electoral de la fuerza política creció ridículamente hasta “Frente Amplio – Encuentro Progresista – Nueva Mayoría”). También en el programa de gobierno del Frente Amplio y en el énfasis de su discurso pre-electoral, se aprecia ese encuentro de clases sociales e intereses. De allí puede extraerse una definición de lo progresista como un lugar de encuentro más que de confrontación (“Encuentro Progresista”), que se apreciará en un gabinete ministerial que integra a una figura independiente proveniente del campo empresarial como Ministro de Industrias junto a dos ex guerrilleros tupamaros (Ministros de Trabajo y de Ganadería, Agricultura y Pesca) y de una maestra comunista al frente del recién creado Ministerio de Desarrollo Social.

La voluntad de poder y la voluntad de cambio

Hasta ahora el presidente, que ha demostrado una gran voluntad de poder, ha desarrollado una política progresista, esto es, mantener equilibrios entre el carácter transformador de los sectores que pugnan por un mayor ritmo en los cambios y los que buscan mantener determinados aspectos del statu quo, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones internacionales del país y la conducción económica. Pero también hay otros temas controversiales y no todos los sectores se alinean automáticamente.

En todo caso, quien ha tenido mayor osadía para cuestionar las decisiones del Poder Ejecutivo ha sido el Partido Comunista, que, sin embargo, se mantiene en el seno del gobierno y lleva adelante una de sus políticas centrales como es el Plan de Emergencia Social. Dicho Partido critica el “posibilismo” en la izquierda al tiempo que denuncia el “infantilismo” de la crítica de la izquierda extra-parlamentaria. El posibilismo se centraría en la visión que domina en el Ministerio de Economía y que mantiene atado al gobierno a un esquema económico que subordina al país a los dictados de las instituciones transnacionales de crédito (Banco Mundial, FMI, BID). La crítica del posibilismo reclama un programa económico más jugado en la renegociación de la pesada deuda externa y vinculado a los socios del MERCOSUR que al alineamiento a los organismos transnacionales de crédito y a los Estados Unidos.

En todo caso, quien ha tenido mayor osadía para cuestionar las decisiones del Poder Ejecutivo ha sido el Partido Comunista, que, sin embargo, se mantiene en el seno del gobierno y lleva adelante una de sus políticas centrales como es el Plan de Emergencia Social.

Cabe señalar que fue el Partido Comunista el único sector parlamentario de la izquierda que no dio su voto para el tratado de promoción de inversiones que firmó Uruguay con Estados Unidos, lo que generó una crisis al interior del gobierno. El sector con mayoría relativa en el Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular, dirigido por José Mujica, ex guerrillero tupamaro, también pretendió votar en contra del tratado por decisión de su dirección política y sus bases, pero terminó apoyando al Ejecutivo por la habilidad para alinear

al sector que muestran sus principales dirigentes.

En entrevista con el semanario neoliberal “Búsqueda” (5-1-2006), el ministro de Economía Danilo Astori (recientemente galardonado como mejor ministro de Economía por “The Banker”), acaba de declarar que postulará por la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos¹, lo cual lo aleja aún más de la posición comunista. El ministro de Economía tiene un alto respaldo por el unánime apoyo que le otorgan al unísono los partidos tradicionales y los sectores empresariales y financieros. Es comunista en cambio el principal dirigente del PIT-CNT (central sindical única).

Las relaciones entre el capital y el trabajo

Consideramos a un gobierno revolucionario si logra reconfigurar el campo del poder alterando sustancialmente las relaciones capital-trabajo y las relaciones internacionales puestas en juego por los esquemas transnacionales de dominio. Un gobierno sólo puede ser progresista durante un breve lapso, en especial si estamos en un país periférico: o evoluciona hacia uno revolucionario y antiimperialista o se transforma

1. Según versión del Diario uruguayo la República del 17 de enero: Uruguay no firmará ningún TLC con Estados Unidos. El presidente Tabaré Vázquez habló ayer unas dos horas en el Consejo de Ministros para descartar totalmente un posible Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, como se había difundido en los últimos días. Este tema llevó casi tres horas de la sesión. Tabaré Vázquez recordó que él tiene “dos biblias” para gobernar: la Constitución y el Programa de Gobierno del Frente Amplio. La Constitución postula la integración regional, mientras el programa habla de “país integrado comenzando la integración por la región y extendiendo el Mercosur a la región sudamericana”.

en nuevo instrumento al servicio de una configuración dominante apenas maquillada.

Todavía nos encontramos en la evanescente “era progresista”, y en ese sentido, se han obtenido derechos para los trabajadores y recuperado otros que se habían perdido. Se ha vuelto a las antiguas negociaciones colectivas (Consejos de Salarios), se derogó un decreto represivo acerca de las ocupaciones sindicales y se votó una ley de fuero sindical, disposiciones que han sido celebradas por los trabajadores y que ya han permitido un enorme repunte en las afiliaciones a los sindicatos y en la afirmación del movimiento sindical como el principal movimiento social uruguayo. Al mismo tiempo, dichas conquistas sindicales han sido cuestionadas por las cámaras empresariales y los partidos tradicionales.

Las relaciones internacionales del progresismo

Las relaciones internacionales son un lugar propicio para indagar el rumbo de un gobierno progresista. Los equilibrios deben realizarse en dos frentes: en el de la opinión pública nacional y en el equilibrio que debe mantener un país pequeño y periférico. El gobierno se inicia con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y cierra el 2005 con el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Ambas decisiones son compartidas por todo el espectro de la izquierda. Sin embargo, lo más trascendente se vincula con las relaciones internacionales corres-

El presupuesto nacional recientemente aprobado contiene avances sustanciales en cuanto a los fondos de Salud y Educación Pública. A ellos se suma una reforma en Salud Pública que evolucionará hasta llegar a un Sistema Nacional que deberá optimizar los recursos sanitarios nacionales.

pondientes con asuntos económicos nacionales como el tratado de inversiones con EE UU o los lazos con las organizaciones transnacionales de crédito.

Además, el gobierno ha jugado como tradicionalmente lo ha hecho el país: abierto a recibir todo lo que viene de afuera, y de Venezuela, con Chávez a la cabeza, ha existido apoyo e inversión en lo que va del año. No se han descuidado tampoco las buenas relaciones con todos los socios comerciales, en especial con Estados Unidos, lo cual genera dificultades entre la militancia de izquierda.

Capítulo aparte merecen las complicadas relaciones con Argentina. La polémica instalación de plantas de celulosa de origen europeo (Botnia, finlandesa y

Ence, española) en un territorio uruguayo lindero con Argentina ha generado controversia con los pobladores y el gobierno argentino que los apoya, también con los ecologistas uruguayos que no quieren dicha instalación. La magnitud de la inversión y la necesidad de empleo han logrado apoyo a favor de las plantas en la región donde se instalarán. Esto se estrella, lógicamente, con los intereses argentinos, que sólo recibirán la contaminación que estas industrias provocarán inevitablemente. En pleno verano la polémica ha subido de revoluciones a raíz de las medidas de lucha de los argentinos que incluyen el corte de rutas a los turistas que quieren veranear en las playas uruguayas y que son demorados por los ecologistas argentinos.

Sistema tributario y presupuesto nacional

El presupuesto nacional recientemente aprobado contiene avances sustanciales en cuanto a los fondos de Salud y Educación Pública. A ellos se suma una reforma en Salud Pública que evolucionará hasta llegar a un Sistema Nacional que deberá optimizar los recursos sanitarios nacionales. En Educación se comenzará el año entrante un Debate Educativo Nacional con miras a la aprobación de una nueva Ley. Al mismo tiempo, hay dudas respecto al presupuesto de la cartera de Obras Públicas que vio retaceados sus fondos en un momento en que se necesita inversión pública para aumentar el empleo, mejorar la red vial y de transportes para el proyecto de país productivo.

Respecto del sistema tributario, se plantea una reforma que incluye un impuesto a la renta de las personas físicas, lo cual es una vieja propuesta de la izquierda, al tiempo que se rebajan los gravámenes al consumo como el Impuesto al Valor Agregado. Pero la implementación de dicho tributo se encuentra cuestionada, tanto a lo interno del gobierno como desde la oposición, lo cual augura largos debates en este año. Estas discusiones definirán en gran medida la suerte del gobierno para la obtención de recursos con mayor justicia tributaria. De todos modos, estos son escasos respecto de las necesidades y las cargas vinculadas a la deuda externa del país son un bloqueo para las posibilidades nacionales.

Perspectivas

En Uruguay no falta la crítica. El Frente Amplio no es un conglomerado acrílico. Desde su creación ha sido un instrumento de reflexión y esto es visto por sus militantes como parte de la praxis política. En el 2005 mucho se ha hecho desde el gobierno progresista. Se partía de un estado de cosas vinculado a gobiernos conservadores sin políticas sociales

Este año, coinciden todos los analistas, será clave para poder ver mejor el rumbo que toma el gobierno, si continua el camino de los cambios y de la unidad latinoamericana o si retoma el del anterior gobierno conservador, de la mano de Estados Unidos.

claras que materializaran derechos ciudadanos y hoy existe un rumbo respecto a ellas. Es desde el propio Frente Amplio que se critica fuertemente la implementación del Ingreso Ciudadano y el rumbo del Plan de Emergencia. No había leyes que protegieran a los trabajadores sindicalizados y hoy existen. No había políticas culturales nacionales y ahora empieza a haberlas. Son los propios frenteamplistas los que se encargan de marcar la cancha y reclamar la existencia de hechos y discursos políticos coherentes.

Michael Hardt, citando a Deleuze, dijo recientemente en Montevideo que no hay gobiernos de izquierda pero que puede haber gobiernos que posibiliten el desarrollo de la misma. Lo realizado hasta ahora por el gobierno de Tabaré Vázquez parece confirmar sus dichos. Nosotros pensamos que un gobierno es de izquierda cuando tiende a transformar profundamente la realidad social, a ser revolucionario. Hoy en día el gobierno uruguayo es un gobierno progresista de conciliación entre clases que no afecta profundamente el estado de las mismas en el campo del poder. Esto evolucionará hacia la izquierda si sigue en el rumbo de beneficiar al trabajo en desmedro del capital, que en el caso uruguayo, es en gran medida capital transnacional.

Este año, coinciden todos los analistas, será clave para poder ver mejor el rumbo que toma el gobierno, si continua el camino de los cambios y de la unidad latinoamericana o si retoma el del anterior gobierno conservador, de la mano de Estados Unidos. En un sentido o en el otro, el progresismo no cuenta con los cinco años del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.

El Zapatismo como movimiento social

Entrevista a
Bernard Duterme*

En el fondo, ¿qué es el EZLN? ¿Un movimiento político-militar, un movimiento político, un movimiento social, una especie de partido étnico-regional? Y, conforme a esta o estas definiciones, ¿cuál es el balance de estos últimos 12 años de lucha y de actividad?

Todo depende por supuesto de lo que uno quiere decir con estas designaciones no controladas. Cada escuela sociológica o cada capilla política tendrá sus preferencias, incluso puede existir cierto fetichismo de las categorías. En los primeros años que siguieron su penetración en la selva lacandona (inicio de los años 1980), el EZLN sí fue un núcleo político-militar formado por algunos universitarios no indígenas, urbanos y guevaristas. Desde el levantamiento del 1 de enero del 1994, el mismo EZLN, o más bien la rebelión zapatista en su conjunto, se impuso progresivamente, con altos y bajos,

como un movimiento social y político importante, tanto en el nivel regional, nacional, e incluso internacional, entre otras cosas gracias a la efervescencia de una vasta nebulosa "zapatizante".

Sin embargo, la imagen un poco simplificadora y lineal de un grupúsculo inicial convertido en el trascurso de 10 años en un movimiento social rebelde sobre un trasfondo de injusticia y de pobreza no es sostenible. Lo demuestran los trabajos históricos y sociológicos inspirados por Alain Touraine - en particular los de Yvon Le Bot¹. Explican como, antes del 1994, todo un conjunto de procesos sociales y culturales llevaron a un sector de la población indígena del este de Chiapas a elegir el recurso de las armas y lanzarse en una lógica insurreccional. El "salto" de 1994, lejos de ser la expresión más alta del movimiento social, su desenlace o apoteosis, aparece como la manifestación de un impedimento, como una entre las opciones elegidas por un sector social bloqueado en su proceso de emancipación en curso desde dos o tres décadas, confrontado a los callejones sin salida de la modernización y del desarrollo, víctima de la represión y del racismo...

Estoy menos convencido por Touraine y Le Bot cuando se rehúsan a designar al zapatismo post-1994 como "movimiento social" y hablan más bien de "deseo de movimiento social". A veces, en los analistas de los "nuevos movimientos sociales", hay una celebración exagerada de

lo nuevo por sí mismo. Eso se vuelve la justificación y la condición exclusiva del interés manifestado por el objeto de estudio, en este caso el zapatismo: novedad de las formas de organización (democráticas, horizontales, reticulares...), de los repertorios de acción (simbólicos, mediáticos, expresivos...), de los valores (dignidad, diversidad...), de las reivindicaciones (autonomía, reconocimiento...), de la relación con lo político (contrapoder civil...) y de las identidades movilizadas (culturales, de género...). Sin embargo, basta examinar con detenimiento la dinámica zapatista para relativizar su originalidad; o más bien, tal vez, para situarla como una articulación de formas nuevas con formas más antiguas, en la medida en que las actitudes verticalistas y autoritarias, los modos de expresión clásicos, los anhelos igualitarios de redistribución de las riquezas, las reivindicaciones estrictamente socio-eco-

* Periodista y sociólogo, director del Centro Tricontinental (CETRI) de Lovania (Bélgica), jefe de redacción de la revista Alternatives Sud. Ha sido investigador-formador de la Universidad Centroamericana de Managua de 1989 a 1992 y coordinador de la plataforma europea de apoyo a la Comisión Nacional de Intermediación entre el EZLN y el gobierno mexicano, presidida por el obispo Samuel Ruiz, de 1995 a 1997. Autor de *Indiens et zapatistes: mythes et réalités d'une rébellion en sur-sis* (Bruselas, Luc Pire, 1998).

Entrevista realizada por el equipo de la revista Entre Voces

1. Yvon Le Bot, *Subcomandante Marcos, El sueño zapatista*, Barcelona, Anagrama, 1997.



nómicas, la obsesión por el poder estatal y las identidades de clase están todavía muy presentes en el movimiento zapatista.

El balance de la rebelión está vinculado a esta articulación original de identidades (sociales, étnicas, territoriales), de reivindicaciones (culturales, políticas, económicas) y de modos de acción (masivos, simbólicos, pacíficos) que estuvieron a menudo antinómicos en la historia de las luchas sociales. Una articulación original, pero también circunstancial y frágil. Por un lado, no hay mucha exageración en decir que los zapatistas fueron los artífices de la caída (en el Chiapas y en el DF) del partido que controlaba todo el poder desde los años 1920, el PRI; fueron también uno de los motores de una dinámica indígena nacional, incluso tal vez latinoamericana, de carácter afirmativo y democrático, así como los pioneros de una nueva internacional plural conocida como movimiento anti-globalización, o "altermundialista". El reconocimiento mundial de los méritos de los zapatistas alimenta su dignidad recuperada, y a la vez se nutre de ella... Por otro lado, sin embargo, los resultados de una larga década de conflictos más o menos abiertos y de negociaciones entre rebeldes y gobierno son más ambivalentes. Más allá del carácter insignificante del potencial militar del EZLN, el anclaje social del movimiento en Chiapas conoce un cierto desgaste. Aparece un tanto amenazado, e incluso en los puntos de anclaje más fuertes de la rebelión, no hay un solo municipio que pueda pretender ser 100% zapatista. El aterrizaje del EZLN en el escenario

político mexicano nunca acaba de aplazarse. En cuánto a la articulación "intergaláctica" con las convergencias altermundialistas, si estaba ambivalente ayer, está hoy evanescente; no cumplió sus promesas.

Para el EZLN, ¿quiénes son los actores del cambio social? ¿Qué papel tiene la dimensión étnica? ¿Cuál es el objetivo final: una forma de socialismo, una democracia radical más o menos institucionalizada, una pirámide de entidades comunitarias autogestionadas?

Vista desde arriba, la dinámica zapatista puede ser presentada como una nueva perspectiva emancipadora en construcción (cercana a la perspectiva "altermundialista"), en la medida en que, en sus discursos como en sus actos, intenta conciliar varios enfoques heredados o renovados: el enfoque republicano de la democracia política y de la ciudadanía, el enfoque socialista y tercer-mundista de la justicia entre los grupos sociales y entre los pueblos, el enfoque cultural del reconocimiento de la diversidad, los enfoques ecologista, feminista, pero también un enfoque individualista que cuestiona el estatus del individuo dentro del colectivo y valoriza la emancipación del sujeto individual... El discurso de la rebelión se nutre también ampliamente de la ética y de la temática de la dignidad, y la cultura experimental del cambio social (que se construye aquí y ahora en las autonomías locales concretas) cuestiona en los hechos la relación jerárquica clásica (jacobina, marxista-leninista o social-demócrata) entre institu-

ciones partidarias y movimientos sociales.

Desde otra perspectiva, el movimiento zapatista es también una especie de cóctel circunstancial de culturas políticas (locales, nacionales, religiosas, indígenas, guevaristas...) en el que domina, hacia afuera, el toque del subcomandante Marcos, convertido en un gran maestro en el arte de hacer de la necesidad virtud. Cuando llegó a Chiapas, Marcos era bastante "cuadrado" en sus concepciones y sus certidumbres. Pero muy rápidamente, primero por el contacto con la realidad indígena preñada por la utopía liberadora de la iglesia chiapaneca, después del 1994 por las varias peripecias del conflicto "de baja intensidad" con la autoridades, el subcomandante se volvió un predicador de la indefinición, de la improvisación y de la adaptación a las circunstancias, con inflexiones más o menos radicales, más o menos incluyentes, más o menos intransigentes. Aunque el objetivo inicial parecía claramente "socialista", no hay un verdadero "objetivo final" como tal: oficialmente, se trata de construirlo en el camino, está sustituido por un simpático "radicalismo democrático" que logra seducir más que comprometer. Desde el 1 de enero de 1994, tanto en lo que se refiere al modelo de autonomía para armar en el terreno concreto, como en lo que atiene a las vías de una verdadera democratización del Estado y de la sociedad mexicanos, el EZLN ha multiplicado las invitaciones a debatir pacíficamente, a intercambiar puntos de vista, eso en todas las direcciones... Sin embargo, una metodología no basta

para hacer una política. Si bien el fin ya no justifica cualquier medio, los medios tampoco pueden sustituirse al fin.

¿Qué espacio de estrategia y de alianzas define la Sexta Declaración de la Selva Lacandona entre la lucha armada y la lucha institucional-electoral, ambas aparentemente descartadas?
¿Asume el EZLN la idea de "cambiar el mundo sin tomar el poder", o es sólo una extrapolación propia de John Holloway²?
¿Cómo se explica el grado de virulencia de los ataques de Marcos contra López Obrador?
¿Cuáles son los retos o las oportunidades de una eventual victoria del PRD para el EZLN?

La Sexta Declaración de la Selva Lacandona (junio del 2005) y la "Otra Campaña" que la sigue (enero de 2006) constituyen una nueva iniciativa zapatista, que señala a la vez una continuidad y una cierta ruptura con las múltiples iniciativas tomadas desde 1994.

Una continuidad porque intenta de nuevo sacar el zapatismo de Chiapas, existir políticamente más allá de los municipios indígenas autónomos, movilizar los actores potenciales de un contrapoder civil en el nivel nacional, articular las luchas sociales mexicanas, "acumular fuerzas", unir a los campesinos, obreros, amas de casa, estudiantes, a los gays, etc. (En general, las precedentes iniciativas se agotaron en una cierta ausencia de resultados políticos, en las rivalidades entre personas o fracciones de la izquierda militante - de la que provienen los creadores del EZLN -, en la indefinición o en la falta de agenda y de perspecti-

Es difícil evaluar el impacto potencial de esta campaña zapatista anti-López Obrador; pero podría hacerle juego a la derecha y decepcionar muchos latinoamericanos que esperen del México una confirmación de la vuelta hacia la izquierda del subcontinente.

vas...) Pero es también una ruptura, porque nunca como ahora Marcos había dibujado con tanta precisión el perfil político del nuevo frente para armar: "de izquierda", "anticapitalista" y no partidario.

Esta convocatoria tiene un aspecto paradójico en la medida en que se presenta a la vez como incluyente y excluyente. El EZLN insiste que no quiere dirigir el proceso, pero delimita como nunca los criterios de participación. La intransigencia culmina en el ultimátum dirigido por Marcos a los mexicanos que desean votar por el candidato del PRD en las próximas elecciones presidenciales (y que está por ahora encabezando las encuestas): "Los que van a votar por López Obrador no pueden estar a nuestro lado". ¡Con él o con nosotros! El rechazo definitivo al PRD tiene sus razones: conflictos esporádicos y sangrientos en Chiapas entre indígenas zapatistas e indígenas perredistas, voto del PRD en 2001 a favor de una "ley indígena" que "traiciona" el

espíritu de los acuerdos de San Andrés de 1996 entre EZLN y gobierno, actos de oportunismo político y corrupción notorios en el PRD, ambigüedades del programa económico de López Obrador, etc. Sin embargo, esta actitud contrasta con lo que solía ser la "neutralidad" o el "distanciamiento" del EZLN durante los períodos electorales, y desconcierta a muchos electores de izquierda. Es difícil evaluar el impacto potencial de esta campaña zapatista anti-López Obrador, pero podría hacerle juego a la derecha y decepcionar a los latinoamericanos que esperen del México una confirmación de la vuelta hacia la izquierda del subcontinente.

En cuanto a las reflexiones etéreas de Holloway ("cambiar el mundo sin tomar el poder"), están mucho más allá de las posiciones circunstanciales de los zapatistas, aunque estos puedan ocasionalmente encontrar en ellas una cierta validación teórico-política. En el mismo Chiapas (donde los zapatistas sí "tomaron el poder" en unos treinta municipios rurales para "cambiar la vida") como en el nivel nacional (donde dan la prioridad a la construcción de un contrapoder social al margen de las vías democrático-electorales que ellos juzgan ineficientes en el contexto de las relaciones de fuerzas actuales), hacen hincapié en el "cambio desde abajo". Si bien esta estrategia cuestiona las orientaciones actuales del "cambio desde arriba", no trastoca mucho su realidad.

2. John Holloway, *Cambiar el mundo sin tomar el poder*, Buenos Aires, Herramienta, 2001.

De la calle al Palacio: los desafíos de la izquierda boliviana¹

Pablo Stefanoni*

Evo Morales ingresó el 18 de diciembre pasado por la puerta grande de la historia boliviana. No solamente se transformó en el primer presidente indígena (y cocalero) sino en el mandatario que llega con más cantidad de votos al Palacio Quemado desde la recuperación de la democracia en 1982. Cultivador de coca, amigo de Fidel Castro y Hugo Chávez -a quienes llama “comandantes de las fuerzas libertarias del continente”- Morales arrasó en las elecciones presidenciales con el 53,7% de los votos y pulverizó no sólo a la derecha conservadora (con una ventaja de 25 puntos sobre el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga) sino a unas encuestadoras que siguen sin medir el pulso de la Bolivia profunda, secularmente excluida por siglos de dominación colonial y neocolonial. Además de una embajada norteamericana que ve en Evo Morales un nuevo Chávez en una región atravesada por renovados vientos nacionalistas y fuertes cuestionamientos a las políticas del Consenso de Washington.

“Bolivia se ha levantado, esta es una revolución democrática y ha dado una señal clarísima a América Latina y al mundo que apuesta por cambiar este país, y lo va a hacer de manera estructural, sin medias tintas, respetando el mandato del pueblo”, declaró el vicepresidente electo Álvaro

García Linera apenas conoció los resultados, imprevistos incluso para los más optimistas entre las filas del Movimiento al Socialismo (MAS). No hubo festejos populares (reservados para la investidura de Evo Morales el 22 de enero) y el “día después” encontró un país en calma, como si tanto los vencedores como los vencidos intentaran digerir el “tsunami azul” que llevará al sillón presidencial a un boliviano tan parecido a sus compatriotas, que no es bilingüe español-inglés sino trilingüe español-aymara-quechua.

Nueva hegemonía

Después de un largo “empate catastrófico”, entre fuerzas indígena-populares y conservadoras, se visualiza una nueva hegemonía en ciernes de la izquierda como continuación de las casi dos décadas de hegemonía neoliberal, cuya duración dependerá de la forma en que el MAS administre el capital político que tiene entre las manos. La votación masista puso de relieve la transversalidad clasista, étnica y regional de la demanda de cambio frente al enorme desprestigio de los partidos tradicionales y de la institucionalidad política construida en los últimos 23 años de alternancia entre un conjunto de partidos que hace rato perdieron la voluntad transformadora que en algún momento delataron sus siglas (nacionalismo o izquierda revolucionarios)² y conformaron

la “democracia pactada” que garantizó con éxito la hegemonía neoliberal y la desactivación del pensamiento crítico. Los resultados del 18 de diciembre –que instituyen una novedosa polarización izquierda-derecha en el país– no pueden explicarse sin tomar en cuenta el ciclo de acumulación política del movimiento indígena-popular en el último quinquenio, desde la expulsión de la empresa de aguas Bechtel de Cochabamba, en abril de 2000, pasando por las sucesivas asonadas populares de octubre de 2003 (caída de Gonzalo Sánchez

* Periodista e investigador social. Corresponsal en La Paz del Diario Página 12.

1. Este artículo retoma algunos argumentos presentados en "Revolución democrática en Bolivia", Le Monde Diplomatique, Cono Sur, enero de 2006 y en algunas crónicas publicadas en el diario Página/12.
2. Los tres partidos que hegemonizaron el ciclo neoliberal fueron el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN).



de Lozada) y mayo-junio de 2005 (renuncia de Carlos Mesa). Y, en paralelo a este ciclo de contestación plebeya, la consolidación de un nuevo “sentido común” anti-neoliberal, que recupera selectivamente elementos del viejo nacionalismo revolucionario de los años ‘50, entre ellos la división del país entre la nación (el pueblo) y la antinación (la oligarquía), ésta última una suerte de quintacolumna de intereses foráneos opuestos al desarrollo autónomo de las potencias internas de la nación. La convocatoria a los empresarios “patrióticos” y la contradicción principal entre la nación y el imperialismo se inscriben también en la tradición populista que marcó la historia política boliviana desde mediados del siglo XX y hoy es reactualizada por el MAS y articulada con la crítica al “colonialismo interno” desarrollada por el movimiento katarista-indianista en los años ‘70.

La izquierda que vuelve al poder después del fracaso de la Unidad Democrática Popular (1982-1985), ya no es la izquierda “criolla”, partidaria y marxista de antaño sino un archipiélago de movimientos sociales y sindicales —una especie de simbiosis entre partido y sindicatos— con ritmos, culturas políticas y objetivos no siempre coincidentes y fáciles de articular, y con fronteras ideológicas más amplias y pragmáticas. En gran medida, el éxito masista fue articular un conjunto de corporaciones populares, cuyas formas organizativas combinan la forma comunidad con la forma sindicato, a partir de la operación populista descrita por Ernesto Laclau (La razón

En temas sensibles como la propiedad de la tierra el MAS promueve una política moderada, enfatizando que sólo afectará a las tierras “improductivas”, al tiempo que ha señalado que favorecerá a los empresarios “productivos” con créditos estatales que viabilicen un “shock productivo”.

populista, 2005): el intento de construir al “pueblo” como actor histórico a partir de una pluralidad de situaciones antagónicas, en este caso a partir del liderazgo de Evo Morales, superficie de inscripción de una multiplicidad de frustraciones acumuladas de corta y larga duración.

En todo caso, una diferencia importante con otras experiencias de articulación populista “clásicas” es que aquí no se trata de un líder que “constituye” al “pueblo”, sino de un líder surgido de los propios movimientos sociales, que bajo el nuevo gobierno “de poncho y corbata” reactualizarán una lógica de cogobierno con el Estado —surgida luego de la Revolución Nacional de 1952— y cuyo devenir no es posible definir a priori. El gobierno masista deberá ir resolviendo —en la práctica— la tensión entre expansión hegemónica y replie-

que corporativo de los movimientos sociales que conforman el “instrumento político”, y ello comenzará a expresarse en la conformación del gabinete: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en boca de Román Loayza, ya reclamó varios ministerios para la organización, al igual que la federación de cooperativistas mineros, que reclamó el Ministerio de Minería.

En pocas palabras, las medidas de gobierno del MAS determinarán si se avanzará hacia una reforma intelectual y moral de la política o hacia un nuevo tipo de clientelismo popular, que reemplace parte del personal del Estado sin cambiar de manera sustancial la forma de hacer política en el país. Adicionalmente, la gestión del Estado informará sobre la capacidad de la izquierda indígena para transformar en una nueva institucionalidad y un nuevo modelo económico post-neoliberal la avalancha de votos del 18 de diciembre. En este sentido, García Linera se pronunció por la implementación de un “capitalismo andino-amazónico” que transfiera parte del excedente de los hidrocarburos nacionalizados hacia la economía “informal” (familiar y comunitaria), dada la imposibilidad de absorción de la plataforma económica tradicional por la moderna. En temas sensibles como la propiedad de la tierra el MAS promueve una política moderada, enfatizando que sólo afectará a las tierras “improductivas”, al tiempo que ha señalado que favorecerá a los empresarios “productivos” con créditos estatales que viabilicen un “shock productivo”.

Para el vicepresidente electo, la imposibilidad del socialismo en Bolivia se basa en dos constataciones: la implosión de las economías comunitarias en economías familiares –estructuras de las últimas rebeliones sociales– y el repliegue político y organizativo de la vieja clase obrera, reemplazada por un nuevo proletariado precarizado y des-sindicalizado. A estos “factores objetivos”, quizás convenga agregar los “subjetivos”: la inexistencia de corrientes socialistas entre los movimientos sociales bolivianos. En todo caso, la distancia entre la moderación y la radicalidad se refiere al grado de profundidad de la nacionalización –léase estatización– de la economía, además de la corriente utilización del discurso “radical” (de los movimientos a la “izquierda” del MAS) como una estrategia de legitimación en espacios locales. El fracaso de la incorporación al MAS de organizaciones como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) o la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto no se debió a diferencias políticas sino a los desacuerdos en relación a las candidaturas y distribución de los espacios de poder. Otra pata del pragmatismo es la Participación Popular (que incluye la municipalización de los recursos públicos), donde las organizaciones “radicales” construyen su poder local a través de su acceso a recursos estatales –no siempre transparente– y en una convivencia “pacífica” con las autoridades locales.

En gran medida, la votación al MAS expresa las mismas demandas que recogió el centroizquierda (con más o menos resultados)

En temas sensibles como la propiedad de la tierra el MAS promueve una política moderada, enfatizando que sólo afectará a las tierras “improductivas”, al tiempo que ha señalado que favorecerá a los empresarios “productivos” con créditos estatales que viabilicen un “shock productivo”.

en otras de sus variantes continentales: mayor transparencia en la gestión pública y reconstrucción de un Estado pulverizado por dos décadas de aplicación dogmática de políticas neoliberales que precarizaron aún más las ya difíciles condiciones de vida de los bolivianos (por ejemplo, producto del aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados).

Frente a estas demandas de cambio, la derecha conservadora –encabezada por Jorge “Tuto” Quiroga– apareció como “más de lo mismo”. Adicionalmente, la agrupación Poder Democrático Social (Podemos) debió enfrentar el rechazo social a la conformación de sus listas –que fueron el receptáculo de infinidad de “tránsfugas” que encontraron en Podemos un refugio frente a la pulverización de sus partidos– y

a la “guerra sucia” desatada contra la izquierda, que hablaba de pérdida de mercados externos y expansión del narcotráfico si Evo Morales llegaba a la Presidencia y hasta acusaba al candidato del MAS de no pagar la cuota alimentaria de sus hijos.

“Salida pactada”

Es un lugar común comparar este regreso de la izquierda al poder con su más inmediato antecedente, la Unidad Democrática Popular (UDP) (1982-1985), expulsada del poder por el sabotaje de la derecha empresarial (hiperinflación) y las presiones de la izquierda radical encarnada en la Central Obrera Boliviana (COB). Pero el contexto parece presentar más diferencias que similitudes con el de los años ‘80. Además de encontrar una situación macroeconómica “equilibrada” frente a la crisis de los ‘80, Evo Morales no tiene enfrente a una COB con un potencial de movilización capaz de vetar políticas estatales, como tuvo Hernán Siles Suazo, sino a una organización en la que los recuerdos de anteriores gestas heroicas pesan más que su debilitada realidad actual. Tampoco el caudillo aymara Felipe Quispe, que obtuvo menos del 3% de los votos, parece en condiciones de desafiar al liderazgo emergente del cocalero.

A la legitimidad social del próximo gobierno –producto de la propia biografía de luchador social de Evo Morales, “no podemos bloquear a nuestro propio gobierno”– se suma un paraguas de legitimidad política derivada del resultado plebiscitario del triunfo electoral, que se expresará par-

cialmente en el plano de las instituciones: mientras el MAS contará con una mayoría absoluta en Diputados, en el Senado tendrá 12 bancas frente a 13 de Podemos, 1 del MNR y otra de Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina. Resulta aún incierto si las prefecturas (gubernaciones), de las cuales el MAS obtuvo sólo tres de nueve (Oruro, Potosí y Chuquisaca), se transformarán en un escenario propicio para la “resurrección” de una derecha expulsada del poder nacional, o si los intereses personales de los prefectos electos los conducirán a reacomodos que los acerquen pragmáticamente a un oficialismo que podría facilitarles su gestión local y que ya ha convocado a un “pacto de gobernabilidad”. El electo prefecto paceño y ex alcalde de El Alto, José Luis Paredes, aliado de Quiroga, había expresado, incluso antes de la elección, su disposición a “trabajar con Evo Morales”.

Dos desafíos marcarán, desde los primeros días de su gobierno, la agenda política del nuevo gobierno, caracterizado por una significativa escasez de cuadros:

1. El de los cultivos de coca que, en palabras de Evo Morales, “parieron el instrumento político de liberación” y que, al mismo tiempo, son una de las fuentes de inquietud de Washington.
2. La cuestión petrolera, que provocó la caída de dos Presidentes desde el 2003. Morales señaló que no habrá expropiaciones, pero que las transnacionales serán socias y no dueñas de los energéticos, y será el Estado el que controle

La “nueva Bolivia” que postula Evo Morales, deberá ponerse en marcha en la próxima Asamblea Constituyente, convocada para julio de 2006 y receptáculo de los sueños populares de transformación radical del país y de las pesadillas de la burguesía boliviana, que teme que esta instancia “refundacional” sea el escenario de una “revancha indígena” que ponga en riesgo sus intereses fundamentales, como la propiedad de la tierra.

el negocio hidrocarburífero, incluyendo las exportaciones. Para implementar el control “efectivo” del Estado, el MAS deberá lograr la firma de nuevos contratos de exploración y explotación acordes a la ley de hidrocarburos aprobada en mayo de 2005, que las empresas califican de “confiscatoria” y causa del congelamiento de las inversiones.

La “nueva Bolivia” que postula Evo Morales, deberá ponerse en marcha en la próxima Asamblea Constituyente, convocada para julio de 2006 y receptáculo de los

sueños populares de transformación radical del país y de las pesadillas de la burguesía boliviana, que teme que esta instancia “refundacional” sea el escenario de una “revancha indígena” que ponga en riesgo sus intereses fundamentales, como la propiedad de la tierra. Algunos hablan de una Constituyente “chavista” que proyecte la victoria electoral de la izquierda hacia una revolución de mayores alcances. García Linera intenta despejar estos recelos señalando que el nuevo gobierno impulsará “una salida pactada, en la que los intereses de los derrotados serán, en parte, reconocidos por los victoriosos”. Y Evo Morales consiguió varios aplausos en el seno del Comité Cívico cruceño prometiendo que respetará las autonomías departamentales y continuará con licitaciones como la de la reserva de hierro y manganeso del Mutún, la más importante del país, reclamada por el empresariado cruceño. Una de las consecuencias de esta elección es la constatación de la porosidad de la hegemonía autonomista: el candidato presidencial del MAS, acusado de enemigo de Santa Cruz, obtuvo un tercio de los votos y un senador.

Con el triunfo del MAS, Bolivia se suma a los vientos “antineoliberales” que soplan en el continente. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas en este caso la victoria electoral va de la mano de un ciclo de movilizaciones aún en ascenso, que sin duda planteará una novedosa articulación entre lo político y lo social: ni “cambiar el mundo sin tomar el poder”, ni “tomar el poder sin cambiar el mundo”.

“Evo Presidente” de Bolivia. Avances y otros retos

*Esteban Ticona Alejo**

“No sólo podemos ser electores, sino elegidos, bien por nosotros, empecemos por la diputación para después llegar a la Presidencia de la República, puesto que somos mayoría”, profetizaba el aymara Manuel Chachawayna en 1927, en ocasión de su candidatura a diputado (Ticona 2002:67-76).

El largo recorrido por indígenas en la política boliviana

La presencia de indígenas, principalmente aymaras y quechuas en la política nacional boliviana es de larga data. A pesar de la ausencia indígena en la fundación de la república en 1825, cierto sector de la clase política q'ara o criolla-mestiza, siempre ha tratado de “añadirlos” al quehacer político y a la democracia occidental.

Antes de la revolución nacional de 1952, hay un par de experiencias dignas de destacarse, como la primera postulación indígena a diputado de Manuel Chachawayna, aymara de Achacachi y el nombramiento de otro indio como subprefecto de una provincia paceña, a mediados de la década de los años veinte y principios de los treinta.

La revolución de 1952, posibilitó mayor presencia del indio en la política nacional. Aunque los primeros años de la revolución del 52, éstos fueron subordinados del Movimiento Nacionalista Revolu-

cionario (MNR), bajo el denominativo de “diputados campesinos”. El movimiento katarista e indianista, inició el cuestionamiento al carácter inconcluso de la revolución, además de instituir la autonomía organizativa y fundar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979. A partir de esta experiencia, el movimiento indígena-campesino reivindicó la ciudadanía y la identidad plena como pueblos, e inauguró con ella, una especie de matriz político ideológica anticolonial contemporánea, plenamente vigentes en el actual escenario político nacional.

La experiencia de los primeros diputados indianistas, como Constantino Lima y Luciano Tapia del Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) (Tapia 1995) o la presencia de los kataristas Víctor Hugo Cárdenas y Walter Reinaga del Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTKL), abrieron la presencia real e indígena en la política nacional en la etapa denominada “proceso democrático”, iniciada en los años ochenta. En esta misma década, son nombrados los primeros ministros indígenas, como Zenón Barrientos, Mauricio Mamani, Simón Yampara, entre otros.

En los años 90, nuevos populismos como el desaparecido Conciencia de Patria (Condepa), van a coadyuvar para la aparición de algunas mujeres líderes aymaras urbanas “de pollera” como Remedios Loza. Algunos partidos tradicionales, como el MNR, en

el primer gobierno de Sánchez de Lozada y su interés de dar “rostro indio” a las políticas neoliberales, mediante la ley de Participación Popular o de municipalización, multiplicaron la presencia indígena como alcaldes y concejales (hombres y mujeres) en casi todas las provincias del país.

Después de la “guerra del gas” de 2003, el gobierno de Carlos Mesa, a fin de tejer algún puente de comunicación con la población indígena paceña y particularmente de la ciudad de El Alto nombró al aymara Nicolás Quenta como Prefecto del departamento de La Paz. En esta coyuntura se abren otros espacios para los indígenas como el de embajadores, son los casos de Elsa Guevara que fue representante en Cuba y otro indígena guaraní en Paraguay.

* Aymara y boliviano. Sociólogo y antropólogo. Es docente en las carreras de antropología y arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y autor de varios libros sobre movimientos indígenas y política. E-mail: eticona@entelnet.bo



Esta pincelada general de la experiencia indígena en la política boliviana, nos muestra su escasa presencia, tomando en cuenta que Bolivia tiene una mayoría de población indígena, según el censo de 2001, el 62% se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo indígena.

La elección del aymara Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente del agringado Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), obedeció principalmente a un estudio de marketing político. El acompañante de Goni debía tener las cualidades opuestas a las del candidato presidencial, que era un empresario minero, parte de la oligarquía q'ara o criolla y muy relacionado con los Estados Unidos (Albó 2002:70). Es decir, aquello que no tenía Goni, lo indio y la pobreza de los sectores mayoritarios del país, representó Cárdenas. Esta experiencia simbólica, fue sin lugar dudas la más importante de la presencia de un indígena, aunque su imagen indígena fue muy bien utilizada para imponer las políticas neoliberales en el país.

“Evo Presidente”

Las elecciones nacionales del 18 de diciembre de 2005 y la obtención del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales el 53,74% de la votación (CNE 2006), atípico en las experiencias electorales del país, materializa por primera vez que un aymara conquiste la presidencia de la república, bajo las reglas de la democracia.

Este hecho no es más que la concreción de la nación movilizada

*Evo Morales,
a comparación de
Víctor Hugo Cárdenas,
no es un indio
“ilustrado en la
universidad”,
sino alguien que
proviene “de abajo”,
desde
“la universidad de la
vida, de la
experiencia”;
pero con
“conciencia social”,
como suele decir en
muchas ocasiones.*

desde octubre de 2003, ahora expresada mediante el “voto universal” y que permite dar un paso más hacia la refundación del país mediante la Asamblea constituyente. En otras palabras, se robustece la fuerza de la nación movilizada “desde abajo”, a través del voto de la ciudadanía, depositando su confianza en uno de sus hijos más representativos: Evo Morales, producto de los últimos 23 años de oposición a las políticas desnacionalizadoras.

Evo Morales, a comparación de Víctor Hugo Cárdenas, no es un indio “ilustrado en la universidad”, sino alguien que proviene “de abajo”, desde “la universidad de la vida, de la experiencia”; pero con “conciencia social”, como suele decir en muchas ocasiones. Evo, nació en el ayllu

Isallavi del cantón Orinoca del sur del departamento de Oruro, la pobreza y la marginalidad impuesta a muchas comunidades andinas por el Estado boliviano, obligó a emigrar junto a su familia al Chapare de Cochabamba, donde inició sus actividades sindicales como secretario de deportes, desde donde ascendió vertiginosamente hasta ser nombrado en 1985 secretario general de su sindicato y posteriormente en 1988 como secretario ejecutivo de la Federación del Trópico y desde 1996 fue presidente del comité de coordinación de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (Contreras 2005: 10). Ferviente defensor de la hoja de coca y contra toda política de erradicación de la misma, por lo tanto un antiimperialista consumado. En otras palabras, representa la experiencia de la nueva lucha sindical y política del movimiento campesino e indígenas aymaras, quechuas, guaraníes y mestizos pobres de Bolivia.

Avances y retos

El triunfo de Evo Morales y el MAS disipó las ideas separatistas de la oligarquía de Santa Cruz y puso fin al ciclo de vida de varios partidos tradicionales y conservadores, como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz, la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes, Acción Democrática Nacionalista (ADN) del extinto Hugo Banzer y la Unión Cívica Solidaridad (UCS), otras fortines de las clases dominantes, que implementaron políticas económicas neoliberales en el país desde 1985.

Aunque el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Gonzalo Sánchez de Lozada logró la cuarta ubicación con el 6 % de electores (CNE 2006). Una de las explicaciones para esto es que “Goni” y su entorno invirtieron mucho dinero en la campaña electoral para captar votos y no quedar anulado, y así patear en el poder legislativo el juicio de responsabilidades que está en curso sobre la masacre en la “guerra del gas” de 2003, donde murieron cerca de 80 personas y un centenar de heridos, por ordenes de Sánchez de Lozada.

Por otro lado, la embajada de Estados Unidos no tuvo otra opción que reconocer la gran victoria electoral de Morales Ayma y con ella aceptar su derrota de intromisión en países latinoamericanos como Bolivia. Ahora, resulta que Evo, aquel acusado de narcotraficante y delincuente es buscado por el embajador norteamericano para iniciar el dialogo diplomático.

El Estado q'ara o criollo boliviano está en sus postrimerías. Evo tiene la misión de convertirse en el primer Presidente indígena; pero a la vez en el último de la actual república excluyente. Construir el puente hacia la Asamblea Constituyente y con ella re-fundar otro modelo de Estado basado principalmente en la experiencia política de sus pueblos indígenas, campesinos y mestizos pobres, es uno de los grandes retos. Además hay otros desafíos inmediatos, como el de nacionalizar los hidrocarburos, redistribuir las tierras a los indígenas y campesinos, afectando a los grandes latifundistas asentados

Otro potencial problema de Evo es con el vicepresidente

García Linera.

En el fondo es una relación del indígena con el mestizo, que quiere coadyuvar a la descolonización.

en el oriente, la amazonía y el chaco boliviano.

Sabemos que desmontar el Estado y descolonizar la sociedad racista no serán tareas fáciles. Pero después de las elecciones del 18 de diciembre de 2005, se comienza a respirar cierto aire de cambio y esperanza. Discutir en distintas esferas sociales, temas como el de la vestimenta de Evo el día de su asunción del mando, el próximo 22 de enero, es signo de que algo está pasando. Este argumento es un buen termómetro para analizar la disputa entre las esferas formalizadas aún dominantes y las nuevas formas de gobernar “desde abajo”, a la que representa Evo.

El “buen vestir” ligado al “terno y la corbata” es muy peculiar en países aún coloniales, porque representa el símbolo del poder político, el status socioeconómico y de raza. Evo Morales viene de la costumbre de vestir la “chompa o jersey”, “chamarra” o “chaqueta”, que ha puesto en figurillas a esa “buena gente” y a los expertos en “etiqueta y protocolo”. Evo en su visita a varios países de Amé-

rica Latina, Europa y Africa, vistió “como siempre” y eso ha causado cierto desagrado en países como España, que no ha perdido la costumbre colonizadora de decir “qué se debe vestir y qué no”. En esta coyuntura de cambios, Evo ha comenzado a combatir los elementos simbólicos del poder de la “élite corbatuda”.

Otro potencial problema de Evo es con el vicepresidente García Linera. En el fondo es una relación del indígena con el mestizo, que quiere coadyuvar a la descolonización. Lamentablemente las grandes experiencias políticas del pueblo indígena con los mestizos son negativas. Por ejemplo, la alianza entre Pablo Zárate Willka, otrora comandante de las fuerzas armadas indígenas en la revolución federal de 1900 y José Manuel Pando, un ambicioso militar que quería el poder para las elites paceñas. Zárate Willka, fue el principal artífice para el triunfo de Pando y la derrota del ejército sureño de Fernández Alonzo. Pero Pando, una vez encastrado en el poder a costa de la indiada, lo hizo encarcelar y asesinar a Zárate Willka (Condarco Morales 1982).

Estamos convencidos que es imprescindible la relación de indígenas con los mestizos, pero ¿cómo hacer que esas relaciones no estén basadas solo en el uso funcional y prácticas de colonialismo interno? El gobierno de Evo y García tiene el mérito de iniciar la caminata por esta senda; pero a la vez, abren la gran incógnita de cómo se desarrollará más adelante. Hasta ahora aparecen algunas muestras preocupantes de la supremacía

mestiza, que ha empezado a usufructuar el poder a costa del indio, y la gran ausencia indígena y campesina en el entorno de Evo y el MAS.

Conclusión

Jichhapi jichaxa o “ahora es cuando”, fue la consigna electoral de Evo Morales y el MAS. En esta nueva etapa poselectoral y de futuro gobierno, habría que agregar a esa frase el de Jichhapi jichaxa mayaki sartañani jan jisk’achasisa o “ahora es cuando tenemos que caminar juntos, sin discriminarnos”.

Bibliografía

- Albó, Xavier. 2002. Pueblos indios en la política. La Paz: Cipca y Plural editores.
- Corte Nacional Electoral. 2006. Resultados. Elecciones generales y de Prefectos 2005. La Paz: CNE.
- Condarco Morales, Ramiro. 1982. Zarate el “Temible” Willka. La Paz: Imprenta renovación.
- Contreras Baspineiro, Alex. 2005. Evo Morales. Una historia de dignidad. La Paz: Ecos.
- Tapia, Luciano (Lusiki Qhispi Mamani). 1995. Ukhamawa jakawisaxa. Así es nuestra vida. Autobiografía de un aymara. La Paz: hisbol.
- Ticona Alejo, Esteban. 2002. Memoria, política y antropología en Los Andes bolivianos. Historia oral y saberes locales. La Paz: Agruco-Plural-Carreras de antropología-arqueología.



ACJ
CIUDAD
FMLGT
IEE
SENDAS
UTOPIA
TERRANUEVA

fun_terraneva@terraneva.org
Dirección: Lérida E14-63 y Lugo
Telefax: 2525-432, 3226-770

Grupo
Democracia y
Desarrollo Local 

Con el apoyo de:

